



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Unidad de Posgrado

**La efectividad de la terminación anticipada en el
marco del Código Procesal Penal: análisis en el Distrito
Judicial de Lima Norte en el periodo 2011-2015**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con
mención en Ciencias Penales

AUTOR

Bertha Gladys GÁLVEZ BARRAZA

ASESOR

Mg. Ricardo Alberto BROUSSET SALAS

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Gálvez, B. (2018). *La efectividad de la terminación anticipada en el marco del Código Procesal Penal: análisis en el Distrito Judicial de Lima Norte en el periodo 2011-2015*. Tesis para optar grado de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales. Unidad de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

HOJA DE METADATOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO ORCID DEL AUTOR:

Bertha Gladys Gálvez Barraza

CÓDIGO ORCID DEL ASESOR:

<https://orcid.org/0000-0002-6262-2759>

DNI DEL AUTOR:

10383303

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

No aplica

INSTITUTO QUE FINANCIA PARCIAL O TOTALMENTE LA INVESTIGACIÓN

No aplica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DONDE SE DESARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN. DEBE INCLUIR LOCALIDADES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

La investigación se desarrolló en la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima Norte, recabando información de las bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad de Lima, bibliotecas virtuales y portal web del Poder Judicial y del Ministerio Público.

AÑO O RANGO DE AÑOS QUE LA INVESTIGACIÓN ABARCÓ:

La investigación y el recaudo de la información se desarrolló desde febrero del año 2016 hasta mayo del 2018. Posteriormente se realizó el complemento de la misma hasta agosto de 2018.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned at the bottom center of the page.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Unidad de Post Grado

ACTA DE GRADO DE MAGÍSTER EN DERECHO

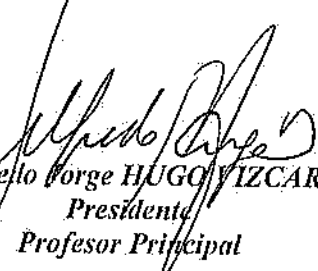
En la ciudad de Lima, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, bajo la Presidencia del Dr. Silfredo Jorge Hugo Vizcardo y con la asistencia de los Profesores: Mg. Ricardo Alberto Brousset Salas, Mg. Víctor Manuel Cubas Villanueva, Dr. Raúl Belealdo Pariona Arana, Mg. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, y la postulante al Grado Académico de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, Bachiller Bertha Gladys GÁLVEZ BARRAZA, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su tesis titulada: "LA EFECTIVIDAD DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: ANÁLISIS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE EN EL PERÍODO 2011-2015".

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación:

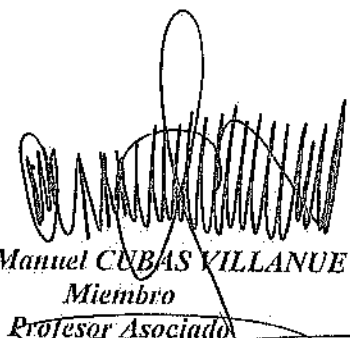
APROBADA POR UNANIMIDAD CON NOTA DIECIOCHO (18)

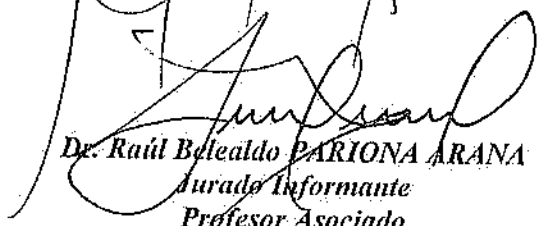
A continuación el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Derecho y Ciencia Política se le otorgue el Grado Académico de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales a la Bachiller en Derecho Bertha Gladys GÁLVEZ BARRAZA.

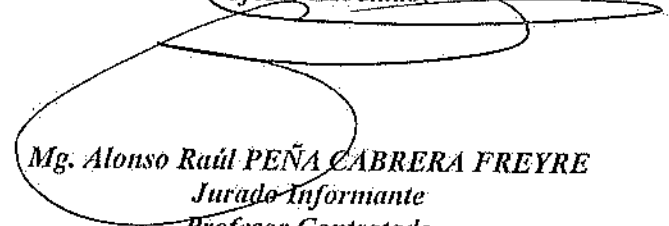
Se extiende la presente Acta en tres originales y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se dio por concluido el acto académico de sustentación.


Dr. Silfredo Jorge HUGO VIZCARDO
Presidente
Profesor Principal


Mg. Ricardo Alberto BROUSSET SALAS
Asesor
Profesor Principal


Mg. Víctor Manuel CUBAS VILLANUEVA
Miembro
Profesor Asociado


Dr. Raúl Belealdo PARIONA ARANA
Jurado Informante
Profesor Asociado


Mg. Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE
Jurado Informante
Profesor Contratado

A mi madre Roberta, por su amor y apoyo
A mi hija Nicole, por hacerme feliz

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	II
ÍNDICE GENERAL.....	III
LISTA DE CUADROS	VII
LISTA DE FIGURAS	VIII
PALABRAS CLAVES	IX
KEY WORDS	X
RESUMEN	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCCIÓN	01
 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	 03
1.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	03
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	04
1.2.1. Problema general.....	04
1.2.2. Problemas específicos.....	05
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.....	05
1.3.1. Delimitación espacial	05
1.3.2. Delimitación temporal	06
1.3.3. Delimitación social	06
1.3.4. Delimitación física	06
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	06
1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	07
1.6. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.....	07
1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	08
1.8. INDAGACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	
PRECEDENTES.....	09
1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	10
1.9.1. Objetivo General	10
1.9.2. Objetivos Específicos.....	10
1.10.FORMULACION DE HIPOTESIS	10
1.10.1 Hipótesis general	11
1.10.2 Hipótesis específicas	11

1.11. VARIABLES	11
1.11.1 Primera Variable independiente	11
1.11.2. Primera Variable dependiente	12
1.11.3 Segunda Variable independiente.....	12
1.11.4. Segunda Variable dependiente	12
 CAPÍTULO II: NOCIONES GENERALES DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL.....	12
 2.1. INTRODUCCIÓN.....	12
2.2. SISTEMA ACUSATORIO Y JUSTICIA PENAL NEGOCIADA	14
2.2.1. Sistema Acusatorio	14
2.2.2. La Justicia Penal Negociada.....	16
2.2.3. Antecedentes Legislativos de la Justicia Penal Negociada.....	17
2.2.3.1. Estados Unidos/plea bargaining.....	17
2.2.3.2. Italia / patteggiamento	22
2.2.3.3. Alemania	27
2.2.3.4. España	30
2.2.3.5. Portugal.....	32
2.2.4. Principios que rigen la negociación.....	33
2.2.4.1. Principio de Legalidad	33
2.2.4.2. Principio de Oportunidad.....	36
2.2.4.3. Presunción de Inocencia	39
2.2.4.4. Principio de Economía Procesal	40
2.2.4.5. Principio de Celeridad Procesal	41
2.2.4.6. Principio de Consenso	43
2.2.5. Sistema Acusatorio y Justicia Penal Negociada en el Código Procesal Penal	45
2.2.5.1. Procesos comunes.....	46
2.2.5.1.1. Investigación Preparatoria	46
2.2.5.1.2. Etapa Intermedia	49
2.2.5.1.3. Juicio Oral.....	51
2.2.5.2. Terminación Anticipada y otros Procesos Especiales.....	53
2.2.5.2.1. Proceso Inmediato.....	53

2.2.5.2.2. Proceso por razón de la Función Pública	58
2.2.5.2.3. Proceso de Seguridad	58
2.2.5.2.4. Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal.....	60
2.2.5.2.5. Proceso de Terminación Anticipada	61
2.2.5.2.6. Colaboración Eficaz.....	63
2.2.5.2.7. Proceso por Faltas.....	66
2.2.6. La Conformidad como Conclusión Anticipada	67
2.2.6.1. Tratamiento normativo en el Código Procesal Penal ..	67
2.2.6.2. La Conformidad Procesal y la Terminación anticipada incluidos en criterios de oportunidad, en el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116	69
 CAPÍTULO III: TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL PERUANO	72
3.1. ANTECEDENTES.....	72
3.2. CONCEPTUALIZACIÓN	72
3.3. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA	75
3.3.1. Principio de Legalidad	75
3.3.2. Principio de Celeridad y Economía Procesal.....	76
3.3.3. Presunción de Inocencia	78
3.3.4. Juez Imparcial	79
3.4. NATURALEZA JURÍDICA.....	81
3.5. CARACTERÍSTICAS	83
3.6. REQUISITOS.....	89
3.7. DELITOS EN QUE PROCEDE	89
3.8. ETAPAS O FASES	90
3.9. ACTUACIÓN DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN.....	98
3.10.EFECTOS.....	113
3.11.RECURSOS.....	114
3.12.TERMINACION ANTICIPADA EN EL PROCESO INMEDIATO	115
3.13.TERMINACION ANTICIPADA EN EL DERECHO COMPARADO	117

3.13.1. Legislación argentina.....	117
3.13.2. Legislación colombiana	119
3.13.3. Legislación chilena	122
 CAPÍTULO IV: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	130
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	130
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	130
4.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO	130
4.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	131
4.4.1. Entrevistas.....	131
4.4.2. Análisis documental.....	131
4.4.3. Muestreo.....	131
4.5. LA MUESTRA	131
 CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS - ESTADÍSTICAS.....	132
5.1. SÍNTESIS DEL TRABAJO DE CAMPO	132
5.2. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA	133
5.3. PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS CON SENTENCIAS ANTICIPADAS.....	143
5.4. EVALUACIÓN DE LAS ENTREVISTAS	145
5.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	162
5.5.1. Contrastación de Hipótesis general	162
5.5.2. Contrastación de las Hipótesis específicas.....	162
 VI. CONCLUSIONES	163
VII. RECOMENDACIONES.....	164
VIII. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA	166
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	167
X. ANEXOS.....	175

LISTA DE CUADROS

CUADRO N° 1	26
CUADRO N° 2	125
CUADRO N° 3	136
CUADRO N° 4	137
CUADRO N° 5	138
CUADRO N° 6	139
CUADRO N° 7	140
CUADRO N° 8	142
CUADRO N° 9	143
CUADRO N° 10	143

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 1.....	57
GRÁFICO N° 2.....	60
GRÁFICO N° 3.....	62
GRÁFICO N° 4.....	65
GRÁFICO N° 5.....	134
GRÁFICO N° 6.....	135
GRÁFICO N° 7.....	135
GRÁFICO N° 8.....	136
GRÁFICO N° 9.....	137
GRÁFICO N° 10.....	138
GRÁFICO N° 11.....	139
GRÁFICO N° 12.....	140
GRÁFICO N° 13.....	141
GRÁFICO N° 14.....	142
GRÁFICO N° 15.....	144
GRÁFICO N° 16.....	145
GRÁFICO N° 17.....	150
GRÁFICO N° 18.....	151
GRÁFICO N° 19.....	152
GRÁFICO N° 20.....	153
GRÁFICO N° 21.....	155
GRÁFICO N° 22.....	156
GRÁFICO N° 23.....	157
GRÁFICO N° 24.....	158
GRÁFICO N° 25.....	159
GRÁFICO N° 26.....	160
GRÁFICO N° 27.....	161

PALABRAS CLAVES:

Proceso penal, etapa intermedia, terminación anticipada, efectividad, principio de consenso, economía procesal, celeridad procesal, sistema acusatorio, mecanismo de simplificación de proceso, negociación de penas.

KEY WORDS:

Criminal process, intermediate phase, advanced termination, effectiveness, principle of consensus, procedural economy, procedural celerity, accusatorial system, procedure of process simplification, punishments negotiation.

RESUMEN:

Se presenta un análisis descriptivo y explicativo de una investigación jurídico social orientada a identificar en qué medida las disposiciones legales y la jurisprudencia han influido en la efectividad de la aplicación del Proceso Especial de Terminación Anticipada, como mecanismo de simplificación del proceso y de negociación de penas; se desarrolla su conceptualización, naturaleza, diseño normativo a nivel nacional y de legislación comparada, así como la aplicación que le han dado los operadores jurídicos del Distrito Judicial de Lima Norte (Jueces, Fiscales y Abogados) en el periodo 2011-2015, con la finalidad de resolver los conflictos generados por los comportamientos que infringen la ley penal, aplicando este mecanismo bajo los Principios de Legalidad, Celeridad, Economía Procesal, Presunción de Inocencia y del derecho al Juez Imparcial; asimismo, se desarrolla la metodología de investigación, la contrastación y comprobación de las hipótesis, las conclusiones y recomendaciones, para finalmente presentar una propuesta de proyecto de ley, que busca alcanzar que un proceso sea rápido y eficaz en equilibrio con el debido respeto de los derechos fundamentales del imputado, fin inspirado con la dación del Código Procesal Penal de 2004.

ABSTRACT:

A descriptive and explicative analysis of a social-legal research was introduced, oriented towards identifying to what extent the legal provisions and the jurisprudence have influenced the effective application of the Special Process of Advanced Termination, as a procedure of process simplification and punishments negotiation. Its conceptualization, nature, nationwide regulatory design and compared legislation, as well as the application provided by legal professionals of the Judicial District of Lima Norte (Judges, Prosecutors, and Attorneys) was developed in the period of 2011-2015, with the purpose of solving conflicts generated by behaviors that infringe on the criminal law, by applying this procedure under the Principles of Legality, Celerity, Procedural Economy, Presumption of Innocence and of an Impartial Judge. The research methodology, the comparison and hypothesis verification, and the conclusions and recommendations, were also developed to finally submit a bill proposal aimed at making the process faster and more effective with due respect to the accused's fundamental rights. This purpose was inspired with the submission of the Criminal Process Code, 2004.

INTRODUCCIÓN

El interés en desarrollar LA EFECTIVIDAD DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: ANÁLISIS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE PERIODO 2011-2015, radica en que durante mi desempeño como Fiscal Adjunta Provincial Penal del Distrito Fiscal de Lima Norte he advertido que una de las mejores formas de afrontar la carga procesal es concluir los casos haciendo un mayor uso de esta institución, sin embargo actualmente encontramos en nuestra norma procesal límites para su aplicación.

Como sabemos, el proceso de terminación anticipada fue incorporado en el Código Procesal Penal de 2004 como uno de los procesos especiales, en el marco de la aplicación del sistema acusatorio de justicia negociada y de una política criminal en respuesta al incremento de la criminalidad en el país. La aplicación de este proceso ha ido incrementándose paulatinamente, aun cuando en el camino su aplicación se ha visto limitada por razones normativas y de interpretación realizada por el máximo organismo jurisdiccional del país.

Actualmente la terminación anticipada como proceso especial no ha alcanzado su cúspide de efectividad; por tal razón, la presente tesis aborda las causas que limitan o restringen este desarrollo, planteando propuestas para una adecuada reforma legislativa.

Cabe señalar que el término efectividad¹ implica el logro de las metas, con adecuado uso de los recursos y del tiempo; considerándose a la efectividad como el equilibrio entre la eficacia² y eficiencia³.

La Tesis se ha dividido en cinco capítulos: el **primero**, referido al “Planteamiento del Problema”, se definen los problemas que enmarcan el trabajo de investigación, justificación, importancia, factibilidad del proyecto, objetivos y demás características metodológicas que fueron tomadas en cuenta.

El **segundo capítulo** se centra en el estudio de las “Nociones Generales de la Terminación Anticipada en el Proceso Penal” y desarrollo doctrinario de la terminación anticipada como parte del sistema acusatorio de justicia penal negociada.

El **tercer capítulo** trata sobre la “Terminación Anticipada en el Proceso Penal Peruano”, en ésta se aborda todo el estudio doctrinario de este proceso especial, fijando la atención en el tratamiento de esta institución en el Código Procesal Penal de 2004.

El **cuarto capítulo**, referido a la “Metodología de la Investigación” detalla el tipo y diseño de investigación, la descripción del método, las técnicas de recolección de datos y la muestra para el trabajo de campo.

En el **capítulo quinto** se hace una contrastación y comprobación de las hipótesis, así como, el análisis estadístico de la muestra y de las entrevistas.

¹ Stephen R. Covey en “Los 7 hábitos de la Gente Altamente Efectiva” considera que la efectividad es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entre la producción y la capacidad de producción.

² Desde un concepto administrativo, los autores Stephen P. Robbins y Mary Coulter definen la **eficacia** como “hacer las cosas correctas”, es decir las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos. En tanto que la **eficiencia** concierne a los medios para hacer las cosas, la eficacia tiene que ver con los fines, con la consecución de las metas de la organización.

³ La Real Academia de la Lengua Española define **eficiencia** como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Véase: <<http://dle.rae.es/?id=EPVwpUD> fecha 09 de mayo de 2016.

Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, propuesta de modificatoria legislativa y anexos, que espero contribuyan en mejorar la aplicación del proceso especial de terminación anticipada dentro de la legislación procesal penal.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Las reformas producidas en las últimas décadas, en las legislaciones procesales a nivel internacional, se han preocupado en la incorporación de figuras jurídicas como mecanismos que permitirán maximizar los recursos en el sistema de justicia penal con salidas alternativas del proceso penal común.

En efecto, el autor colombiano Molina López señala que “la situación del proceso penal en la actualidad es, principalmente, consecuencia del enfoque netamente económico con el cual se ha venido legislando en las últimas reformas procesales penales” (Molina López, 2010:35, Web).

Así, uno de los beneficios al cual se le ha dado importancia, deviene de la aceptación de la responsabilidad penal por parte del imputado y las consecuencias procesales que ello acarrea.

El Código Procesal Penal de 2004 (NCPD)⁴, cuya implementación se viene culminando progresivamente en nuestro país, acoge el sistema acusatorio, y como parte de la política criminal inserta dos mecanismos de simplificación de procesos y negociación de penas, la terminación anticipada y la conformidad del acusado, la primera aplicada en la etapa de investigación preparatoria y la segunda en la de juzgamiento.

La aceptación y adecuada aplicación de este proceso especial, ha sido paulatino y se han adoptado iniciativas de aclarar las inquietudes y corregir errores cometidos por los diversos operadores jurídicos- el más significativo desde el ámbito jurisdiccional fue el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116- donde se fijaron criterios que son un marco de referencia importante a considerar al momento de su aplicación.

Con esta tesis, pretendo determinar si la institución de la terminación anticipada viene cumpliendo con los objetivos para la cual fue incorporada en nuestra legislación procesal penal, atendiendo a los altos niveles de criminalidad en nuestro país; poniendo especial énfasis en la opinión vertida por los operadores jurídicos que día a día vienen aplicando este proceso especial.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema general

¿En qué medida los dispositivos legales y la jurisprudencia han influido en la efectividad de la aplicación de la terminación anticipada en el Proceso Penal?

⁴ Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio de 2004 en el Diario Oficial “El Peruano”

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cómo ha influido el artículo 468° del Código Procesal Penal, relativo a la oportunidad de la terminación anticipada, en la efectividad de su aplicación?
- ¿Cuáles son las observaciones a la interpretación que se hace al Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, sobre la oportunidad de la aplicación de la terminación anticipada solo en la fase de la investigación preparatoria?
- ¿En qué medida el Decreto Legislativo 1194, que obliga al fiscal a la incoación del Proceso Inmediato en los supuestos de flagrancia, suficiencia probatoria, confesión, delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, ha influido en la efectividad de la terminación anticipada?

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 Delimitación espacial

El ámbito de estudio del presente proyecto son los expedientes relacionados a procesos de Terminación Anticipada registrados en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el 1° Juzgado de Investigación Preparatoria y 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte (Quinto Juzgado Penal en Adición a sus Funciones), que aplicaron el Código Procesal Penal de 2004 en los casos de Delitos Especializados en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

1.3.2 Delimitación temporal

El ámbito temporal en que se centrará la presente tesis son los procesos de terminación anticipada seguidos en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, correspondiente al periodo de los años 2011 al 2015.

1.3.3 Delimitación social

Tendrá como objeto de estudio los operadores jurídicos consistentes en los jueces, fiscales y abogados defensores públicos que intervienen en el proceso de terminación anticipada, considerando los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal.

1.3.4 Delimitación física

Informes estadísticos referidos a expedientes de procesos de terminación anticipada, dentro del estudio previsto en la delimitación espacial y temporal.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Tesis titulada “Efectividad de la Terminación Anticipada en el marco del Código Procesal Penal: Análisis en el Distrito Judicial de Lima Norte periodo 2011-2015”, justifica su estudio en razón de que este proceso especial fue incorporado en el Código Procesal Penal para evitar la congestión de los casos del sistema de justicia penal, sin embargo, ha tenido limitaciones en su aplicación, que disminuyen su efectividad; por lo que es necesario plantear propuestas de mejoras a fin de que cumpla el Estado con su obligación de “llevar adelante procesos rápidos y eficaces, que conlleve a la expedición de sentencias que solucionen el conflicto generado por el delito,

satisfaciendo las legítimas expectativas de punición y resarcimiento, bajo la irrestricta observancia de las garantías establecidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que rigen un proceso penal en un Estado democrático”⁵.

1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente tesis se realiza porque con el incremento de la criminalidad en nuestro país, es necesario que analicemos la efectividad de los mecanismos que fueron incorporados en nuestro sistema jurídico a fin de contrarrestar esta problemática social. Por ende, esta tesis busca determinar los niveles y razones de efectividad o no efectividad del proceso de terminación anticipada, a fin de plantear propuestas legislativas que mejoren su aplicación y así cumplir con sus objetivos en la política criminal.

1.6 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Ha sido factible efectuar la presente tesis, por las razones siguientes:

- La accesibilidad de obtener la información necesaria de los expedientes judiciales con procesos de terminación anticipada en el Distrito Judicial de Lima Norte, debido a la labor desempeñada como Fiscal Adjunta Provincial de Lima Norte.

⁵ Conforme a los fines establecidos en la Exposición de Motivos del Código Procesal Penal de 2004.

- Contar con los recursos económicos necesarios para realizar la investigación.
- Contar con la asesoría académica del profesor de la Cátedra de la Universidad, quien orienta el desarrollo de la investigación.

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La limitación principal de esta investigación es la escasa información estadística del Poder Judicial y el Ministerio Público respecto a la aplicación del proceso especial de terminación anticipada; las que se han realizado se limitan a registrar las Audiencias donde se ventilaron los requerimientos de los Procesos de Terminaciones Anticipadas y a registrar las Sentencias que concluyeron aprobando el Acuerdo de Terminación Anticipada (Sentencias Anticipadas).

Después de efectuar el requerimiento de información al Área de Estadísticas del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial respecto a los expedientes tramitados en el distrito judicial de Lima Norte, he sido informada que la data a mayor detalle de las Audiencias y Sentencias de este instituto procesal, se encuentra en el sistema circunscrito a los Juzgados que siguieron procesos de Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima Norte, en los que se viene aplicando el Código Procesal Penal desde el año 2011; por consiguiente, procedí a delimitar esta investigación a los Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima Norte del periodo 2011 al 2015.

1.8 INDAGACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRECEDENTES

Al realizar la búsqueda en los archivos de las Tesis de Maestría y Doctorado en diversas Universidades Públicas y Privadas de Lima; como por ejemplo: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad de Lima, Universidad San Martín de Porres, entre otras; se ha encontrado lo siguiente:

- En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se sustentó la Tesis titulada “Principales factores que influyen en la mayor aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la provincia de Ilo (Distrito Judicial de Moquegua) a partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en dicha circunscripción (01 de abril de 2008)”, con la cual el maestrista Diego Salinas Mendoza obtuvo el grado de Magister en el año 2010.
- En la Universidad Nacional Federico Villarreal se sustentó la Tesis titulada “La Terminación Anticipada y los efectos en la Descarga Procesal”, con la cual la maestrista Nelba Doris León García obtuvo el grado de Magister en el año 2016.

Siendo que, de la revisión de dichas investigaciones, si bien los citados temas guardan relación con la presente tesis, sin embargo, no corresponden al mismo problema que es objeto del proyecto.

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.9.1 Objetivo General

Identificar en qué medida los dispositivos legales y la jurisprudencia han influido en la aplicación efectiva de la terminación anticipada como mecanismo de simplificación de procesos y de negociación de penas.

1.9.2 Objetivos Específicos

1. Identificar la influencia del artículo 468° del Código Procesal Penal, relativo a la oportunidad de la terminación, en la efectividad de la terminación anticipada.
2. Identificar las observaciones al Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, respecto a la interpretación que hacen los Jueces de la Corte Suprema, de que es aplicable la terminación anticipada solo en la etapa de investigación preparatoria.
3. Identificar en qué medida la vigencia del Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la Terminación Anticipada en el Proceso Inmediato, ha influido en la aplicación efectiva de la terminación anticipada.

1.10 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

1.10.1 Hipótesis General

Los dispositivos del Proceso Especial de Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal e interpretaciones en la Jurisprudencia limitan la efectividad de la Terminación Anticipada, como mecanismo de simplificación de procesos y negociación de penas.

1.10.2 Hipótesis Específicas

Primera.- El artículo 468° del Código Procesal Penal, referido a la oportunidad de solicitar la Terminación anticipada del proceso solo en la etapa de Investigación Preparatoria, ha influido negativamente en su aplicación efectiva.

Segunda.- La interpretación que hacen los Magistrados de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 es desaprobado por los operadores jurídicos, toda vez que restringe la aplicación de la terminación anticipada solo a la etapa de investigación preparatoria.

Tercera.- La vigencia del Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la Terminación Anticipada en el Proceso Especial Inmediato, ha influido positivamente en elevar los niveles de efectividad del proceso de terminación anticipada.

1.11 VARIABLES

1.11.1 Primera Variable independiente

El artículo 468° del Código Procesal Penal e interpretación que se realiza en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 a la institución de la Terminación Anticipada.

1.11.2 Primera Variable dependiente

Limitan la aplicación efectiva de la institución de la terminación anticipada como mecanismo simplificación de procesos y negociación de penas.

1.11.3 Segunda Variable independiente

El Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la terminación anticipada en el Proceso Especial Inmediato.

1.11.4 Segunda Variable dependiente

Influye positivamente en elevar los niveles de efectividad del proceso de terminación anticipada.

CAPÍTULO II: NOCIONES GENERALES DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL

2.1 INTRODUCCIÓN

La necesidad de contar con procesos ágiles y eficientes, nos ha conducido a insertar instituciones propias del derecho anglosajón y para tal efecto ha sido necesario modificar nuestro sistema jurídico a fin de relacionarlo con el sistema de *Common Law*.

Una de las instituciones propias del sistema anglosajón es lo que en la legislación nacional conocemos como el proceso de terminación anticipada, cuyos antecedentes jurídicos lo encontramos en las legislaciones norteamericana, italiana, alemana y española; siendo ello así, he previsto iniciar esta investigación con el estudio de instituciones homólogas de las legislaciones ya mencionadas.

A nivel continental países como Colombia, Chile y Argentina han incorporado instituciones parecidas a la terminación anticipada con los mismos objetivos jurídico - sociales que los nuestros. En nuestro país existen diversos autores que han desarrollado el proceso de terminación anticipada desde su aprobación e inserción en la legislación nacional; la constante de estos estudios ha sido las críticas efectuadas a esta institución como un proceso que responde al sistema acusatorio, pero que afectaba las garantías de un debido proceso y la renuncia a los derechos que le asisten al imputado.

Al respecto, a nivel jurisprudencial, la Corte Suprema ha emitido dos Acuerdos Plenarios; el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116⁶ de fecha 18 de julio de 2008 referido a la institución de la Conformidad Procesal que en algunos de sus fundamentos desarrolla aspectos relacionados a la Terminación Anticipada, y el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116⁷ de fecha 13 de noviembre de 2009 que realiza un análisis jurídico de la institución de terminación anticipada, esclareciendo diversas dudas conceptuales y de su aplicación.

En este capítulo desarrollaremos el contexto de la incorporación del proceso de terminación anticipada en nuestro sistema jurídico penal como parte de una política criminal, veremos sus antecedentes, las características del

6

Véase:<<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/117bb8004075b9d0b63ff699ab657107/Auerdo+Plenario+5-2008+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=117bb8004075b9d0b63ff699ab657107>> fecha 29 de abril de 2016.

7

Véase:<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8246b4004075b97fb5e9f599ab657107/AUERDO_PLENARIO_05-2009-CJ116_301209.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8246b4004075b97fb5e9f599ab657107> de 9 de mayo de 2016.

sistema acusatorio y sistema de justicia negociada, los cambios en el proceso penal común y las características principales de los procesos especiales regulados en el Código Procesal Penal de 2004.

2.2 SISTEMA ACUSATORIO Y JUSTICIA PENAL NEGOCIADA

La crisis del proceso penal traducido principalmente en la congestión de los casos, el incremento de la tasa de delitos, la escasez de recursos financieros y humanos, la burocratización en la administración de justicia, que se visualiza hace ya más de un siglo en ambos sistemas de derecho, el continental y angloamericano, ha provocado que los países efectúen cambios estructurales en sus sistemas procesales. El tiempo nos ha mostrado que los países que modificaron sus modelos procesales a uno acusatorio, e incorporaron instituciones basadas en la justicia penal negociada, han tenido mejores resultados al afrontar estos problemas.

2.2.1 Sistema Acusatorio

Sobre sus inicios, tenemos que el autor Neyra Flores, señala que en Grecia los juicios se desarrollaban en un tribunal de jurado denominado *Heliea* instituido por Solón, pero más tarde se usó la palabra más general como equivalente de tribunal, integrado por voluntarios, lo que significó atribuir a la ciudadanía la administración de justicia; y posteriormente las reformas de Solón fueron intensificadas por Pericles, apareciendo en el siglo V (a.c), el jurado popular como manifestación por excelencia del sistema aplicativo del orden jurídico, el cual se encontraba integrado por hombres mayores de treinta años, procediéndose anualmente al sorteo de 5000 jurados más 1000 suplentes, los designados eran distribuidos en diez secciones y debían prestar un juramento; siendo que la intervención de los jurados, el desarrollo del procedimiento oral, público y contradictorio, con inmediatez probatoria, era consustancial al sistema acusatorio en ese momento (2010: 64-65).

Añade Neyra Flores que otro tribunal de Grecia fue el Consejo del *Areópago*, que se desarrolló desde el siglo V (a. c) hasta el siglo V (d. c) que tenía competencia para conocer delitos graves como homicidios e incendios provocados que merecían pena de muerte; y de otro lado, en Roma, tenemos “las Asambleas o Comicios podían ser por Centurias o tribunicios, según su origen, organización y competencia. Si se tiene como base que los romanos se dividieron en clases, y a estas clases se les denominó Centurias, según la riqueza que tenían, ellos componían esta asamblea: La asamblea de los centuriados tenía entre sus competencias la de actuar como tribunal en materia criminal” (Neyra Flores. 2010: 70).

Salas Beteta menciona acerca de las características del sistema acusatorio, señalando lo siguiente:

- “1) El proceso penal importa un conjunto de principios y garantías constitucionales que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de los sujetos procesales.
- 2) El fin único del proceso penal no es la imposición de la pena sino solucionar de mejor manera el conflicto derivado del delito.
- 3) Las víctimas no solo tienen derecho a una reparación económica sino a una reparación integral.
- 4) Existe una clara división de funciones que los sujetos procesales deben de cumplir en el proceso penal. La separación de funciones implica que las dos fases fundamentales de la persecución penal que tiene a cargo el Estado sean desarrolladas por órganos diferentes. Así, el nuevo marco procesal encarga la imputación penal al Ministerio Público y el juzgamiento al Poder Judicial. Esta división garantiza que el juzgador – al momento de desarrollar el juicio y emitir una sentencia – no se vea afectado por el prejuicio que genera la labor investigadora. Todo investigador busca hallar elementos de convicción que acreditan la responsabilidad del imputado en la comisión de los hechos. En cambio, el decidor – como lo es el juez – debe de ser imparcial
- 5) La investigación es dirigida por el Ministerio Público, órgano constitucional autónomo que le añade una calificación jurídica y que,

asimismo, cuenta con la titularidad de la acción penal pública. El fiscal ejerce la acción penal atendiendo al principio de legalidad procesal, que le obliga a ejercerla ante la existencia de elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible y la presunta responsabilidad del investigado.

- 6) Disponibilidad de la acción penal, justificada por el principio de oportunidad que es una excepción del principio de legalidad.
- 7) Intervención del juez de investigación preparatoria, a fin de que se controle la legalidad y el respeto de los derechos del imputado durante los actos de investigación del fiscal, decida acerca de los pedidos de las partes y, posteriormente, controle la procedencia de la acusación o, de ser el caso, del sobreseimiento.
- 8) El juicio oral, como la fase del proceso en que se determina la responsabilidad del acusado en atención a las pruebas que se actúan en la audiencia.” (Salas Beteta. 2011:19 y ss)

Peña y Frisancho refieren que el “Sistema Acusatorio viene informado por una serie de exigencias constitucionales que se encuentran consagradas en la Constitución Política del Estado, tales como: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, a la pluralidad de Instancia, motivación a las decisiones jurisdiccionales, publicidad del juicio, derecho irrestricto de defensa (gratuidad en la defensa) a través de los Defensores de Oficio, derecho al juez natural predeterminado por ley, entre otras garantías constitucionales”. Agregan que “el Principio de Contradicción y la existencia de un Fiscal, como sujeto encargado de llevar adelante la acusación, son los presupuestos fundamentales que garantizan plenamente la imparcialidad del órgano enjuiciador” (Peña y Frisancho. 2003: 55 y s).

2.2.2 La Justicia Penal Negociada

La justicia penal negociada se origina como una alternativa para reducir costos económicos, agilizando el proceso; es decir, como un medio de aplicación del principio de economía procesal que conlleva a ahorrar tiempo y que exista eficiencia en la administración de justicia.

Esta propuesta procesal tiene sus raíces en el sistema anglosajón que posteriormente fue recogida por un grupo de países, cuyos ordenamientos jurídicos están fundamentados en el sistema de derecho continental europeo, incorporando en sus legislaciones propias del derecho anglosajón, a fin de acelerar los procesos penales; teniendo al *Patteggiamento* (negociación) en la legislación Italiana, el *Absprache* (acuerdos negociados) en la alemana y la *Conformidad* en la española.

Posteriormente, otros países con un sistema jurídico de tradición continental como el latinoamericano, ante la ineficacia de resolver el problema de sobrecarga judicial con un sistema jurídico orientado en el principio de legalidad y cuya situación se contraponía al éxito obtenido por países como Alemania, Italia y España, decidieron incorporar instituciones similares, además de considerar a la *Plea bargaining* (negociación de penas) del sistema angloamericano norteamericano.

2.2.3 Antecedentes Legislativos de la Justicia Penal Negociada

La Justicia Penal Negociada fue incorporada en las legislaciones de diversos países europeos, mayormente influenciados por la *Plea bargaining*, que puede ser considerada como su institución cúspide de influencia anglosajona.

2.2.3.1 Estados Unidos / plea bargaining

El plea bargaining, traducido como “negociación de penas”, es el modelo de justicia penal negociada estadounidense por el cual el fiscal y la defensa se sientan a determinar la posibilidad de un acuerdo sobre el resultado final del proceso penal. Esta negociación es previa al juzgamiento; el acusado debe declararse culpable de los hechos delictivos a cambio de beneficios en las penas, sean cuantitativas (*quantum* de la pena)

o cualitativas (clase de pena), o en los cargos considerados por el Ministerio Público.

A opinión de Orlando Muñoz Neira (2006: 211 y s) una de las razones que impulsa la negociación entre fiscal e implicado judicial es la “dificultad probatoria” evitando el desgaste procesal que un juicio implica; la defensa, claro está, también valora las armas probatorias de que dispone y con base en éste y otros criterios tomará una decisión.

Respecto a la víctima, deberá ser informada del acuerdo y también puede ser escuchada en la audiencia por el juez, pero no puede participar en el desarrollo de la negociación.

Se dice que el *plea bargaining*, es una modalidad del *guilty plea* (declaración de culpabilidad), que se estableció hace más de 100 años en Estados Unidos, de forma consuetudinaria, sin asidero legal ni jurisprudencial hasta los años setenta donde recién se reconoce de forma jurisprudencial. Pero esta práctica es exportada luego de la segunda guerra mundial a los países de Europa, quienes lo acogen bajo su propia concepción, así en Alemania se regula el *absprache* y en Italia el *patteggiamento*.

Para entender mejor la figura, debemos remontarnos a los Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando el pensamiento iluminista⁸ advirtió que el crimen no era un asunto privado, sino

⁸ Se denomina Iluminismo al “movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, conocido como el *siglo de las luces* y tuvo gran influencia a nivel cultural, político, social y espiritual. Los pensadores del iluminismo establecían que la razón humana podía construir una mejor sociedad sin desigualdades y garantizando los derechos individuales de cada individuo, como también, desarrollar la educación, política y administración de un país. El movimiento comenzó en Inglaterra con el filósofo Locke, y se desenvolvió en varios sentidos, en Francia con Pierre Bayle, François-Marie Arouet más conocido como Voltaire, Helvetius, Diderot, d’Alembert, Holbach, y en Alemania con Reimans, Mendelsonhn, Nicolai, Lessing, culminando con Immanuel Kant”. En: *Significados.com*. Disponible en: <https://www.significados.com/iluminismo/>. fecha 15 de mayo de 2016.

que debería ser una preocupación de toda la sociedad de manera tal que el sistema penal debería servir a los intereses sociales y no a las víctimas individuales, hecho por el cual las colonias estadounidenses empezaron a mudarse al sistema de fiscales públicos, con facultades de discrecionalidad. Donde el fiscal posee una amplia discrecionalidad para realizar acuerdos con el imputado, y el juez se atiene a éstos, salvo que sean ilegales, en tal caso, los desaprobará. La discrecionalidad del fiscal, fue un gran problema jurídico-social, que requirió el pronunciamiento del Tribunal Supremo de EEUU, determinando su límite constitucional en el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, sustentado en la quinta enmienda de su constitución, que está relacionada con el debido proceso⁹.

Sobre el principio del debido proceso, Muñoz Neira expresa que “la decisión de acusar no puede soportarse en un estándar injustificado tal como sería la raza, la religión o cualquier otra calificación arbitraria, pero sobre el acusado pesa la carga de demostrar, con evidencia clara y convincente, que la administración de la justicia criminal se ha dirigido exclusivamente contra una clase particular de personas con un propósito tan inicuo y opresivo que en el fondo implica una denegación del principio de igualdad ante la ley”. (cf. Muñoz Neira, 2006: 207 y s).

⁹ “Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.- Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le forzará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.”

En: http://www.wikiwand.com/es/Quinta_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos. fecha 15 de mayo de 2016.

En cuanto a la declaración de culpabilidad que realiza el acusado, el juez efectuará los siguientes actos: 1) interrogará al acusado respecto a su voluntad de declararse culpable y si esta decisión fue realizada sin coerción o por indebidas promesas por parte del fiscal, 2) comunicará al acusado que tiene derecho a declararse inocente y de exigir un juicio y 3) revisará si la declaración de culpabilidad coincide con los hechos. Si el juez determina que la declaración del acusado no es convincente, rechazará la declaración de culpabilidad.

La Corte Suprema estadounidense, en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre diversos aspectos de la negociación de las penas, estableciéndose como fuente jurisprudencial vinculante en los procesos seguidos bajo el sistema jurídico anglosajón.

Respecto a las reglas de la negociación de la pena, la Corte en el caso *Santobello v. New York* sostiene que:

“La disposición de cargos criminales a través de un acuerdo entre el fiscal y el acusado, algunas veces llamado, en forma laxa, con la expresión *negociación de penas* es un componente esencial de la administración de justicia. Debidamente administrado, debe ser estimulado. Si todos los cargos criminales fueran sujetos a la revisión total de un juicio, los Estados y el Gobierno Federal necesitarían multiplicar el número de jueces y de instalaciones judiciales. La disposición de cargos luego de la negociación respectiva no solamente es una parte esencial del proceso, sino además altamente deseable por muchas razones. Ella impulsa la pronta disposición de la mayoría de los casos penales...” (cf. Muñoz Neira, 2006: 232 y s).

“En cuanto a la discrecionalidad, el primer pronunciamiento fue en el caso Wayne que data de 1985, que dice: En nuestro sistema de justicia criminal, el gobierno tiene amplia discrecionalidad para decidir a quién enjuicia. *En tanto el fiscal tenga causa probable para creer que el acusado cometió una ofensa definida por un estatuto, la decisión de acusar o no, y el cargo o cargos a imputar o presentar delante de un gran jurado, en forma general reposa, enteramente en su discreción.* Esta amplia discreción reside en el reconocimiento de que la decisión de acusar no es particularmente apropiada para que sea objeto de revisión judicial” (cf. Muñoz Neira, 2006: 205).

Asimismo, en el caso Brady explica las razones prácticas de las declaraciones de culpabilidad, en estos términos:

“El Estado, en cierto grado, promueve las declaraciones de culpabilidad en las fases importantes del proceso penal. Para algunas personas, la violación que han hecho de la ley es razón suficiente para someterse y aceptar la sanción penal. Para otros, la aprehensión y la imputación, tienen un indeseado efecto que les lleva a admitir su culpabilidad. En otros casos, la acumulación de evidencia posterior a la acusación puede convencer al acusado y a su defensa de que el juicio no merece asumirse dados la agonía y gasto del implicado y su familia. Todas estas declaraciones de culpabilidad son válidas a pesar de que el Estado sea responsable de algunos de los factores motivantes de tales declaraciones; esas declaraciones de culpabilidad no resultan ser más impelidas que la decisión, tomada por el procesado cuando, frente a la evidencia del Estado en el juicio, se ve precisado a declarar y enfrentar una condena segura. Por supuesto que los agentes del Estado no pueden dar lugar a una declaración de culpabilidad bajo amenazas de un daño presente o futuro o a través de coacción mental que doblegue la libre decisión del procesado” (cf. Muñoz Neira, 2006: 213 y s)

Sandefur (2003: *web*¹⁰) menciona algunas críticas al Plea bargaining:

- 1) Los tribunales han confirmado tácticas desleales en la negociación plea bargaining (caso Estados Unidos v. Ruiz).
- 2) Otro argumento contra la plea bargaining es que se castiga a los acusados por invocar su derecho a juicio (caso Bordenkircher v. Hayes).
- 3) Condena de inocentes; plea bargaining crea un sistema de incentivos diseñados a impedir el ejercicio de los derechos protegidos por la Constitución.

2.2.3.2 Italia / patteggiamento

El Codice di Procedura Penale (Código de Procedimiento Penal) aprobado por el Decreto Presidencial N° 477 de 22 de setiembre de 1988, desde su promulgación ha tenido modificaciones con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema jurídico penal, especialmente con lo que respecta a la celeridad en el proceso; con este propósito aprueba la incorporación del libro sexto- Procedimientos Especiales- incluyendo cinco categorías de procedimientos penales simplificados: el procedimiento abreviado (Título I); aplicación de la pena a solicitud de las partes (Título II); el juicio directísimo (Título III); el juicio inmediato (Título IV) y el procedimiento por decreto (Título V).

De estos cinco, el procedimiento de aplicación de la pena a petición de las partes conocido también como Patteggiamento

¹⁰ Es la traducción de los textos originales en inglés, que son:

“Courts have upheld unfair prosecutorial tactics in negotiating plea bargains (case United States v. Ruiz)”

“Another argument against plea bargaining is that it punishes defendants for invoking their right to a trial (case Bordenkincher v. Hayes)”

“Conviction of the innocent; plea bargaining creates an incentive system designed to discourage the exercise of constitutionally protected rights”.

que en italiano quiere decir *negociación*, es el antecedente directo del proceso de terminación anticipada peruano.

Este procedimiento está regulado en los artículos 444° al 448° del Código Procesal Penal italiano. Su aprobación se fundamenta en el principio de legalidad establecido en el artículo 112° de la Constitución italiana y su aplicación está sustentada en el sistema de justicia consensuada como un criterio de oportunidad.

Iván Borasi, sostiene que “el Patteggiamento es un procedimiento especial de carácter premial por el cual el imputado y el Fiscal pueden acordar sobre el alcance de la pena. Los acuerdos incluyen la reducción hasta un tercio de la pena y otros beneficios, tras el reconocimiento de responsabilidad penal por el delito, con la finalidad de evitar el Juicio Oral” (2013: *web*).

La solicitud de Patteggiamento lo realiza únicamente el imputado con o sin el consentimiento del fiscal y de forma escrita, requiriendo al Tribunal se aplique una pena sustitutiva o de multa reducido a un tercio, o la reducción de hasta un tercio de la pena, solo o en combinación a una pena pecuniaria, no supere los cinco años de prisión; este beneficio no es aplicable a los acusados por los delitos previstos en el artículo 444 apartado 1-bis¹¹.

¹¹ “Código de Procedimiento Penal Italiano. Art. 444. Aplicación de la penalidad a pedido.-

1. El acusado y el fiscal pueden solicitar al juez que aplique, en el presente caso y en la medida indicada, una sanción sustitutiva o una multa, reducida a un tercio, o una pena privativa de libertad cuando se tenga en cuenta esta última de circunstancias y disminuido hasta en un tercio, no excede cinco años solo o en conjunto multa pecuniaria. 1-bis. Se excluyen de la aplicación del inciso 1 el procedimiento por los delitos mencionados en el artículo 51, párrafos 3-bis y 3-quater, (...) por los delitos mencionados en los artículos 600-bis, (2) 600-ter, primero, segundo, tercero y quinto párrafos, 600-quater, segundo párrafo, 600-quater.1, con respecto a la realización de la producción o el comercio de material pornográfico, 600-quinquies, (...) 609-bis, 609-ter, 609-quater y 609-octavo del Código Penal, (3) así como los declarados ofensores habituales, profesionales y traicioneros, o reincidentes bajo el párrafo cuarto del

Si la solicitud fue consentida por el fiscal, el Juez comprobará los requisitos previstos para su presentación y corroborará la voluntad de ambas partes de efectuar el acuerdo; si considera que todo se encuentra conforme a ley, dictará sentencia imponiendo una pena razonable considerando la petición prevista en el acuerdo, además del pago de costes de la acción civil (gastos legales incurridos hasta la fecha) a no ser que exista una compensación total o parcial a realizarse.

El Tribunal por ninguna circunstancia deberá modificar o complementar el acuerdo; si éste no cumple con los requisitos establecidos por ley, el Juez deberá rechazarlo.

Si la solicitud fue presentada únicamente por el acusado, el fiscal podrá emitir su consentimiento hasta el momento de la presentación de las conclusiones de la audiencia preliminar; de no estar de acuerdo con la solicitud el fiscal deberá explicar las razones de su decisión al juez; sin embargo, si el juez considera que la solicitud se encuentra justificada puede conceder la reducción de la condena, decisión que puede ser apelada por el fiscal. De ser rechazada la solicitud por el juez, el acusado puede revocar la solicitud hasta antes de la declaración de apertura de juicio.

La ley italiana ha establecido que serán únicamente el fiscal y el imputado los que intervengan en la negociación; la parte civil queda excluida, si reclama daños y perjuicios, su petición será examinada en el proceso penal o en el fuero civil.

Artículo 99 del Código Penal, si la sentencia excede dos años solo o conjuntamente a la pena pecuniaria. (1)".

La Corte Constitucional italiana por Sentencia N° 313 del 2 julio de 1990 declaró inconstitucional el apartado 2 del artículo 444 del Código Procesal Penal italiano, respondiendo a las críticas efectuadas por las reducidas facultades que se le concedía al juez para el control de la cuantía de la pena en el Patteggiamento.

Así, la Corte determinó que el juez está autorizado para valorar la congruencia de la pena solicitada por las partes, rechazando los eventos hipotéticos que resultan desventajosos para el sometido y disponiendo que el procedimiento continúe por sus cauces ordinarios, además señala que en la sentencia no se podrá imponer penas accesorias o medidas de seguridad; de esta manera se restituye la capacidad de control al juez respecto al monto punitivo a imponer que guarda relación con la reeducación del condenado y la imposibilidad de imponer penas contrarias al sentido de humanidad señalados en el artículo 27 tercer párrafo de la Constitución italiana.

Cuadro 1

DIFERENCIAS	
PLEA BARGAINING	PATTEGGIAMENTO
<p>1. Su aplicación se fundamenta en los poderes discrecionales atribuidos al Ministerio Público.</p> <p>2. Permite cambios en el Acuerdo, los delitos y penas pueden ser negociados.</p> <p>3. No hay límites para su aplicación, se puede aplicar a todos los casos.</p> <p>4. El Fiscal es la única autoridad para autorizarla, el juez no puede aceptar una negociación sobrepasando la denegación del fiscal.</p> <p>5. El Juez se encarga de determinar si la declaración de culpabilidad cumple con las reglas establecidas.</p> <p>6. La igualdad de los acusados no está totalmente respaldada, se puede otorgar penas distintas a dos personas por los mismos hechos y con las mismas pruebas.</p>	<p>1. Su aplicación se fundamenta en el Principio de Legalidad.</p> <p>2. No permite cambios en el Acuerdo, los delitos y penas no pueden ser negociados.</p> <p>3. El rango de aplicación es limitado a casos menores.</p> <p>4. Es permitido a todos los acusados incluso si el fiscal denegara la negociación antes del juicio.</p> <p>5. El Juez evalúa el Acuerdo de tal manera que la sentencia reducida sea evitar el juicio ante la evidente culpabilidad del acusado.</p> <p>6. La igualdad de los acusados similares está respaldada, por la ley, quienes recibirán el mismo trato durante todo el proceso.</p>

2.2.3.3 Alemania

En Alemania, luego de iniciada la primera guerra mundial y hasta fines de la segunda guerra mundial, se establecieron leyes habilitantes por las cuales el legislativo otorgaba poderes a entidades dependientes de él a fin de ejercer medidas relacionadas a políticas específicas de gobierno que en su mayoría eran de carácter económico, financiero, social y jurídico, formalizándose por decretos.

Una de estas leyes habilitantes, es conocida como la “Ley Emminger” –en alusión a Erich Emminger quien a esa fecha fuere Ministro de Justicia- aprobada el 4 enero de 1924, dando origen a un sistema jurídico mixto. Después de la aprobación de la constitución de 1949, se dejó de dictar estos decretos y gran parte de ellas fueron abolidas; sin embargo, algunas decisiones se mantuvieron como el Principio de oportunidad, que forma parte del actual sistema jurídico alemán.

Luego de finalizada la guerra, Alemania sufrió un incremento considerable en la delincuencia juvenil, este fenómeno criminal era imposible de manejar aplicando un sistema jurídico basado en el principio de legalidad; por lo tanto, a fin de solucionar este problema jurídico-social, el gobierno alemán decide aplicar el principio de oportunidad como eje principal de su política criminal, recalando que este principio es aplicado como una forma excepcional al principio de legalidad.

Actualmente, este principio se encuentra regulado en los artículos 153° y 154° del Código de Procedimiento Penal alemán, otorgando al fiscal la facultad de prescindir de ejercer la acción penal en los siguientes supuestos: 1) en los casos de delitos menores (artículo 153), 2) cuando el interés de la persecución penal ha sido satisfecho con el cumplimiento de

algunas condiciones o mandatos (artículo 153a), 3) la falta de acción (artículo 153b), 4) cuando los delitos se han cometido en el extranjero (artículo 153c), 5) en casos de seguridad del estado o cuando existe un interés público superior (artículo 153d), 6) por arrepentimiento activo del autor (artículo 153e), 7) delitos establecidos en el Código Penal Internacional (artículo 153f), 8) delitos adicionales insignificantes (artículo 154), 9) existe limitaciones para su enjuiciamiento (artículo 154a), 10) en materia de extradición y expulsión (artículo 154b), 11) el autor fue víctima de extorsión o coacción (artículo 154c), 12) cuando requiere una decisión preliminar en materia civil o administrativo (artículo 154d), 13) en los procedimientos penales o disciplinarios en relación con la sospecha errónea o insulto (artículo 153e) y 14) por ausencia del acusado o por otro obstáculo personal del acusado (artículo 153f).

Peña y Frisancho destacan que “las ventajas de estos procedimientos en el proceso penal alemán son las siguientes: a) favorecer al imputado porque le permite sustraerse en un proceso penal gravoso y aflictivo, así queda exento de antecedentes penales y judiciales; b) favorecer al ofendido, en vista de que sus legítimas expectativas reparatorias se ven satisfechas en un tiempo más rápido u asimismo ya no se verá afectado de ser parte de un proceso penal público; c) beneficia a la administración de justicia penal, al descongestionar la carga procesal, optimizando su trabajo y dirigiendo su foco de atención a los delitos más graves y se anulan los efectos criminógenos de la aplicación de la pena efectiva de carcelería, por penas o medidas sustitutorias que son de naturaleza socializante y que favorecen la inserción del imputado en la comunidad social” (Peña y Frisancho. 2003: 98).

Otra figura interesante es el acuerdo negociado (*absprache*) regulado en el artículo 257c del Código de Procedimiento Penal,

por el cual el Tribunal puede establecer acuerdos con las partes respecto al desarrollo y resultado del procedimiento – límites de la sanción y la sentencia-; el acuerdo más utilizado está referido a la posible sanción que usualmente es una atenuante de la pena previa, confesión del imputado o de que se aplique el principio de oportunidad; sin embargo, los aspectos no negociables son aquellos relacionados con el veredicto y las medidas de prevención y corrección que ha de disponer el juez; este acuerdo entrará en vigor cuando el fiscal y el imputado aprueben la propuesta del Tribunal.

Los críticos de esta figura procesal han señalado su disconformidad calificándola de inconstitucional, fundamentan su posición en que estos acuerdos desnaturalizan las estructuras procesales de tal forma que el legislador carecería de medios para evitar el abuso del poder judicial contra el procesado, quien admite su culpabilidad a cambio de un tratamiento menos riguroso, vulnerando así garantías constitucionales como el derecho a no declarar contra sí mismo y a un debido proceso; además, se estaría contraviniendo el principio de la verdad material al aceptar el resultado de la instrucción por el acusado en lugar de la prueba. Estos argumentos sustentaron el requerimiento de consulta constitucional del artículo 257c del Código de Procedimiento Penal, presentada ante el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que expidió la resolución del 19 de marzo de 2013, declarando la constitucionalidad de este artículo.

Otra figura procesal criticada es el testigo de corona (*kronzeugen*), regulado por el artículo 46b del Código Penal y complementado con el artículo 100 párrafo 2 del Código Procesal Penal Alemán, por el cual un acusado al confesar un hecho y acusar a sus copartícipes actuando como testigo podría obtener inmunidad total, exclusión de pruebas de cargo o

reducción de los cargos en la acusación, las críticas más importantes contra esta figura procesal se centran en la afectación de los principios de igualdad ante la ley y de legalidad.

2.2.3.4 España

Peña y Frisancho mencionan que “los antecedentes de esta institución en la legislación española se remonta a la Ley Provisional Reformada prescribiendo reglas para la aplicación de las disposiciones del Código Penal de 1850, que en sus artículos 655 y 688 determinaban sus dos momentos procesales; el primero, que establece una calificación provisional de las defensas y, el segundo, los prolegómenos de la sesión del juicio oral o confesión del procesado. Posteriormente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se estableció la *conformidad del acusado*” (Peña y Frisancho. 2003: 77 y s.).

Por su parte, el autor Molina López señaló que “a comienzos del siglo XX se propuso la necesidad de acudir a mecanismos alternativos dentro del proceso penal para procurar una aplicación satisfactoria del Derecho penal, procurando desde una perspectiva sustantiva que los jueces encargados de aplicar el Derecho penal material prescindieran de las conductas bagatelarias, reivindicando de esta manera la aplicación del principio de intervención mínima en sede judicial. La Memoria del Fiscal ante el Tribunal Supremo en la apertura de los tribunales durante el año 1923 proponía una simplificación de los trámites del proceso penal para buscar una aplicación cumplida de la ley penal, que ya para ese entonces se diagnosticaba como preocupante” (cf. Molina López, 2012: 160).

Es así que los procedimientos de urgencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Procedimiento Oral de la LO

10/1980 fueron derogadas por la Ley Orgánica 7/1988 del 28 de diciembre de ese año, introduciendo la institución de la conformidad en el procedimiento abreviado, ante el problema de la lentitud de la justicia.

En razón a lo ya mencionado, la introducción de la conformidad en el proceso abreviado, estipulado en el artículo 655 y siguientes de la *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, proporcionó un gran avance en el proceso de descongestionamiento de los procesos judiciales; luego con la aprobación de la Ley Orgánica 38/2002, del 24 de octubre de 2002, que establece modificaciones en el procedimiento abreviado en diversos aspectos -siendo los más importantes la ampliación de los beneficios de reducción de la pena- se incrementó el proceso de celeridad judicial de este procedimiento. Los requisitos de la conformidad son los siguientes:

- a)** “La manifestación del acusado ha de recaer sobre el contenido íntegro de la calificación acusatoria (artículos 655 y 787.1)
- b)** Debe ser escrita y personalísimo (artículos 655, 784.3 y 787.1)
- c)** Debe ser prestada voluntariamente (artículos 787.2, 787.4.I, 954.3)
- d)** Debe reunir las formalidades requeridas por ley para los actos formales.
- e)** Debe manifestarse la voluntad del acusado y de su abogado defensor, de modo que no basta con la manifestación del primero, de tal manera que si el abogado defensor considera necesaria la continuación del juicio oral el juez podrá ordenarla, no obstante la conformidad del acusado (artículos 694 y 787.4.II).

- f) Es aplicable cuando la pena a imponerse no supere los seis años (artículos 655, 784.3 de la LECrim. y 50 de la ley de Tribunal de Jurado)
- g) Debe realizarse, en el procedimiento ordinario al momento de que la defensa evacua el escrito de calificación provisional o al inicio de las sesiones del juicio oral (artículos 655, 688, 784.3 y 787)”¹²

2.2.3.5 Portugal

Hendler refiere que en la época de “Antonio Olivera Salazar”, Ministro de Finanzas nombrado en 1928 por el Presidente de entonces – Antonio de Fragoso Carmona-, dado el éxito que consiguió con sus reformas económicas, se convirtió en la figura más importante de Portugal. Entre los años 1945-1971, existió en Portugal plena vigencia del principio de oportunidad, que debido a las características autoritarias del régimen se constituyó en una fuente de abusos y arbitrariedades. Tal contexto generó en Portugal una corriente a favor del retorno estricto del Principio de Legalidad, que impera actualmente en la legislación portuguesa (cf. Peña y Frisancho 2003: 90)

Sin embargo, el Código del Proceso Penal de Portugal¹³ mantiene tres instituciones de justicia alternativa que tiene como objeto abreviar el proceso a través de una justicia rápida y eficaz bajo un criterio de economía procesal, suprimiendo la etapa de juicio oral; pero para su aplicación se exige la conformidad del juez.

¹² Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Ver <https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf>

¹³ Código De Processo Penal— Actualizado até ao Dec.-Lei n.º 324/2003, de 27.12. Ver http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=74492.

La primera institución es la suspensión provisional del proceso (artículos 281 y 282), en casos de delitos menores cuya sanción no supera los cinco años de pena privativa de libertad; el fiscal de oficio o a petición del imputado con previo consentimiento del juez, puede suspender el proceso bajo determinadas condiciones o reglas de conducta que deberá cumplir el imputado; una vez cumplido con las condiciones establecidas, la causa se archiva definitivamente, caso contrario la causa se reabre para continuar su trámite habitual.

Segunda, la confesión de los hechos (artículo 344) efectuada por el imputado debe ser completa y sin reservas, de forma libre y sin coacción alguna; con la confesión se reduce la pena a la mitad. En este proceso, también se requiere la confirmación del Tribunal.

Por último, el proceso sumarísimo (artículos 392 al 398), es un procedimiento especial que se caracteriza por la reducción del tiempo y la supresión de determinadas fases del proceso, se aplica para delitos castigados con pena de prisión que no supera los cinco años o con multa. Para su aplicación el fiscal deberá evaluar el caso y determinar que la pena o medida de seguridad a imponerse no será de prisión efectiva sino de multa, amonestación o trabajo comunitario. Se requiere el acuerdo del juez, del acusado y del defensor, si la naturaleza del caso lo requiere.

2.2.4 Principios que rigen la negociación

2.2.4.1 Principio de Legalidad

Es un principio fundamental de derecho público que debe ser considerado por todo Estado democrático de derecho; en virtud del cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en

normas jurídicas determinadas por el órgano competente designado por ley, asegurando así la seguridad jurídica del Estado.

Los antecedentes de este principio lo encontramos en el siglo XVIII, en las Constituciones de Filadelfia de 1774, Maryland de 1776, en la Declaración de Derechos Humanos de Virginia del 12 de junio de 1776¹⁴ y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789¹⁵.

Desde el punto de vista penal, el principio de legalidad se estableció por Paul Johann Anselm von Feuerbach, basándose en la máxima “nulum crimen, nulla poena sine praevia lege” que quiere decir “no hay delito, no hay pena sin ley previa”; es decir, aplicando este principio ningún hecho puede ser considerado como delito e imponer una pena, sin que la ley anterior lo haya previsto como tal; de esta manera, se estaría estableciendo como límite de la potestad punitiva del Estado a la ley.

Gimeno Sendra y otros, refieren que “un sistema procesal regido por el principio de legalidad opera cuando se tiene la sospecha de la comisión de un hecho delictivo y ante este conocimiento, el Ministerio Público no tiene facultad para pedir el sobreseimiento, careciendo de esta potestad, asimismo, el órgano jurisdiccional, en tanto subsistan los presupuestos materiales que le han provocado y se haya descubierto al presunto autor”. (cf. Peña y Frisancho, 2003: 102)

¹⁴ "VIII. – (...) ningún hombre sea privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares." Véase:<<http://www.fmmeduacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1776declavirginia.htm>> fecha 10 de mayo de 2016.

¹⁵ “Artículo 8.- La ley sólo debe establecer pena estricta y evidentemente necesarias, y tan sólo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.” Véase:<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

Este principio a nivel constitucional está regulado en el artículo 2 inciso 24 -derechos que tiene la persona a la libertad y seguridad personal- literales a) y d)¹⁶ de la Constitución del Estado. En cuanto al aspecto puramente procesal, se encuentra establecido en el artículo 139 numeral 3¹⁷, nominando a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional como principios de la función jurisdiccional.

El autor Salas Beteta afirma que el “principio de legalidad procesal se encuentra inspirado en los principios de obligatoriedad e indisponibilidad de la acción penal. Por el principio de obligatoriedad se obliga al titular de la acción penal pública ejercerlo ante el conocimiento de la presencia de elementos de convicción de la comisión de un delito. En tanto que, por el principio de indisponibilidad de la acción penal no se le permite opción distinta a la de ejercerla. No obstante, el principio de legalidad procesal encuentra una excepción en los criterios de oportunidad” (Salas Beteta, 2011:20).

¹⁶ “Constitución Política del Perú. Art. 2.- Toda persona tiene derecho: (...)

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.”

Véase: <<http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>> fecha 10 de mayo de 2016.

¹⁷ “Constitución Política del Perú. Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...)

3. la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

Véase: <<http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>>. fecha 10 de mayo de 2016.

2.2.4.2 Principio de Oportunidad

El principio de oportunidad se encuentra regulado por dos grandes sistemas. El *Sistema de Oportunidad Libre o Amplio*, seguido por los países anglosajones como por ejemplo Estados Unidos; siendo que, en este sistema el fiscal ejerce la acusación luego de negociar con el acusado o su representante legal sin sujetarse a ninguna regla preexistente, mientras que el Juez penal se sustrae al conocimiento de los hechos y su papel se limita a decidir sobre los términos de la negociación. Por otro lado, el *Sistema de Oportunidad Reglada*, es propio de los países europeos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España, etc. En este sistema la ley prevé los supuestos sobre los cuales el Fiscal puede declinar la persecución penal y decidirse por el archivamiento del caso (Martínez Gamboa, 2011: 49, *web*)¹⁸.

En los países europeos, este principio tiene origen alemán, fue incorporado como parte de un sistema jurídico mixto con la dación de la ley Emminger de 4 de enero de 1924; siendo considerado como una excepción al principio de legalidad y por el cual el Ministerio Público prescinde de ejercer la acción penal al considerar que el hecho punible no amerita la aplicación de una pena, por razones de utilidad pública.

En un ámbito más global de los antecedentes jurídicos, nos remontaremos a después de la segunda guerra mundial, cuando se evidenció una crisis mundial del proceso penal, estableciéndose intensos debates respecto a la aplicación del principio de oportunidad como una solución alternativa; es por eso que en el V Congreso Internacional de Derecho Penal

¹⁸ Véase <http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/1005/indice.htm>. Fecha 16 de julio de 2017.

celebrado en Ginebra entre el 28 al 31 de julio de 1947, se puso en debate el estudio de los principios de legalidad y oportunidad en la persecución penal, pero siendo este tema una de gran complejidad e interés se creó una comisión especial.

Después de treintisiete años, al celebrarse el XIII Congreso Internacional de Derecho Penal en El Cairo entre el 1 al 7 de octubre de 1984, el tema de aplicación de procedimientos alternativos de la persecución penal fue mencionado nuevamente, esta vez como una forma de decisión unilateral oficial de suspender la investigación penal formal o el proceso penal antes de la condena, señalando que estos mecanismos deben ser considerados como un enfoque nuevo de los problemas contemporáneos del sistema de justicia penal como son el peligro de sobrecriminalización y la crisis de las penas.

Haciendo un recuento de las razones de implementación del sistema acusatorio y de instituciones basadas en la justicia penal negociada, podemos señalar que la justificación de este principio desde sus inicios se debió a la crisis en el sistema (incremento de delitos, escasez de recursos, congestión de procesos entre otros), que no pudieron ser solucionados, en gran parte, a la rigurosidad del principio de legalidad; ante esta situación muchos países decidieron aprobar nuevas políticas criminales que conllevaron a la implantación de un sistema jurídico penal acusatorio, dación o adecuación de sus códigos penales especializados e incorporación de mecanismos alternativos al principio de legalidad.

Peña y Frisancho (2003: 114) sostienen que este principio descansa no en proscribir solamente la lentitud y la arbitrariedad, sino que cubre elevados fines de utilidad pública con marcado interés social. Señalan tres puntos como objetivos que se aplican al concepto de oportunidad:

- La discriminización de los hechos delictivos apelando a otras medidas de control social menos radicales y más útiles;
- La eficiencia del sistema que se puede traslucir tanto en el descongestionamiento de casos, como deshacinamiento de las cárceles;
- Intentar morigerar la desigualdad que el principio de legalidad más bien profundiza.

Peña y Frisancho citando a García Del Rio, señalan que “el uso de los criterios de oportunidad se encuentran incluidos en el principio de legalidad. Suponen la atribución al fiscal por parte del ordenamiento jurídico, de un margen de disponibilidad de la acción penal, configurado por una pluralidad de soluciones, todas ellas válidas en la medida que se adecúan a la legalidad. El Ministerio Público se haya sujeto a ley, tanto si ejercita la acción penal, como cuando se abstiene de hacerlo” (2003: 264).

En la legislación procesal, el principio de oportunidad faculta al Ministerio Público de abstenerse de ejercer la acción penal, ya sea de oficio o a pedido del imputado, previo consentimiento de este último. Los criterios son: “a) cuando el agente ha sido afectado gravemente por las consecuencias del delito, y no sea reprimido con una pena privativa de libertad mayor a cuatro años, la misma que resulta innecesaria; b) cuando el delito no afecte gravemente el interés público, excepto en los casos en que la pena privativa de libertad a imponer sea mayor a dos años o el delito sea cometido por funcionario público en ejercicio de sus funciones; c) cuando conforme a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del denunciado, se aprecia que existe circunstancias atenuantes y no existe interés público gravemente comprometido para su persecución”¹⁹.

¹⁹ Art. 2° del Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo 957), 29/07/2004.

Salas Beteta determina como razones que orientaron la política criminal para introducir criterios de oportunidad al ordenamiento procesal peruano los siguientes: “ineficiencia del Estado y del sistema de administración de justicia penal, sobrecarga procesal, lentitud y dilación indebida de la tramitación del proceso, costos para los litigantes y para el Estado, empleo antojadizo del Derecho Penal y la sobrecriminalización, ineficacia de las penas de corta duración, efectos criminológicos de la pena y falta de una reparación integral a la víctima del delito” (Salas Beteta. 2011:97 y ss).

2.2.4.3 Presunción de Inocencia

Este principio es reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligando a todo Estado a recopilar el material incriminatorio que sustente los cargos contra el acusado y establecer su culpabilidad a través de un juicio dentro de un plazo razonable y justificado.

En nuestro país, como un Estado democrático de derecho, la Constitución Política del Estado estipula en el artículo 2 referido a los derechos fundamentales de la persona, numeral 24 – derechos a la libertad y seguridad personales-literal e, con el siguiente texto:

“Toda persona es considerada inocente hasta que se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

Prosiguiendo con la protección de los derechos a la libertad y seguridad personal del inculcado, el Código Procesal Penal en su artículo II del Título Preliminar recoge este principio constitucional, que a la letra dice:

“1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”.

A decir de Salas Beteta, sobre la presunción de inocencia “este derecho tiene dos efectos. A nivel extraprocesal, es un derecho subjetivo por el cual al sindicado se le debe tratar como inocente. Es decir, que nadie, ni la policía ni la fiscalía ni los medios de comunicación, pueden señalar a alguien como culpable hasta que una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su derecho al honor e imagen. Y a nivel procesal, el mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas obtenidas debidamente produzca condena” (2011:49).

2.2.4.4 Principio de Economía Procesal

Este principio estipulado en el artículo III del Código Procesal Constitucional, se centra en el criterio utilitario para alcanzar los fines del proceso, buscando obtener resultados óptimos – eficacia y eficiencia procesal- en el menor tiempo posible; para tal fin, establece mecanismos procesales a fin de que el proceso sea ágil, práctico y efectivo, tratando de eliminar aquellos factores que puedan ocasionar gastos innecesarios de recursos humanos, financieros y de pérdida de tiempo. Algunos aspectos evaluados son: la duración del proceso (factor tiempo) y los

costos de la actividad jurisdiccional (factor financiero y de recursos humanos).

Cuando hablamos de economía de esfuerzo nos referimos a la simplificación de los procesos, como en el caso de flagrancia cuando el Fiscal puede solicitar la prisión preventiva y la terminación anticipada.

Asimismo, guarda relación con el principio de celeridad al establecer plazos que deben ser cumplidos conforme a ley, concentración al reunir todas las cuestiones debatibles y resolverlas en un solo acto procesal y eventualmente al realizar todos los actos procesales posibles de manera simultánea.

2.2.4.5 Principio de Celeridad Procesal

Este principio procesal está relacionado con dos aspectos: la prontitud por el cual el órgano judicial debe resolver un proceso, y el derecho que tiene el justiciable de obtener una justicia oportuna, exigiendo que el proceso se realice dentro de los plazos establecidos por ley y sin dilaciones indebidas, restableciendo de forma inmediata la situación jurídica infringida.

Si bien por este principio se busca que el proceso termine dentro de los plazos establecidos por ley, también es necesario que se realice bajo los estándares de eficacia y eficiencia; más aún los plazos fijados para cada procedimiento dentro de los procesos deben ser evaluados de tal forma que cumplan en el plazo señalado; además, el órgano jurisdiccional cuenta con la facultad procesal de *impulso de oficio* para facilitar esta obligación.

La indeterminación de la dilación o del retraso de la causa, nos obliga a analizar independientemente cada caso a fin de conocer las circunstancias que lo produjeron, algunos de estos aspectos

a analizar son: la actuación de los Magistrados a cargo del proceso, la complejidad de la causa, las dilaciones ocasionados por algunos de los sujetos procesales, las circunstancias externas al proceso (incidentes sociales, políticos y otros).

El principio de celeridad es una garantía del efectivo ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y su vulneración viene a ser el incumplimiento del órgano jurisdiccional de resolver la causa dentro de los plazos establecidos por ley, considerando los actos de dilación de proceso que variarán caso por caso.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, referido al Derecho a la justicia, señala:

“18. Toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve (...).”

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sobre los derechos a la libertad personal menciona:

“7.6. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3 señala que:

“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

Maier sostiene que para la determinación del plazo razonable, “debemos recurrir a tres elementos condicionantes de la razonabilidad del plazo: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades jurisdiccionales (...) Por su parte, Barona Vilar nos dice que la garantía del juzgamiento dentro de un plazo razonable tiene por propósito no sólo evitar que la prolongación excesiva del proceso penal suponga una especie de condena informal para el procesado sino que adicionalmente pretende evitar una abreviación del juzgamiento que derive en la vulneración de los derechos fundamentales. La idea de razonabilidad del plazo funciona en doble dimensión” (cf. Reyna Alfaro 2014: 151).

Para Rodríguez García “los cambios efectuados en el sistema jurídico penal a fin de resolver el creciente número de casos han llevado a los legisladores a poner en la cúspide a la celeridad, bajo la convicción de que si la justicia no es rápida, ni hay tutela judicial efectiva ni se cumplen los fines de la pena” (1997: 23).

2.2.4.6 Principio de Consenso

Este Principio legaliza el acuerdo o negociación entre el fiscal y el imputado asistido por su abogado defensor, con el fin de suprimir etapas procedimentales.

Para Brousset Salas “posibilita la negociación entre el fiscal y el imputado, respecto a los términos y condiciones de la punición; y la asociación de mecanismos premiales que garanticen de modo efectivo al imputado, la obtención de beneficios que incidan de algún modo en la atenuación de la pena, se constituyen como los más eficaces elementos de validación constitucional y social de estas instituciones; por lo que debe propenderse al abandono de aquellas fórmulas que se sustentan únicamente en la adhesión unilateral del imputado” (2009: 96 y s).

Del Rio Ferretti nos presenta un panorama amplio del consenso, indica que “solemos encontrar variadas manifestaciones del consenso de partes en las legislaciones modernas, que reconocen diversas formas y medios por las cuales las partes pueden acordar o pactar la celebración y/o contenido de un determinado acto procesal, que producirá específicos efectos legalmente sancionados. Sin embargo, las diversas formas de consenso no tienen una misma naturaleza. Algunas veces el consenso se produce respecto de un objeto muy acotado, como acontece con las convenciones probatorias, respecto del *thema probandum* y con un efecto jurídico determinado de manera específica, que en este caso incide sobre las aportaciones probatorias y la amplitud del objeto de debate probatorio. Otras veces se manifestará en relación con la promoción de formas no jurisdiccionales ni punitivas de resolución del asunto penal, dando lugar a las denominadas soluciones o *salidas alternativas* (...). En las formas de solución alternativa es claro que el consenso es un presupuesto necesario de procedencia de las mismas. Con todo, no es este consenso el que importa al proceso en sentido estricto (como instituto jurídico por el cual se realiza la función jurisdiccional) ni al enjuiciamiento jurisdiccional, pues se trata de un tipo de consenso que justamente permite de manera excepcional *salirse* del mismo proceso jurisdiccional para buscar una forma no jurisdiccional y no punitiva de resolución del asunto penal. En este caso nos hallamos ante un consenso que a la vez es expresión del principio de oportunidad, pero solo entendido este como facultad para no ejercer o abandonar la acción penal (...)”²⁰ (Del Rio Ferretti. 2008: *web*).

²⁰ Véase:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177014517007>> fecha 10 de mayo de 2016. El resaltado es nuestro.

Los Jueces de la Corte Suprema sostuvieron que “los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene la características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de la acusación”²¹.

2.2.5 Sistema Acusatorio y Justicia Penal Negociada en el Código Procesal Penal

Sobre los precedentes del Código Procesal Penal, promulgado el 29 de julio de 2004 por Decreto Legislativo N° 957, se ha señalado lo siguiente²²:

“Elaborado sobre la base del Código Procesal Penal de 1991 y los proyectos de los Códigos Procesales Penales de 1995 y 1997, siendo responsables de su redacción una Comisión de Alto Nivel, presidida por el Ministerio de Justicia, que estuvo integrado por representantes de los Ministerios del Interior y Economía y Finanzas, así como del Ministerio Público, Poder Judicial, Academia de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y diversos juristas (...), recogiendo el sistema acusatorio o adversarial garantista, contenidos en los códigos de proceso penal modernos, adecuando la legislación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a nuestra Constitución Política de 1993, la cual (incluso la Carta Magna de 1979) otorga al Fiscal la titularidad de la acción penal pública”.

²¹ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 18°.

²²

Véase: <http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/articulos/457_implementacion_codigo.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

Como parte de la política criminal, en el Código Procesal Penal se ha previsto regular dos tipos de procesos; el común y los especiales. El primero se establece para todos los procesos y se divide en tres fases: la investigación preparatoria, la fase intermedia y el juzgamiento o juicio oral. Los procesos especiales son mecanismos de simplificación procesal, cada una con sus propias características, algunos se aplican por disposición legal (en casos de Flagrancia) y otros por acuerdo entre el fiscal y el imputado con la asistencia de su abogado defensor, como parte de la política criminal de justicia penal negociada (procesos de terminación anticipada y colaboración eficaz).

2.2.5.1 Procesos Comunes

En el Código Procesal Penal se ha contemplado tres etapas en los procesos comunes: la investigación preparatoria, la intermedia y el juzgamiento. La estructura del proceso común se caracteriza porque el juzgamiento es la etapa más importante y las otras dos precedentes son etapas preparatorias al juzgamiento, en las cuales se aplicarán la mayoría de los mecanismos simplificadores a fin de evitar que lleguen los procesos al juicio oral y controlar la carga procesal.

2.2.5.1.1 Investigación Preparatoria

Es la primera etapa del proceso común, dividida en dos fases: las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha.

La dirección de la investigación la tiene el fiscal, en el entendido que debe desarrollar una objetiva y eficaz labor de indagación. La investigación inicia cuando el fiscal conoce de la sospecha de la comisión de un hecho delictivo, promoviéndola de oficio o a petición de los denunciantes (art. 329.1 del NCPP).

Las diligencias preliminares tienen “por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente” (art. 330.2 del NCPP)

Esta primera etapa concluye con la disposición fiscal, calificando de tres formas:

- a) “Declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, al considerar que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley; ordenando el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado.
- b) Ordenará que la policía continúe con la investigación preliminar, en caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe.
- c) Dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria, si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que se han realizado, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuere el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad” (arts. 334.1, 334.3 y 336.1 del NCPP)

“El plazo de las diligencias preliminares, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación” (art. 334.2 del NCPP).

La segunda subfase que es la investigación preparatoria propiamente dicha, que se inicia con la disposición Fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra una persona determinada.

“La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado” (art. 321.1 del NCPP).

“El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales” (art. 342.1 del NCPP).

“Esta etapa concluye con la acusación o el requerimiento de sobreseimiento de la causa, según corresponda” (art. 344 del NCPP).

Las facultades del Juez de la Investigación Preparatoria, son: “a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este Código” (art. 323.3 del NCPP).

En esta etapa del proceso se plantearán los procedimientos especiales de terminación anticipada y el proceso inmediato.

2.2.5.1.2 Etapa Intermedia

Es la segunda etapa del proceso penal común, desarrollada entre la etapa de investigación preparatoria y la etapa del juicio oral. Constituye una etapa de saneamiento y de control porque quiere depurar todo aquello que se ha logrado para que en el juicio no haya problemas o cuestionamientos y el debate fluya apropiadamente.

La dirección de esta etapa recae en el juez de investigación preparatoria; lo interesante es la posibilidad de la intervención de los sujetos procesales una vez notificada la acusación fiscal, requiriendo al juez, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, en virtud a lo establecido en el artículo 350°, literal e, del Código Procesal Penal.

Salas Beteta menciona que esta etapa “sirve de filtro para sanear los cuestionamientos o aspectos formales de la acusación, así como para resolver los medios de defensa técnicos planteados, entre otros. Si se acepta el requerimiento de sobreseimiento del fiscal, el procedimiento concluye, una vez que el auto de sobreseimiento quede firme. Si el juez de la investigación preparatoria considera que hay mérito para juicio oral, emite un auto de enjuiciamiento y remite los actuados al juez penal” (Salas Beteta. 2011: 387).

Los magistrados de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema por Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116²³, afirman que:

“La etapa intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral. Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP”.

²³ Ver:<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8246b4004075b97fb5e9f599ab657107/ACUERDO_PLENARIO_05-2009-J116_301209.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8246b4004075b97fb5e9f599ab657107>. FJ 17° y 18°. Fecha 10 de mayo de 2016

2.2.5.1.3 Juicio Oral

A decir de Neyra Flores, “el Código Procesal ha sufrido cambios sustanciales pues es ahí donde se manifiesta notoriamente el tránsito del sistema acusatorio mixto al acusatorio adversarial, que tiene un fuerte componente de oralidad y debate contradictorio y, que a su vez, demanda un desempeño totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados los jueces, fiscales y operadores de derecho. Así pues, el juicio se realizará en forma oral, pública y contradictoria, ya que representará la fase central del proceso, y en ella el Juez o Tribunal decidirá la solución del conflicto”. (Neyra Flores, 2010: 318)

Conforme al art. 356.1 del NCPP, tenemos que:

El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor.

El juez penal es el sujeto procesal más importante de esta etapa, quien deberá emitir pronunciamiento respecto a la responsabilidad del procesado, este pronunciamiento deberá ser imparcial sustentada en las pruebas. De acuerdo al tipo de proceso puede ser dirigido por un juez unipersonal o por un colegiado.

Los medios probatorios serán propuestos por el Ministerio Público o los otros sujetos procesales a fin de sustentar sus posiciones en el juicio; sin embargo, el Juez penal puede requerir la actuación de otras pruebas según lo requiera. Las partes procesales argumentarán sus posiciones usando la oralidad, las técnicas y estrategias de litigación.

El juicio culmina con la sentencia emitida por un juez unilateral o por un colegiado según sea el caso, declarando la culpabilidad o inocencia del inculgado.

Salas Beteta nos refiere que “el juzgamiento se desarrolla bajo el debate del acusador y el defensor. En esta etapa se actúan las pruebas y el órgano jurisdiccional las valora, a efectos de emitir su decisión. Existen reglas para la admisión y valoración de la prueba, de modo que, aquella que fuere obtenida con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales resulta inadmisibile y el juzgador solo valorará las pruebas incorporadas legítimamente en el juicio oral. (...) La prueba, se ve, necesariamente, ligada a la actividad probatoria que pasa por la recolección, la aportación, la admisión, la actuación y la valoración de la prueba” (2011: 388).

En esta etapa del proceso puede realizarse la conclusión anticipada del proceso o llamado también juicio de conformidad, por el cual “el acusado previa consulta con su abogado defensor, admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, ante esta confesión el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder,

el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio” (arts. 372.1 y 372.2 del NCPP)

2.2.5.2 Terminación Anticipada y otros Procesos Especiales

Neyra Flores afirma que “en base al principio de legalidad, el proceso común no puede conocer la totalidad de los procesos pues saturaría de tal forma la administración de justicia, que sería muy difícil y casi nula la posibilidad de cumplir cabalmente sus fines, por lo que se han planteado una serie de respuestas: despenalizar conductas que tienen una mínima gravedad de injusto, mejorar la administración de justicia a través de más presupuesto e instaurar métodos alternativos al proceso penal. Agrega que la razón fundamental de la existencia de estos procesos especiales es la mayor idoneidad de su trámite (distinto al proceso común) para conocer ciertos casos” (2010: 426 y ss).

Considerando lo antes mencionado, el legislador ha previsto establecer siete procesos especiales:

2.2.5.2.1 Proceso Inmediato

Este proceso regulado en el Libro V, Sección Primera, artículos 446° al 448° del Código Procesal Penal, fue

modificado por el Decreto Legislativo N° 1194²⁴, y posteriormente los artículos 447° y 448° fueron modificados por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 de diciembre de 2016.

El fiscal bajo responsabilidad debe solicitar la incoación del proceso inmediato contra un imputado o varios implicados en un mismo delito, cuando se presente algunos de los siguientes supuestos (art. 446° del NCPP²⁵):

- a) “Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito.
- b) Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito.
- c) Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
- d) En los delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción”.

El fiscal realiza el requerimiento de incoación del proceso inmediato, acompañando la carpeta fiscal y pone en conocimiento al juez si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

El juez programa la audiencia única de incoación dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; manteniéndose la

²⁴ El Decreto Legislativo N° 1194 - Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia - publicado el 30 de agosto de 2015 modifica el Libro V del Código Procesal Penal del 2004.

²⁵ En Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo 957), 29/07/2004.

detención del imputado hasta la realización de la audiencia en los casos de flagrancia delictiva.

La audiencia de incoación del proceso inmediato será única e inaplazable, donde el juez resuelve sobre la procedencia de dicha incoación, del principio de oportunidad, del acuerdo reparatorio o de la solicitud de una terminación anticipada, y sobre la procedencia de la medida coercitiva que hubiera.

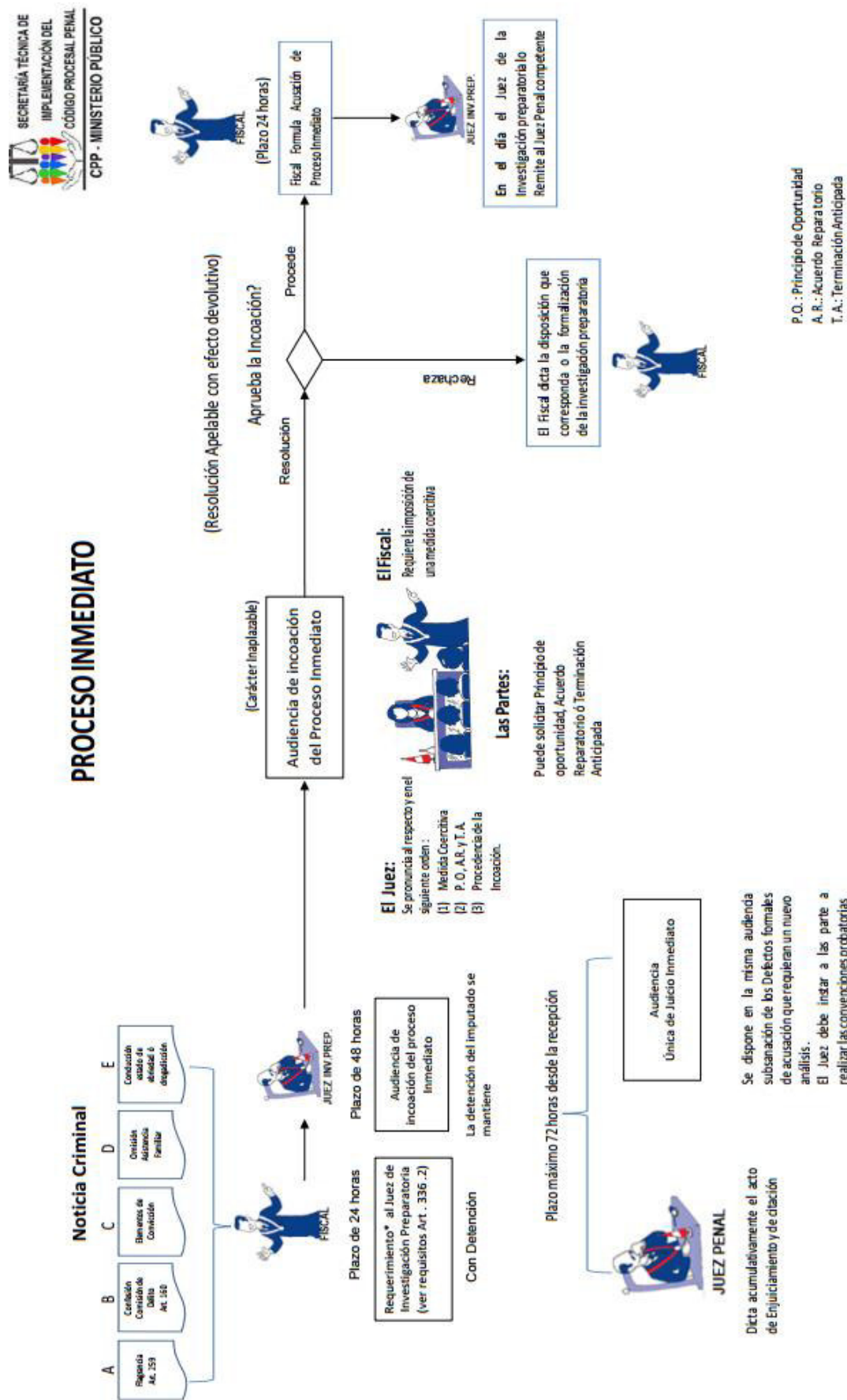
Si se declara procedente el principio de oportunidad el juez dicta el auto de sobreseimiento, y en caso las partes arriban a un acuerdo se expide una sentencia anticipada, el caso concluye con aquellas salidas alternativas; de no ser así, “el juez de investigación preparatoria dispone la incoación del proceso inmediato, y el fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, dicho juez lo remite al juez penal para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral. Seguidamente, se lleva a cabo la audiencia única de juicio inmediato”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 448° del Código Procesal Penal. Luego de instalada la audiencia de juicio inmediato, si el acusado admite ser responsable del delito materia de acusación y de la reparación civil, previa consulta con su abogado defensor, el juez declarará la conclusión del juicio, dictando la sentencia conformada, que puede expedirse en la misma sesión o en la siguiente, no pudiéndose postergar más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio.

Es decir, en la audiencia de incoación del proceso inmediato, tenemos la oportunidad de aplicar la institución de la terminación anticipada, al igual que la del principio de oportunidad o del acuerdo reparatorio; a pesar de que no está obligado a asistir a dicha audiencia el imputado sino solo su defensa técnica, tampoco la parte agraviada o el actor civil y también rige Principio de contradicción procesal; sin embargo, estas mismas características son consideradas obstáculos para aplicar la Terminación Anticipada en la Audiencia de Control de Acusación, conforme al Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116.

El gráfico N° 1²⁶ muestra el procedimiento a seguir.

²⁶ Véase:<http://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/689e4a_PROCESO%20INMEDIATO-pdf.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

Gráfico 1



2.2.5.2.2. Proceso por razón de la Función Pública

Este proceso se encuentra estipulado en el Libro V, Sección Primera, artículos 449° al 455° del Código Procesal Penal, para procesar a funcionarios por razón de función pública. Existen tres modalidades de este proceso: “a) El proceso por delito de función contra altos funcionarios públicos regulada en los artículos 449° al 451°; b) El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios regulado en los artículos 452° y 453°; y c) El proceso por delitos de función atribuidos a los vocales y fiscales superiores, a los miembros del consejo supremo de justicia militar, al procurador público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, que requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la investigación preparatoria correspondiente”; de acuerdo a lo regulado en los artículos 454° y 455° del Código Procesal Penal.

No existe inconveniente en aplicar el mecanismo de la Terminación Anticipada en los casos seguidos contra los funcionarios públicos por delitos de función.

2.2.5.2.3 Proceso de Seguridad

Este proceso se encuentra estipulado en el Libro V, Sección Tercera, artículos 456° al 458° del Código Procesal Penal, y está dirigido a personas consideradas inimputables, conforme al inciso 1 del artículo 20° del

Código Penal²⁷, a las cuales se les impondrá una medida de seguridad como consecuencia jurídica de la comisión de un delito. El Código Penal establece dos medidas de seguridad: a) Internación y b) Tratamiento ambulatorio.

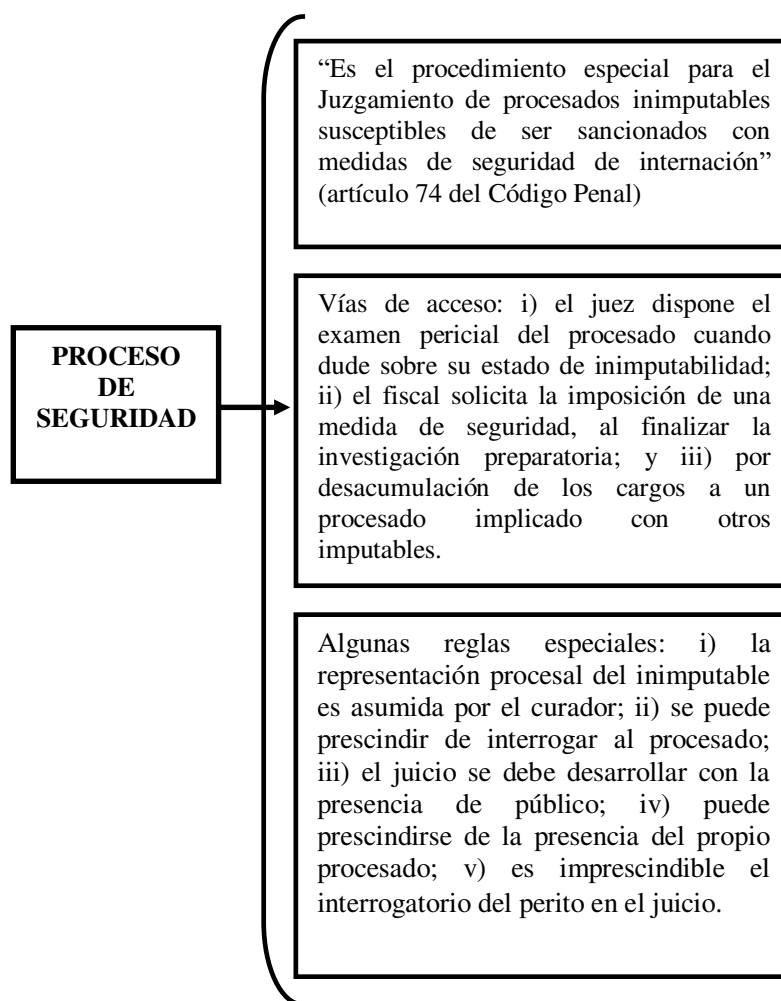
Por el estado de inimputabilidad del procesado, no es aplicable la terminación anticipada en el proceso de seguridad, toda vez que la terminación anticipada se rige por el Principio del consenso o justicia negociada entre el Ministerio Público y el imputado asistido por su defensa.

El gráfico N° 2²⁸ nos muestra en forma resumida las características de este proceso.

²⁷ Código Penal. “ Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:

1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión”

²⁸ Véase: <http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/procesodeseguridad.pdf>. fecha 10 de mayo de 2016.

Gráfico 2

2.2.5.2.4 Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal

El Magistrado Neyra Flores expresa que este proceso “tiene su justificación en el objeto materia del proceso, pues se persigue un delito de poca relevancia en términos de alarma social, cuya incoación, depende absolutamente de la parte agraviada; por ello su regulación es similar a la del proceso civil, al ser un proceso que depende, tanto en impulso como en su total desarrollo, de la voluntad de las partes” (Neyra Flores, 2010: 428).

Este proceso se encuentra estipulado en el Libro V, Sección Cuarta, artículos 459° al 467° del Código Procesal Penal, en el que no interviene el Ministerio Público por ser un proceso regido por el ejercicio privado de la acción penal, por ende, no es aplicable el mecanismo de terminación anticipada.

2.2.5.2.5 Proceso de Terminación Anticipada

Este proceso especial tiene como objetivo culminar el proceso en la etapa de investigación preparatoria, está normado en el Libro Quinto, Sección V, artículos 468° al 471° del Código Procesal Penal de 2004.

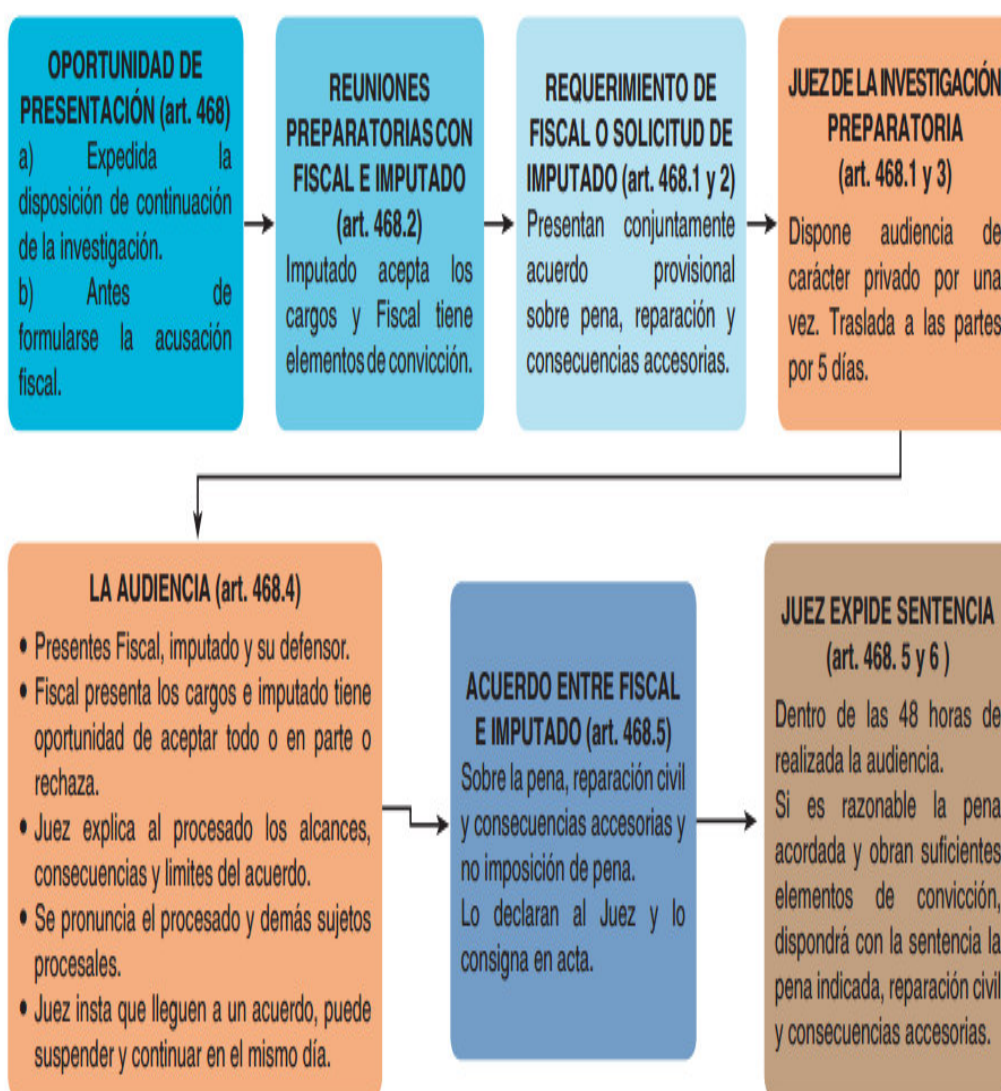
Está basado en el principio de consenso, que dicta que el fiscal y el imputado con asistencia de su defensor “negocian para llegar a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la ley penal; de aprobarse el acuerdo por el juez se emitirá la sentencia anticipada” (art. 468° NCPP).

El desarrollo de este proceso lo realizaremos en el siguiente capítulo, más a manera de resumen mostramos el gráfico N° 3²⁹ referido al procedimiento a seguir en este proceso.

²⁹ Véase: <http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/guia_actuacion_fiscal.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

Gráfico 3

2. **EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Es un proceso que evita la investigación y el juzgamiento, al existir elementos de responsabilidad y un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, donde el imputado acepta los cargos, pudiendo obtener reducción de la pena en una sexta parte. Este acuerdo debe ser aprobado por el Juez.



2.2.5.2.6 Colaboración Eficaz

Este proceso se encuentra normado en el Libro V, Sección Sexta, artículos 472° al 481°-A del Código Procesal Penal³⁰.

Nuestra normatividad establece que el fiscal está facultado para promover o recibir pedidos de colaboración eficaz y en su caso, cuando se planteen verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a suscribir el acuerdo de beneficios y colaboración, con quien se encuentre o no sometido a un proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal.

Teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración, en concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho, el colaborador podrá obtener los siguientes beneficios premiales:

- 1) exención de la pena.
- 2) disminución de la pena.
- 3) suspensión de la ejecución de la pena.
- 4) remisión de la pena para quien la esté cumpliendo.

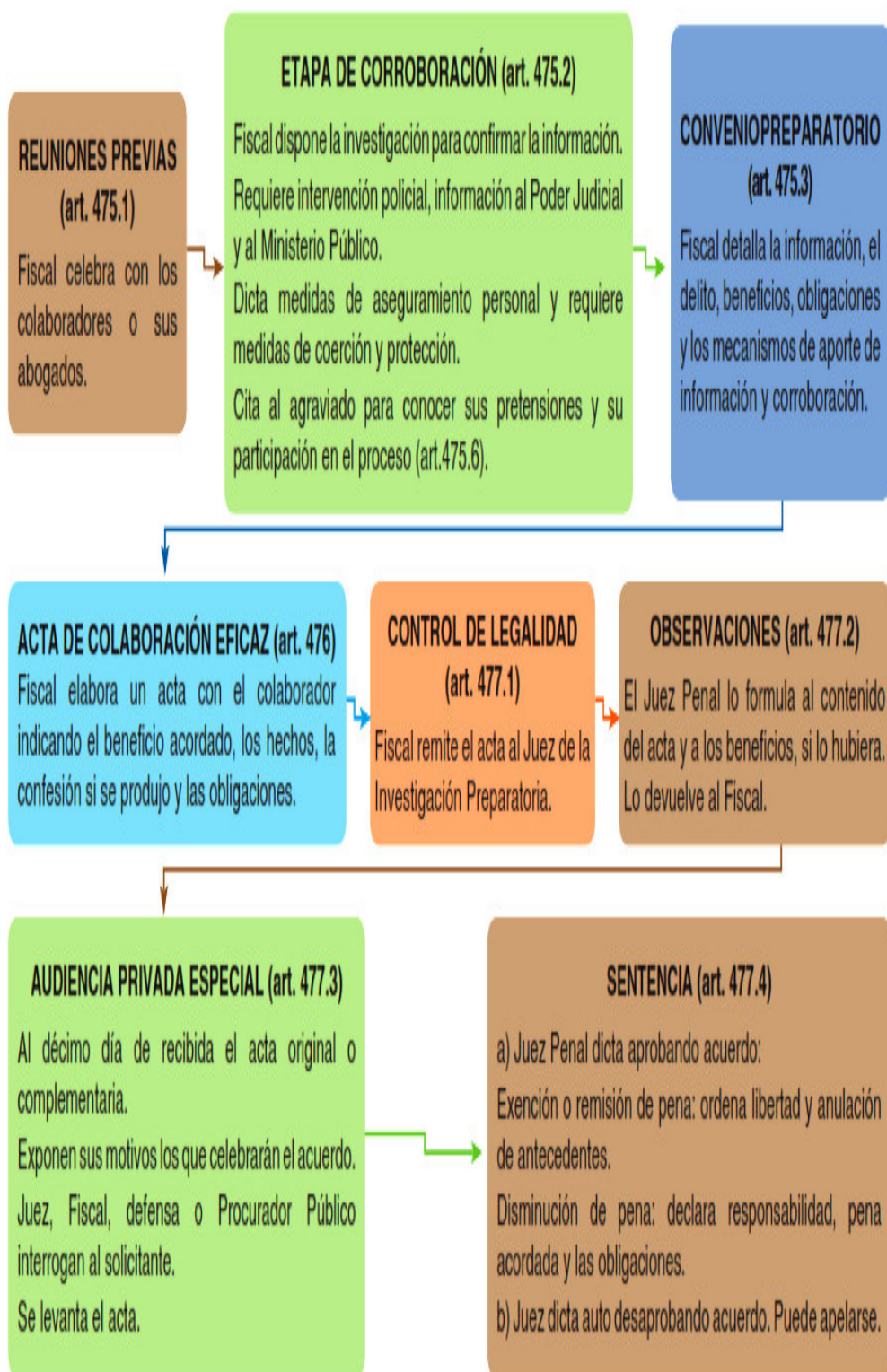
³⁰ De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al Proceso Especial por Colaboración Eficaz. Publicado el 30 de diciembre de 2016.

En tal sentido, siendo la institución de la colaboración eficaz autónoma a otros procesos, no se encuentra normada una acumulación de beneficios por aplicación de Terminación Anticipada.

El gráfico N° 4 nos muestra de manera sucinta el procedimiento a seguir en este proceso³¹.

³¹Véase:<http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/guia_actuacion_fiscal.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

Gráfico 4



2.2.5.2.7 Proceso por Faltas

Neyra Flores sostiene que “el objeto de este proceso está constituida por contravenciones llamadas por el código penal como *faltas*, las que son infracciones de la norma penal que lesionan bienes jurídicos de menos intensidad o la agresión a ellos es mínima, por tal motivo su regulación en el derecho penal material sustantivo es diferente a la de los delitos; pero en estricto, como lo ha establecido la doctrina, es un proceso ordinario, como el proceso común” (Neyra Flores, 2010: 428).

El Código Procesal Penal lo regula en el Libro V, Sección Séptima, artículos 482° al 487°, siendo competentes los jueces de paz letrado para dirigir su procedimiento en primera instancia; se establece que el juez convoca a una audiencia, la cual se instala con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso con la concurrencia del querellante y su defensor. En la audiencia puede arribar el imputado a una conciliación o acuerdo de reparación con el agraviado, dándose por concluida las actuaciones; de no llegar a un acuerdo, pero el imputado admite su culpabilidad, el juez dará por concluido el debate y dictará sentencia.

En tal sentido, no es viable la aplicación de la terminación anticipada en el Proceso por Faltas, toda vez que no interviene el Ministerio Público para arribar a un acuerdo con el imputado y su defensa técnica.

2.2.6 La Conformidad como Conclusión Anticipada

Reyna Alfaro informa que “la conformidad es una institución íntimamente vinculada con el principio de oportunidad. A través de esta figura el acusado muestra su conformidad con los términos de la acusación fiscal permitiendo la conclusión anticipada del proceso sin que resulte necesaria la actuación en el juicio oral” (cf. Reyna Alfaro. 2014: 113).

Barona Vilar menciona que “es una manifestación del principio dispositivo en el proceso penal y en consecuencia como una clara excepción al principio de oficialidad que informa el mismo” (Barona. 1994: 222).

Karin Fernández enseña que “la conformidad es un acto puro, por cuanto la aceptación del imputado se refiere estrictamente a los cargos estipulados en la acusación fiscal, pero no respecto a la pena y la reparación civil, aspectos que pueden ser objeto de cuestionamiento” (Karin Fernández Muñoz: *web*³²).

2.2.6.1 Tratamiento normativo en el Código Procesal Penal

El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio o conformidad, la cual se produce en la fase inicial del juzgamiento en el proceso común.

El juez le preguntará al acusado, después de haberle instruido de sus derechos, si admite ser autor o partícipe del delito materia

32

Véase: <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13342/13969>> de fecha 15 enero de 2017

de acusación y responsable de la reparación civil; ante ello, el imputado puede reaccionar de dos maneras:

1. Responder afirmativamente previa consulta con su abogado defensor, aceptando la autoría o participación en los delitos establecidos en la acusación fiscal; en este caso, el juez declarará la conclusión del proceso y dictará sentencia en estricto cumplimiento con el acuerdo.
2. Solicitar personalmente o a través de su abogado, conferenciar con el fiscal para arribar a un acuerdo sobre la pena, para tal efecto se suspenderá por breve término la audiencia. El juez deberá dictar sentencia en la misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio.

Pero si el juez estima que no constituye delito el hecho aceptado, o concurra cualquier causa que exima o atenúe la responsabilidad penal, dictará la sentencia que corresponda, pero no la sentencia conformada.

Como se ha mencionado, el acusado puede aceptar los hechos imputados en la acusación fiscal y contradecir lo referente a la pena punitiva y la pretensión civil; en este caso, el juez previo traslado a las partes, continuará el debate respecto a la aplicación de la pena o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios probatorios que deberán actuarse en cuanto a este extremo se refiere.

La ley contempla la conformidad parcial, es decir, si en un caso con pluralidad de imputados, uno o más acusados se acoge a la conformidad y otros no, se emitirá sentencia de conformidad con respecto a los primeros, y en cuanto a los no confesos se continuará el proceso; asimismo, es factible que el inculpado que

se acogió a la conformidad puede declarar en el juicio contra los no confesos.

Respecto a la pena, se aplicará análogamente a lo dispuesto para el beneficio del acogimiento a la terminación anticipada, es decir, una reducción que sea inferior a la sexta parte. Por otro lado, si en el juicio surgen nuevos datos que favorezcan al procesado, se puede revisar la sentencia con la finalidad de atenuar la pena.

En cuanto a la reparación civil, el juez se limitará al monto fijado en la acusación fiscal, salvo que exista cuestionamiento por quien se hubiere constituido como actor civil en el proceso; de ser el caso, el juez penal podrá fijar el monto si su imposición resultare posible o diferir su determinación con la sentencia.

2.2.6.2 La Conformidad Procesal y la Terminación anticipada incluidos en criterios de oportunidad, en el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116

Los vocales integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116 decidieron abordar la conformidad parcial, la declaratoria como testigo del imputado conformado, el alcance de los efectos vinculantes de la conformidad del acusado, la medición de la pena en relación con la conformidad y la confesión, así como, la conformidad y el objeto civil del proceso penal; señalando básicamente lo siguiente³³:

³³ Véase:<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_jurisprudencia_sistematizada/as_acuerdos_plenarios/as_AcuerdosPlenariosenMateriaPenal/as_AcuerdosPlenarios2008/> de fecha 30 enero de 2017

“En sus fundamentos 8 y 9 señala que el aspecto sustancial de la conformidad estriba en el reconocimiento, teniendo como objeto la pronta culminación del juicio a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos establecidos en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas. Es un acto procesal expreso y unilateral de disposición de la pretensión, cuando se renuncia a los actos del juicio oral, y del contenido jurídico material de la sentencia, y convenir la expedición de una sentencia condenatoria en su contra. El único negocio procesal es la denominada *conformidad premiada*, establecido en el artículo 372° apartado 2 del Código Procesal Penal, en cuanto describe que el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena. La oportunidad procesal de la conformidad es hasta antes de la declaración del imputado en el Juicio Oral.

En sus fundamentos 19° al 23°, indica lo que debemos entender por conformidad y confesión sincera, y algunas similitudes y diferencias entre la conformidad y la terminación anticipada, específicamente el artículo 471° del Código Procesal Penal. En cuanto a la equivalencia entre la conformidad y la confesión sincera, determinan que existe cierta coincidencia entre la regulación entre dos instituciones; al establecerse que el inculcado realizó una declaración autoinculpatoria reconociendo los hechos atribuidos de forma sincera.

En el fundamento 22°, señalaron que los rasgos esenciales entre la terminación anticipada y la conformidad procesal derivan del hecho que están incardinadas en criterios de oportunidad y de aceptación de los cargos y que el principio de consenso comprende ambas instituciones procesales; y que la diferencia radica en la oportunidad procesal en que se llevan a cabo; por consiguiente, el beneficio de reducción de una sexta parte de la pena no puede ser igual a la conformidad procesal que es menor a ésta”

Concluyen los magistrados, que toda conformidad que reúna los requisitos legales, tiene como efecto el beneficio de reducción de la pena, sin perjuicio del beneficio de la confesión, que de presentarse se acumulará al primero.

En tal sentido, el Acuerdo Plenario 05-2008/CJ-116, tuvo un análisis distinto de la institución de la terminación anticipada, con relación a lo señalado en el Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116; puesto que en el primer Acuerdo se señaló que “la terminación anticipada, así como, la conformidad procesal, están incorporados en criterios de oportunidad y de aceptación de cargos”; sin embargo, en el segundo Acuerdo se excluye a la terminación anticipada de ser considerado un criterio de oportunidad en nuestro Código Procesal Penal, al señalar en su fundamento 18 que:

Nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o criterios contemplados en el artículo 2° NCPP; y este último artículo solo hace referencia exclusiva al Principio de Oportunidad, como forma de abstenerse del ejercicio de la acción penal, bajo supuestos distintos de la terminación anticipada.

CAPÍTULO III: TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL PERUANO

3.1 ANTECEDENTES

Sobre los antecedentes del proceso de terminación anticipada, debemos señalar que son instituciones de justicia negociada, tanto del sistema jurídico anglosajón con el *Plea bargaining* de la legislación norteamericana; como del sistema continental, el *Pateggiamento* de la legislación italiana y el principio de oportunidad de la legislación alemana; las mismas que fueron desarrolladas a detalle en el segundo capítulo de esta tesis.

También debemos considerar como referencia legislativa a la institución de los “Preacuerdos y negociaciones” de la legislación colombiana, regulada en el Libro III, Título II, Capítulo Único del Código de Procedimiento Penal de Colombia aprobada el 31 de agosto de 2004, procedimiento que se encuentra detallado como legislación comparada en este capítulo.

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN

A opinión del autor Sánchez Velarde la terminación anticipada “aparece como un mecanismo de simplificación del procedimiento, acorde con las nuevas corrientes doctrinarias y legislativas contemporáneas. Se sustenta en el llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena mediante una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el fiscal, con la aprobación necesaria del Juez” (Sánchez Velarde. 2004: 922).

Albrecht refiere que la terminación anticipada es “una transacción, un acuerdo interpartes, en la medida que los sujetos procesales (Ministerio Público y el acusado) se otorgan recíprocas concesiones” (cf. Reyna, 2009: 139).

Para César San Martín “el procedimiento de terminación anticipada se sitúa en la necesidad, muy sentida, de conseguir una justicia más rápida y eficaz, aunque respetando el principio de legalidad procesal; y que la idea de simplificación del procedimiento parte del principio de consenso” (2006: 1348).

En resumen, podemos definir a la institución de la terminación anticipada como un proceso especial y de simplificación procesal basada en el principio de consenso que faculta la negociación del Ministerio Público con el procesado a fin de realizar un acuerdo previo de admisión de culpabilidad a cambio del beneficio de reducción de la pena prevista por ley, acuerdo que deberá ser evaluado por el juez de investigación preparatoria en una audiencia especial y que de ser aprobada permitirá la conclusión del proceso.

El Tribunal Constitucional ha sostenido que “la terminación anticipada es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía con admisión de culpabilidad de alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva” (Web)³⁴.

Por otro lado, el proceso de terminación anticipada no siempre fue entendida por los sujetos procesales como un proceso especial generándose algunas confusiones acerca de su procedimiento; ante lo cual, los vocales de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron el 13 de noviembre de 2009 en su V Pleno Jurisprudencial a fin de dilucidar algunos aspectos esenciales de este proceso y diferencias con

³⁴ En la STC N° 00855-2003-HC/TC del 8 de julio de 2004. Véase:<<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00855-2003-HC.html>> 10 de mayo de 2016.

el proceso común, aprobaron el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116³⁵ que señala lo siguiente:

- 1) “El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y examen jurídico penal que hace el juez en el proceso común luego del juicio oral. En este último el juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocidos para su conformación sobre la base del consenso procesal” (fundamento 12°).
- 2) “El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe en la terminación anticipada” (fundamento 17°).

35

Véase:<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8246b4004075b97fb5e9f599ab657107/ACUERDO_PLENARIO_05-2009-CJ116_301209.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8246b4004075b97fb5e9f599ab657107> de 9 de mayo de 2016.

3.3 PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

La inserción del proceso de terminación anticipada en nuestra legislación procesal como parte de una política criminal de justicia negociada ha tenido sus defensores y detractores.

Desde la perspectiva constitucional, podemos mencionar que la sustentación de la viabilidad de esta institución se basa en los principios de legalidad, celeridad y economía procesal; por otro lado, sus detractores refieren que esta institución estaría vulnerando el principio-derecho de presunción de inocencia y el derecho del inculpado a un juez imparcial, de alcance constitucional.

3.3.1 Principio de Legalidad

Nuestra Constitución Política del Estado consagra en su artículo 2º, inciso 24, literal d, que: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

De ello se colige que el principio de legalidad en el proceso penal es el principal límite para evitar cualquier ejercicio abusivo del poder estatal; toda vez que éste se haya sometido a los límites que le impone la ley; observándose así las garantías y protección de los derechos fundamentales que le asisten a las personas.

En cuanto a la aplicación práctica del principio de legalidad penal en la terminación anticipada, podemos decir que esta institución posee

límites normativos relacionados con las pautas de individualización judicial de la pena, lo que no le resta a su condición de negociación entre el fiscal y el imputado, que se refieren a la pena y la reparación civil (Reyna Alfaro, 2009: 141).

Asimismo, en el fundamento 10° del Acuerdo Plenario N° 05-2009 se menciona los diferentes planos del control de legalidad del acuerdo preliminar entre el fiscal y el imputado en el proceso de terminación anticipada, que a la letra dice: “El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes: A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible. B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina “pena básica”-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las consecuencias accesorias. C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad”.

3.3.2 Principios de Celeridad y Economía Procesal

Los principios de celeridad y economía procesal como sustentos para modificar el anterior Código Procesal Penal de 1991 a un sistema acusatorio, dando lugar al actual Código Procesal Penal de 2004, el cual contempla en su exposición de motivos la necesidad de plantear propuestas de mejoras a fin de que el Estado cumpla con su obligación de seguir procesos rápidos y eficaces, que conlleven a la dación de

sentencias que solucionen el conflicto generado por el delito, satisfaciendo las expectativas de sanción y resarcimiento, bajo la observancia de las garantías emanadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El artículo 139°, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, establece que son Principios y derechos de la función jurisdiccional: “(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

Rioja Bermúdez señala que “el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas implica un equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa; por lo que la ley debe buscar armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menor lapso posible, y el derecho de defensa que implica que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa. En cuanto al principio de Economía procesal, Monroy Gálvez, quien a su vez cita a Devis Echandía, tiene manifestaciones en ahorro a tres niveles distintos, pero fuertemente vinculados a propósito del proceso. En primer lugar, un *ahorro de tiempo* evidentemente; asimismo, tiene una manifestación a nivel de *economía de gasto*, en el sentido que los costos del proceso, no pueden ser un impedimento para que las partes ejerzan sus derechos, de ahí que sea particularmente relevante el tiempo invertido por la administración de justicia en resolver un conflicto, dado que ese tiempo tiene una valoración patrimonial para las partes y para el Poder Judicial; y finalmente la *economía del esfuerzo* que consiste en *la supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de los jueces y auxiliares de justicia y simplificando cada proceso en particular, debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia*” (Rioja Bermúdez: 2008, *web*³⁶).

³⁶ Ver <http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2008/12/01/celeridad-procesal-y-actuacion-de-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civil-peruano/>> fecha 18 enero de 2017.

Lo expuesto, guarda relación con el principio del plazo razonable, que se encuentra implícito en el derecho al Debido Proceso; en razón a que la población espera que la respuesta de los operadores que imparten justicia, sea más rápida y eficaz a fin de resolver los procesos en un tiempo razonable, con buena calidad de decisiones y que las sentencias que se dicten sean debidamente ejecutadas; esto último es el contenido esencial del principio de tutela judicial efectiva.

Los principios examinados son el fundamento material del proceso de terminación anticipada, al igual que los otros procesos especiales, cuya finalidad es simplificar y concluir el proceso, con el acuerdo entre las partes, resolviendo el conflicto generado por infringir la ley penal.

3.3.3 Presunción de Inocencia

Este principio constitucional está consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal “e” de la Carta Magna, expresa: *“Toda es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”-*

Los sustentos en contra de la aplicación de la terminación anticipada, tienen como uno de sus fundamentos la posible vulneración del principio de presunción de inocencia señalando que este proceso vulnera el derecho del inculpado cuando renuncia a su posibilidad de demostrar su inocencia y contestar la imputación realizada en su contra a través de medios de prueba; es decir, no hay contradicción ni defensa.

Maldonado Avilés nos dice que con la aplicación de este proceso “el Estado se revelaría a la obligación de asumir la carga de la prueba y de establecer la responsabilidad del imputado más allá de toda duda razonable” (cf. Reyna Alfaro 2014: 142)

Refutando esta posición, Reyna Alfaro (2014:142), refiere que “si se sostiene que el imputado, a través de la terminación anticipada, renuncia a su derecho de presunción de inocencia, la consecuencia lógica de dicha afirmación sería el reconocimiento que a través de aquella se reduce e incluso desaparece la existencia de una *mínima actividad probatoria* como requisito para la determinación de la responsabilidad penal. Sin embargo, dicha propuesta se opone al contenido del inciso sexto del artículo 468° del Código Procesal Penal, que exige que el acuerdo de terminación anticipada entre el fiscal e imputado sea sometido a control judicial que incluya, dentro de sus ámbitos esenciales, el *análisis de razonabilidad de los medios de convicción*, con la cual la voluntad del imputado de perder su estatus de inocencia no podrá anteponerse ni superar los controles judiciales de razonabilidad que establece la ley”.

3.3.4 Juez Imparcial

Debemos señalar que cuando nos referimos al derecho a un juez imparcial, hacemos referencia al derecho que tiene toda persona a que sus casos y controversias jurídicas sean decididos por un tercero que es ajeno al conflicto, dentro del proceso penal preestablecido.

La jurisprudencia y doctrina de los derechos humanos han señalado que “los contornos de este derecho, ligándolo expresamente con el derecho al debido proceso. Además lo relacionan con el principio del juez natural y los derechos del juez predeterminado por la ley y de independencia judicial. Se ha identificado, en el nivel doctrinario y jurisprudencial que, este derecho en su *contenido esencial* supone dos aspectos: el subjetivo, que intenta evitar el juez prejuicioso mientras, que la imparcialidad objetiva pretende desterrar cualquier duda sobre la apariencia de imparcialidad del juez” (Chunga Hidalgo: *web*)³⁷.

³⁷ Véase: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140908_02.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

El Tribunal Constitucional sostuvo que el principio de independencia del juez está estrechamente vinculado con el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el cual no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Sin embargo, ello no ha impedido reconocer a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso³⁸ (cfr. sentencia 6149-2006-AA/TC, fundamento 48].

En efecto, nuestra constitución política, en su artículo 139°, inciso 3, segundo párrafo, reconoce: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”.

Así, uno de los argumentos de oposición al proceso de terminación anticipada se basa en que la norma establece que el juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo de terminación anticipada –artículo 468.4 del Código Procesal Penal³⁹-, lo cual iría contra la garantía de imparcialidad, por el cual el juez está impedido de propiciar la declaración de responsabilidad del imputado. Sin embargo, el acto de “instar” debe ser entendido no como un medio de coacción a la voluntad de alguna de las partes, sino como una propuesta de negociación entre éstas, a fin de que concluya el proceso sin necesidad de llegar a la etapa de debate de las pruebas; de tal forma que, si el imputado no quiere realizar el acto de negociación, ni acogerse a un proceso especial breve, en ejercicio de su derecho de defensa y presunción de inocencia, tiene la plena facultad de continuar con un proceso regular o común.

³⁸ En la STC EXP. N.º 04375-2015-PHC/TC AYACUCHO. Luis Miguel Palomino Vargas, se señala: “El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez por la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.” Fundamento 13.

³⁹ Código Procesal Penal. “Artículo 468.- Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas: 4. (...) El Juez instará a las partes, como consecuencia del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la audiencia por breve término, pero deberá continuar el mismo día (...).”

3.4 NATURALEZA JURÍDICA

Conforme lo señalan Peña y Frisancho, “la razón de esta forma de simplificación procesal, se sustenta en que el proceso penal tradicional no cumple su finalidad, creándose un malestar generalizado en la sociedad, que implica una desconfianza total en el órgano jurisdiccional. Todo ello ha dado paso a que se asomen instituciones modernas como la terminación anticipada, la cual viene siendo acogida ampliamente en el Derecho comparado” (2003: 101).

Así, estos autores nos dicen que la estructura del estado carece de capacidad y medios para involucrar a todas las personas merecedoras en el proceso penal; por lo que, la selección se queda envuelta en la colisión de intereses, tanto del poder como reales desigualdades sociales. Así, el principio de oportunidad ha logrado instalarse con mejores resultados a las teorías utilitarias de la pena, esto es, aquellas que buscan legitimar y fundamentar el límite de las penas. Siendo que “el principio de oportunidad como mecanismo esencial de la terminación anticipada del proceso plantea concretamente la selección de fines específicos: no dejar el cumplimiento de la ley al azar y superar las disfuncionalidades del ejercicio desigual de la ley” (2003: 106-107).

Sobre el Principio de oportunidad Martínez Gamboa señala que “en el sistema de países anglosajones (sentido amplio o libre) y en el sistema de países europeos (sentido restringido o reglado), podemos hablar de la terminación anticipada como principio de oportunidad en su sentido amplio, que supone la discrecionalidad de la actuación en la persecución penal; es decir, la libertad absoluta para decidir sobre el ejercicio de la acción o de la acusación penal” (2011, 49, *web*⁴⁰).

⁴⁰ Véase <http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/1005/indice.htm>. Fecha 29 de julio de 2017.

Por otro lado, el sustento primordial del proceso especial de terminación anticipada, está basado en el principio de consenso, pues faculta la negociación del fiscal con el imputado asistido por su abogado defensor; otorgándole al primero la facultad de reducir la pena básica establecida por ley, a cambio que el segundo acepte alguno o algunos de los cargos imputados. Los márgenes de la negociación son los siguientes: 1) los cargos no son negociables, 2) la pena a imponerse guarda relación con los cargos y está plenamente establecido en la ley penal. 3) el quantum de la reducción de la pena está determinada expresamente en la ley.

Sobre la naturaleza jurídica de la terminación anticipada y sus diferencias con el principio de oportunidad en nuestro país, los jueces supremos en lo penal analizaron los aspectos esenciales del proceso de terminación anticipada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, a saber:

“§ 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada.

6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente de aquél.

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su estructura procesal.”

Por lo que, podemos señalar que la naturaleza jurídica del proceso especial de terminación anticipada se sustenta en dos principios: el principio de oportunidad en su sentido amplio y el principio de consenso.

3.5 CARACTERÍSTICAS

Molina López, refiere que las características de la terminación anticipada derivan de la “teoría weberiana de racionalización”, la cual “desarrolla cuatro niveles: *eficacia, cálculo, previsibilidad y control*. En el primer nivel, la *eficacia*, se plantea una variación del estado de las cosas, se pasa de un estado de necesidad a un estado de satisfacción de la necesidad. En un segundo nivel, de *cálculo*, se parte de una suerte de equiparación entre los ámbitos cuantitativos y cualitativos: cantidad y calidad son lo mismo, lo que – como es lógico- supone la exigencia de la prestación del servicio en el menor tiempo posible. En el tercer nivel, es la de *previsibilidad*, la gente sabe que al esperar no tendrá sorpresas. Finalmente, en el nivel de *control*, se prevé la obligación de respetar las normas y pautas establecidas” (cf. Reyna Alfaro 2014: 115).

Cubas Villanueva⁴¹ señaló como principales características del proceso de terminación anticipada, las siguientes: “1) Es un mecanismo de simplificación procesal de carácter consensual, 2) Se plantea únicamente durante la investigación preparatoria, 3) Solo se puede requerir o solicitar por una sola vez y 4) En caso de pluralidad de hechos punibles o imputados se admite por excepción acuerdos parciales”.

Además, esta institución originalmente era aplicada a todos los delitos; sin embargo, posteriormente se han publicado modificatorias del artículo 471° del Código Procesal Penal, que exceptúan la aplicación del beneficio premial de reducción de una sexta parte de la pena, en los casos siguientes:

⁴¹ Véase:<http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2064_3_salidas_alternativas_y_celeridad_procesal.pdf> fecha 10 de mayo de 2016.

- Cuando sea el procesado un integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella; a partir de la vigencia de la Ley 30076⁴², publicada el 19 de agosto de 2013.
- En los Delitos contra la Libertad, previstos en los capítulos IX (Violación de la libertad sexual), X (Proxenetismo) y XI (Ofensas al pudor público) del libro segundo del Código Penal; a partir de la vigencia de la Ley N° 30838, publicada el 04 de agosto de 2018.
- En los delitos de feminicidio contemplados en el artículo 108-B del Código Penal, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1382, publicado el 28 de agosto de 2018.

Desde una interpretación literal a la ley, el juez de la investigación preparatoria, dispondrá la celebración de la audiencia de terminación anticipada, una vez expedida la Disposición fiscal del artículo 336⁴³ y hasta antes de formularse acusación fiscal (inc. 1 del art. 468° del NCPP); es decir, durante la etapa de investigación preparatoria.

No obstante, la característica más controversial es la limitación de su presentación solo en la etapa de investigación preparatoria; la posibilidad de su planteamiento en la etapa intermedia del proceso común es sostenida por algunos doctrinarios y juristas al considerarlo un criterio de oportunidad.

Sin embargo, en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, los jueces supremos en lo penal se han pronunciado sobre la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, dejando establecido como doctrina legal que deben ser invocada por los jueces de todas las instancias judiciales⁴⁴, lo siguiente:

⁴² “Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea Registros y Protocolos con la finalidad de Combatir La Inseguridad Ciudadana”, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 2013.

⁴³ “Código Procesal Penal. Artículo 336 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria.-1. (...) 2. La Disposición de formalización contendrá (...)”.

⁴⁴ Sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° de la misma ley.

- 1) “El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas al Fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un criterio de oportunidad. Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento – en la medida de lo posible y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el órgano jurisdiccional – de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del Código Penal y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o *criterios* contemplados en el artículo 2° NCPP. Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de acusación. Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo *criterios de oportunidad*, los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP”. (fundamento 18°).
- 2) “La incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de

reducción de la pena de una sexta parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal” (fundamento 19°).

- 3) “La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la asistencia del fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal y del imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurra el acusado concernido o los otros, si fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal. Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no será posible” (fundamento 20°).
- 4) “La incorporación pretoriana de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida en el artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal” (fundamento 21°).

Dicha interpretación jurisprudencial de la máxima instancia del Poder Judicial, vincula a los demás jueces a aprobar los acuerdos de terminación anticipada que han sido presentados solo durante la etapa de investigación preparatoria.

Para ello, se sostiene en el principio de contradicción y el cuestionamiento de la pretensión punitiva del Ministerio Público que rige en la Audiencia Preliminar de Control de Acusación (etapa intermedia), donde no está obligado a acudir el acusado, sino solo su defensa técnica; en el mismo sentido, señala que en caso que no concurra el acusado, sería imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada y su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, afectando la celeridad procesal; sin embargo, dichos argumentos quedarían desvirtuados, toda vez que se viene aplicando la terminación anticipada en la audiencia de incoación del proceso inmediato, conforme a lo regulado en el artículo 447°.3 del Código Procesal Penal⁴⁵.

Asimismo, en la audiencia de presentación de cargos que rige en los procesos comunes para los casos donde sigue vigente el Código de Procedimientos Penales, en cuya audiencia rige el Principio de contradicción, no obstante, conforme a lo establecido en el artículo 77°-B del Código de Procedimientos Penales⁴⁶ es viable concluir el proceso con una sentencia anticipada, para ello solo basta que el juez notifique debidamente al procesado para que acuda a la audiencia; de no asistir éste simplemente se continúa con la audiencia en presencia de su abogado defensor de elección o de la defensa pública, evidenciándose con la incomparecencia del procesado el desinterés de arribar a una sentencia anticipada.

En cuanto a la interpretación que realiza la Corte Suprema, si bien es cierto hace referencia a lo establecido en el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica para restringir la terminación anticipada solo a la primera etapa del proceso (investigación preparatoria), es decir antes que se formule la acusación; sin embargo, de acuerdo al mismo Código, es posible aplicar también un mecanismo de negociación en el procedimiento intermedio (etapa intermedia), etapa en la cual el tribunal

⁴⁵ Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto legislativo 1307, publicado el 30 de diciembre de 2015

⁴⁶ Artículo incorporado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1206, publicado el 23 de septiembre de 2015.

ordena “la notificación del requerimiento del ministerio público (acusación) al imputado y a las demás personas que hayan pretendido, con éxito o sin él, la intervención en el procedimiento, con copia del escrito, colocando las actuaciones y los medios de prueba a su disposición en el tribunal, para su consulta, por el plazo de seis días”⁴⁷.

Así, en el artículo 371° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, se regula en el Libro Cuarto los Procedimientos Especiales, entre ellos el procedimiento abreviado, que “establece una forma de mecanismos de negociación de penas entre el Ministerio Público con acuerdo del imputado y su defensor, y que se extiende a la admisión del imputado del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la vía propuesta; asimismo, establece que el tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado; pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el ministerio público”⁴⁸.

⁴⁷ Conforme a lo establecido en el artículo 267° del Código Procesal Penal.

⁴⁸ En <http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4215/textocodigoprocesalpenal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica LIBRO CUARTO. TITULO I PROCEDIMIENTO ABREVIADO:

“371. Admisibilidad. Si el ministerio público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a dos años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, aun en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el tribunal del procedimiento intermedio. Para ello, el ministerio público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la vía propuesta (...).

372. Trámite posterior. El tribunal oír al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. El tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado; pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el ministerio público. Rigen, en lo pertinente, las reglas de la sentencia. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la requerida, rechazará el requerimiento y emplazará al ministerio público para que concluya la investigación y requiera lo que corresponda (...).

373. Efectos. Contra la sentencia será sólo admisible el recurso de casación, interpuesto por el ministerio público o por el imputado y su defensor. El querellante, o quien sin éxito, pero con derecho, haya pretendido serlo durante el procedimiento preparatorio, tendrá las facultades previstas en los arts. 339 y 340; no podrá, sin embargo, agravarse por la vía elegida o pretender la imposición de una pena superior a la requerida por el ministerio público (...).”

3.6 REQUISITOS

En la legislación y jurisprudencia se han establecido como requisitos de procedencia de este proceso, los siguientes:

- a) Que el imputado o imputados acepten la responsabilidad respecto del hecho punible objeto del proceso penal, previo a la posibilidad de negociación⁴⁹.
- b) La solicitud sea presentada solamente una vez (por una única vez); si fuere reiterativo, el juez declarará su inadmisibilidad.
- c) Que sea presentada cuando se ha expedido la disposición de formalización de investigación preparatoria y hasta antes de la formulación de la acusación fiscal.

En el caso de los acuerdos parciales, se considerarán:

- Cuando los delitos sean conexos o tengan relación con los otros imputados.
- Los acuerdos parciales no perjudiquen la investigación.
- Puedan desaccumularse.

3.7 DELITOS EN QUE PROCEDE

Antes de la vigencia del Código Procesal Penal de 2004, la terminación anticipada del proceso estaba limitada a dos delitos:

- a) Las modalidades menos graves de delito de tráfico ilícito de drogas tipificados en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código Penal

⁴⁹ Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116 fundamento 7°.

(Ley N° 26320⁵⁰), regulando que una vez que el imputado admitiera los cargos se beneficiaría con la disminución de una sexta parte de su pena.

A fin de una mejor tramitación de este procedimiento, la Fiscalía de la Nación expidió la Circular N° 005-95-MP-FN⁵¹, sobre el proceso de terminación anticipada en los delitos de tráfico ilícito de drogas.

- b) El íntegro de delitos aduaneros (Ley N° 26461, modificado por la Ley N° 28008⁵²).

Luego, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 28671⁵³, se aplica para todos los delitos a nivel nacional.

3.8 ETAPAS O FASES

Como ya sabemos, el proceso de terminación anticipada sólo se puede solicitar en la etapa de investigación preparatoria del proceso común; ahora bien, para su mejor entender, estudiaremos el proceso desde diversas fases:

a) Antes de la Audiencia de Terminación Anticipada

Los actos que se realizan antes de la Audiencia de Terminación Anticipada son los siguientes:

⁵⁰ Ley N° 26320 de fecha 02 de junio de 1994.

⁵¹ Expedida mediante Resolución de Fiscalía de la Nación de fecha 16 de noviembre de 1995.

⁵² La Ley 26461 del 08 de junio de 1995. Artículo 24, en casos de contrabando y defraudación de rentas de aduana. Modificado luego por el artículo 20 de la Ley de los Delitos Aduaneros - Ley N° 28008-, publicado el 18 de junio 2003.

⁵³ Ley 28671, “Ley que modifica la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y dicta normas complementarias para el proceso de implementación del Nuevo Código”, publicada el 31 de enero de 2006.

a.1) Solicitud de la Audiencia

Conforme lo establece el artículo 468.1 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público y el imputado “están facultados para solicitar la celebración de una audiencia de terminación anticipada al juez de investigación preparatoria, sin que para ello o para la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una declaración al imputado”⁵⁴.

Este requerimiento tiene dos características: 1) es única, porque será solicitada solamente una vez y 2) es preclusiva, porque el tiempo de requerimiento es después de expedida la disposición fiscal y solo hasta antes de formularse la acusación fiscal.

La petición de terminación anticipada es exclusiva del fiscal o el imputado, quienes pueden plantearlo ya sea de forma alternativa o de manera conjunta; esta exclusividad se debe al hecho que éstos sujetos procesales son aquellos que tienen algo que ofrecer en la negociación; por consiguiente, los demás sujetos procesales quedan excluidos.

El actor civil, si bien queda excluido de la facultad de solicitar la realización de la audiencia de terminación anticipada, ello no lo excluye del proceso en sí, por cuanto cuenta con el interés legitimado de reclamar la reparación e indemnización del hecho punible.

Reyna Alfaro menciona que “la iniciativa de activación del procedimiento de terminación anticipada no puede corresponder al juez de la investigación preparatoria, pues aquello iría contra la garantía de imparcialidad. En virtud de esta garantía, el juez se encuentra impedido

⁵⁴ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 8°.

de propiciar la declaración de responsabilidad del imputado” (2014: 168)

Conforme lo establece el Acuerdo Plenario 05-2009, la realización de la segunda etapa del proceso de terminación anticipada, que es la celebración de la audiencia “está condicionada a que la solicitud de terminación anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia”⁵⁵.

a.2) Participar en reuniones Preparatorias para elaborar un Acuerdo Provisional

El artículo 468°.2 del Código Procesal Penal, establece que el fiscal y el imputado pueden sostener reuniones preparatorias informales para establecer un Acuerdo Provisional; estas reuniones obviamente son de carácter privado y se realizarán antes de la presentación de la solicitud de la audiencia de terminación anticipada, por cuanto el objeto de estas reuniones es la redacción del acuerdo provisional que deberá ir adjunta al requerimiento de inicio del proceso.

Las reuniones preparatorias, tienen como antecedente la confesión del imputado acerca de las circunstancias del hecho punible y que serán detalladas en el acuerdo provisional; luego se iniciarán las sesiones para tomar acuerdos consensuados sobre la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias.

En estas reuniones el fiscal y el imputado se informarán de primera mano acerca de los planteamientos e intereses de su contraparte y de las reglas de la negociación. La presencia del abogado defensor del imputado en estas reuniones preparatorias es de suma importancia a fin de orientar legalmente a su defendido; de esta forma se evitaría posteriores alusiones por falta de información al imputado respecto a

⁵⁵ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 8°.

los acuerdos establecidos o vulneración de sus derechos fundamentales.

Reyna Alfaro expresa que “la terminación anticipada constituye una negociación, pero no cualquier tipo de negociación: es una *negociación técnica* que requiere de ciertos conocimientos especiales que no se encuentran a disposición de actores legos. El imputado, por más que conozca de hechos de su caso e incluso cuando haya accedido a información jurídica relevante para el caso, difícilmente podrá igualar los estándares de conocimiento jurídico propios de un abogado” (2014: 186).

Ahora bien, la norma no detalla algunos aspectos: número de reuniones, la organización de las reuniones, el lugar en donde se desarrollarán y el lapso de tiempo; por consiguiente, se debe entender que estos aspectos quedan a disposición del fiscal y el imputado.

Sin embargo, debe considerarse lo dispuesto en los artículos 116° y 117° del Código Procesal Penal, que a la letra dicen:

“Artículo 116.- Lugar

1. Las actuaciones procesales se realizarán en el Despacho del Fiscal o del Juez, según el caso.
2. No obstante ello, el Fiscal o el Juez podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable, y no sea imposible o de muy difícil consecución, conocer directamente elementos de convicción decisivos en una causa bajo su conocimiento

Artículo 117°.- Tiempo

Salvo disposición legal en contrario, las actuaciones procesales podrán ser realizadas cualquier día y a cualquier hora, siempre que resulte absolutamente indispensable según la naturaleza de la actuación. Se consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no

pueda determinarse, de acuerdo con los datos del acta u otros conexos, la fecha en que se realizó”.

A decir de Reyna Alfaro, las reuniones deberán tener lugar en las instalaciones del Ministerio Público y en el horario habitual del despacho fiscal, a fin de evitar cualquier sospecha respecto a la corrección de la actuación del representante del Ministerio Público (Reyna Alfaro, 2014: 189 y s); criterio con el cual coincido.

a.3) Elaboración del Acuerdo Provisional

El artículo 468°.2 del Código Procesal Penal, nos indica que el Acuerdo Provisional se debe referir a la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias.

Se planteará la clase de pena a imponerse (privativa de libertad suspendida o efectiva, restrictiva de libertad, limitativa de derechos o multa), debiendo señalar los motivos de su planteamiento.

En el acuerdo se debe señalar una propuesta de pago por concepto de reparación civil a favor del perjudicado por el hecho punible; en este punto prima la disposición sobre el objeto civil del proceso.

Sobre las consecuencias accesorias, el autor Alegría Patow esgrime que “el acuerdo debe contener una propuesta sobre el destino final de los efectos e instrumentos del delito, así como sobre la afectación de la actividad de las personas jurídicas que pudieran verse involucradas en el proceso. La omisión de estos aspectos no puede ser suplida por la actividad del juez, correspondiendo al fiscal velar porque el acuerdo integre además estos aspectos” (Alegría Patow: 2012, *web*)⁵⁶.

⁵⁶ Véase: <<http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/investigaciones-doctorales/la-terminacion-anticipada-en-el-peru.pdf>> fecha 10 de mayo de 2016.

Además de estos aspectos, se deberá detallar en este documento el tipo penal aplicable y la responsabilidad del imputado en la comisión del delito. El tipo penal materia del proceso debe fluir de las investigaciones realizadas en la etapa de investigación preparatoria y que debe coincidir con la Disposición Fiscal; información que será confrontada con la confesión del imputado. Además se deberá discutir respecto a las circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal.

a.4) Oposición al inicio del proceso

El artículo 468°.2 del Código Procesal Penal establece que la continuidad del trámite del proceso de terminación anticipada, después de haber presentado la solicitud al juez, queda supeditada a la no oposición inicial del imputado o fiscal, quienes tienen cinco días hábiles para realizarlo, esta oposición será presentado por escrito.

Asimismo, “el requerimiento del fiscal o la solicitud del imputado, debe ser puesta a conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días para que se pronuncien acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones”⁵⁷.

b) Durante la Audiencia de Terminación Anticipada⁵⁸:

- Es de carácter privada; cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente.
- Es una audiencia única y de forma continua que se desarrolla en un solo día; la ley establece que la audiencia puede suspenderse

⁵⁷ De conformidad con el artículo 468.3 del Código Procesal Penal de 2004.

⁵⁸ De conformidad con el artículo 468 del Código Procesal Penal de 2004 y el Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116.

solo por un breve momento con la finalidad de que el fiscal y el imputado lleguen a un acuerdo.

- Su tramitación es incidental; es decir, no impide la continuación del proceso originario.
- Para su materialización es necesario que tanto el fiscal como el imputado no se opongan.
- Se instalará con la participación obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado defensor.
- La participación de la parte civil y el tercero civilmente responsable es facultativa, existiendo la obligación de poner en su conocimiento la instauración de la audiencia de terminación anticipada.
- El juez está obligado:
 - a) A explicar al imputado los alcances y consecuencias del acuerdo así como las limitaciones de controvertir su responsabilidad; y
 - b) A propiciar el consenso, instando a las partes luego del debate a que lleguen a un acuerdo.
- No se permite la actuación de prueba.
- El acta de la audiencia deberá contener el acuerdo entre el fiscal y el imputado respecto a las circunstancias del hecho punible, la pena, reparación civil y consecuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la ley penal.
- El control de regularidad y razonabilidad del acuerdo (calificación jurídica penal del hecho, pena, reparación civil y consecuencias accesorias) corresponde al juez.
- De existir elementos de convicción suficientes el juez dispondrá en la sentencia el quantum de la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias que corresponda a lo enunciado en el acuerdo.

Siguiendo el orden estipulado por el artículo 468.4 del Código Procesal Penal, el desarrollo de la Audiencia se realizará de la siguiente manera:

- 1° El Juez instaurará la Audiencia con la asistencia obligatoria del Fiscal, el imputado y su abogado defensor.
- 2° El Fiscal presentará los cargos.
- 3° El imputado se pronunciará aceptando o rechazando los cargos.
- 4° El Juez explicará al procesado sobre los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de contravenir su responsabilidad.
- 5° El imputado y los demás sujetos procesales presentes en la Audiencia se pronunciarán sobre la acuerdo.
- 6° El Juez instará al Fiscal y al imputado para que lleguen a un acuerdo.
- 7° Se puede suspender la Audiencia por un breve momento a fin de que el Fiscal y el imputado puedan negociar; debiendo continuar en el mismo día.
- 8° De llegar a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias, incluso la no imposición de una pena privativa de libertad efectiva; se le propondrá al juez.
- 9° El juez ordenará que los acuerdos establecidos por el fiscal y el imputado sean consignados en el acta respectiva.
- 10° El juez dictará sentencia dentro de las 48 horas de realizada la audiencia. Si la aprueba, deberá respetar los límites previstos en el acuerdo.

c) Actos posteriores a la Audiencia de Terminación Anticipada

La sentencia anticipada que aprueba el acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención procesal, cuestionando tanto la legalidad del acuerdo o el monto de la reparación civil.

El Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 en su fundamento 20°, menciona que cuando hablamos de los demás sujetos procesales, son

aquéllos fuera del fiscal e imputado. Asimismo, indica en su fundamento 16° que la resolución desaprobatoria podrá ser apelada bajo los supuestos del artículo 416.1 del Código Procesal Penal, que determina como objeto impugnabile en apelación, los autos que pongan fin al procedimiento o a la instancia (literal b) o, en su caso, los que causen gravamen irreparable (literal e).

De ser homologado el acuerdo por el Juez, y si el actor civil no aprueba el monto pactado por reparación civil, puede apelar la sentencia sobre este extremo. La apelación será revisada por la Sala Penal Superior, pudiendo incrementarla dentro de los límites de la pretensión del actor civil.

3.9 ACTUACIÓN DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN

Los sujetos intervinientes son aquellos que comúnmente participan en una relación procesal penal, es decir, el fiscal, el juez penal, el imputado, el abogado defensor y el actor civil.

a) El Ministerio Público

El Ministerio Público se encuentra representado por el fiscal, cuya actuación funcional deberá satisfacer los intereses del imputado, la víctima y la sociedad. Desde esta perspectiva, el conocimiento y el dominio de los parámetros legales correspondientes a la individualización de la pena, así como los criterios para la identificación de la reparación civil constituyen un imperativo para los fiscales (*cf.* Reyna Alfaro 2014: 193)

a.1) Solicita el inicio del proceso especial

El artículo 468°.1 del Código Procesal Penal establece que una vez que se expedida la Disposición Fiscal, el fiscal puede solicitar por única vez al juez de investigación preparatoria, el inicio del proceso de terminación anticipada.

Asimismo, la solicitud lo puede realizar de forma conjunta con el imputado. El fiscal elabora conjuntamente con el imputado el acuerdo provisional, quien deberá contar con la asesoría de su abogado defensor a fin de que pueda comprender los alcances y consecuencias del acuerdo. .

a.2) Realiza reuniones preparatorias

El fiscal está facultado para realizar uno a más reuniones preparatorias con el imputado y su abogado defensor, el número de reuniones para el acuerdo provisional dependerá de la decisión de las partes en cada caso concreto, al no estar regulado expresamente.

a.3) Elabora el acuerdo provisional

El fiscal elabora el acuerdo provisional con la participación del imputado, quien deberá contar con la asesoría de su abogado defensor, a fin de que pueda comprender los alcances y consecuencias del acuerdo. Este acuerdo será presentado al juez de investigación preparatoria para su aprobación, el cual deberá contener aspectos sobre la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias.

Asimismo, se establece los beneficios que ofrece el fiscal al imputado, concerniente a la reducción de la pena, que por ley es de una sexta parte conforme lo establece el artículo 471° del Código Procesal Penal. Este beneficio no es aplicable para aquéllos inculcados que formaron

parte, se encuentren vinculados o actuaron por encargo de una organización criminal.

El fiscal puede dar a conocer al imputado que la reducción de la pena recibida por este proceso especial, puede acumularse al beneficio que el imputado recibe por confesión, salvo en los casos en que el imputado tenga la calidad de reincidente o habitual.

a.4) Participación en audiencia

El fiscal está facultado para efectuar acuerdos parciales con uno o más inculcados en procesos con pluralidad de hechos punibles y de imputados (delitos conexos o varios coimputados). En este supuesto, el fiscal realizará acuerdos con cada uno de ellos de manera independiente, pero respetando los límites establecidos por ley y considerando el derecho constitucional de igualdad ante la ley.

El fiscal debe asistir obligatoriamente a la audiencia de terminación anticipada, caso contrario el juez no podrá instalarla.

Instalada la audiencia, el juez solicitará al fiscal que formule los cargos contra el imputado, los cuales deberán guardar relación con los cargos señalados en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; asimismo, el fiscal deberá mencionar los medios de prueba que han sustentado la imputación, que deben coincidir con la actividad probatoria que sustenta el proceso de terminación anticipada. De existir alguna variación entre los medios de prueba, se vulneraría lo establecido en la última parte del artículo 468° del Código Procesal Penal, que prohíbe la actuación de pruebas en la audiencia de terminación anticipada.

Luego de la intervención del imputado y demás sujetos procesales, el fiscal a petición del juez conversará con el imputado y su defensa técnica, para poder arribar a un acuerdo.

a.5) Derecho a impugnar

El fiscal puede apelar la sentencia anticipada emitida por el juez de investigación preparatoria cuando el magistrado no ha respetado los límites del acuerdo; también, puede apelar el auto que desaprueba el Acuerdo, conforme se ha aclarado con el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116.

b) El Juez

Debe realizar diversos actos durante el proceso especial de terminación anticipada: revisar la procedencia de la solicitud, dirigir la audiencia, evaluar el acuerdo y emitir su decisión.

b.1) Procedencia de la solicitud

El juez de investigación preparatoria, quien es competente en este tipo de proceso, procederá a la evaluación de la solicitud recepcionada a fin de evaluar su procedencia.

Los requisitos que el juez deberá evaluar son los siguientes:

- Si el imputado ha aceptado la responsabilidad penal del hecho delictivo.
- Si la solicitud fue presentada por única vez; por cuanto, de ser reiterativo, el juez declarará su inadmisibilidad.
- Cuando exista pluralidad de hechos punibles o de imputados, se evaluará si todos los imputados se encuentran de acuerdo con los cargos que se inculpa.
- Determinará la viabilidad de una solicitud de acuerdos parciales, para ello evaluará si la falta de acuerdo se debe a delitos conexos y en relación con otros imputados, si estos acuerdos parciales

perjudicaría la investigación o si en el caso en concreto es indispensable su acumulación. En este caso en especial, el juez podrá dictar su decisión de viabilidad de la solicitud durante la audiencia de terminación anticipada.

b.2) Dirección de la audiencia

El juez de investigación preparatoria dirigirá la audiencia, siguiendo los siguientes pasos:

- El juez instalará la audiencia siempre y cuando se encuentren presentes el fiscal, el imputado con su abogado defensor, de acuerdo a lo señalado en el artículo 468°.4 del Código Procesal Penal, la presencia de los demás sujetos procesales es facultativa. La incomparecencia de uno de los sujetos procesales obligatorios dará lugar a la reprogramación de la audiencia, pero con esta medida el juez no se mantendría dentro de lo dispuesto por el artículo 468°.1 del mencionado Código, que establece que el juez podrá disponer por una sola vez la celebración de la audiencia de terminación anticipada.
- Luego de instalada la audiencia, el juez solicitará al fiscal que presente los cargos contra el imputado. Reyna Alfaro menciona que “la exigencia de una exposición detallada de los cargos por parte del fiscal resulta además consecuencia de las características propias del proceso de terminación anticipada. El proceso de terminación anticipada, debido a su carácter independiente, supone –salvo escasas excepciones- la primera mirada que realiza el juez de la investigación preparatoria al caso, por ello es que la exposición de los cargos formulados por parte del Ministerio Público permitirá que el juez de la investigación preparatoria tenga una visión preliminar de la pretensión punitiva e indemnizatoria del fiscal y del material probatorio que lo sustenta” (2014: 203 y s.).

- Presentados los cargos, el juez explicará al procesado “los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de contravenir su responsabilidad. El juez ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencias jurídico penales y civiles del acuerdo al que puede llegar (...). El consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo”⁵⁹.
- Después de escuchar los cargos y la información señalada por el juez, el imputado se pronunciará aceptando o rechazando en todo o en parte su responsabilidad penal y la reparación civil fijada.

Según Salas Beteta, la “simple aceptación de los cargos por parte del procesado no determina necesariamente la terminación anticipada del proceso, sino la concurrencia de elementos de convicción suficientes que establezcan como verdad procesal, que el procesado es responsable de la comisión del hecho punible imputado” (cf. Reyna Alfaro 2014: 160).

Agregando esta idea, Reyna Alfaro nos dice que “la consecución de la verdad procesal que determina la responsabilidad penal del procesado por el hecho punible imputado es el que permite que aquel merezca una pena. De la verdad procesal se extraen circunstancias del hecho punible que condicionan la individualización judicial de la pena” (2014: 161).

⁵⁹ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 8°.

- Luego de la intervención del imputado, el juez solicitará a los demás sujetos procesales asistentes a la audiencia pronunciarse sobre los alcances del acuerdo.
- Acto seguido, el juez instará a las partes, como consecuencia del debate, a que lleguen a un acuerdo (en caso de no haber acuerdo provisional previo), y si bien puede suspender la audiencia por breve término, deberá continuarla el mismo día.
- Si el fiscal y el imputado arriban a un acuerdo, lo declararán ante el juez, debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. En este punto, el juez deberá pronunciarse, respecto a la viabilidad o no de la solicitud de acuerdos parciales tomados previamente por el fiscal y el imputado.

b.3) Evaluación del acuerdo

El juez evaluará si cada uno de los aspectos contenidos en el acuerdo se encuentre dentro de los márgenes de legalidad y razonabilidad, los aspectos a evaluar son: los hechos investigados en el proceso, la pena propuesta, reparación civil y las consecuencias accesorias; a decir:

- Hechos investigados

El juez tomará conocimiento de los cargos y las pruebas que lo sustentan con la exposición del fiscal en la audiencia de terminación anticipada, después escuchará al imputado para evaluar “la existencia de elementos de convicción suficientes que corroboren lo establecido en la disposición fiscal. Es decir, el juez evaluará el ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible; y si existe base suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la

perseguibilidad. Por consiguiente, el juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar”⁶⁰.

➤ Pena Propuesta

El juez debe revisar si esta propuesta respeta “los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica - definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad sean genéricas, agravantes o atenuantes-, como el establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45° , 45°-A y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad-”⁶¹.

Asimismo, el juez deberá evaluar la razonabilidad de la pena; al respecto la Corte Suprema⁶² menciona “que el control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del *quantum* de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el principio preventivo”.

⁶⁰ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 10° y 12°.

⁶¹ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 13°.

⁶² Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 11°.

Esta valoración es muy importante por cuanto su cálculo servirá de base para la propuesta de reducción de la pena planteada en el acuerdo, que en la práctica es formulada por el fiscal, para la aprobación del juez, en una sexta parte de la pena concreta; es decir, luego de haber considerado otras circunstancias que modifican la pena, si lo hubiera.

➤ Reparación Civil

El juez debe evaluar si el monto de la reparación civil fijada en el acuerdo es razonable y proporcional al daño causado.

➤ Consecuencias accesorias

Revisará la propuesta efectuada por el fiscal y el imputado, respecto a las consecuencias accesorias, como la afectación a personas jurídicas, destino de los efectos e instrumentos del delito, entre otros. El juez no podrá plantear ni suplir ningún aspecto que no se encuentre incluido en este acuerdo.

b.4) Emite decisión

Considerando la propuesta efectuada en el acuerdo de forma escrita y lo escuchado en la audiencia, bajo los criterios de suficiencia probatoria, legalidad y razonabilidad, el juez decidirá su aprobación o desaprobación, de la forma siguiente:

➤ Aprobación del Acuerdo

El juez dictará sentencia anticipada en la misma audiencia o dentro de las 48 horas de realizada la misma, siempre que “la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado, sean razonables y obren elementos de convicción suficientes, el juez aprobará el acuerdo y en su sentencia dispondrá la

aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que correspondan enunciando en su parte resolutive que ha habido acuerdo”⁶³.

Cuando se trate de pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requiere el acuerdo del total de los imputados y por todos los cargos; sin embargo, el juez puede aprobar acuerdos parciales, cuando la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados. Sin embargo, la norma procesal prevé como salvedad que no se podrá aprobar el acuerdo parcial cuando perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable; es decir, que para aprobar el acuerdo parcial debe ser viable la desacumulación de los casos atribuidos a los imputados que están conforme con la terminación anticipada de los que no lo están; ello se interpreta de la lectura del artículo 469° del Código Procesal Penal.

➤ Desaprobación del Acuerdo

El juez puede desaprobar el acuerdo desarrollando los motivos que le conllevaron a tomar esa decisión emitiendo el auto correspondiente, en este caso los cargos se dilucidarán en el proceso común.

Los acuerdos parciales serán desaprobados, si se establece que perjudican la investigación o si su acumulación resulta indispensable.

Si el acuerdo es desaprobado, la declaración formulada por el imputado se considerará inexistente y no podrá ser utilizada en su contra durante el proceso.

En ningún caso se absolverá al imputado; este punto fue aclarado en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 que señala que “es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del

⁶³ Conforme a lo establecido en el art. 468.6 del Código Procesal Penal de 2004.

acuerdo, que se busque una absoluc  n o una decisi  n que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jur  dica del acuerdo objeto de control jurisdiccional”⁶⁴.

En los casos con pluralidad de hechos punibles o de imputados, el juez evaluar  : 1) Independientemente cada uno de los acuerdos realizados por los imputados, 2) Los cargos que se les inculpa a cada uno de los coimputados, 3) Si los beneficios otorgados a los imputados guardan relaci  n de proporcionalidad y razonabilidad entre ellos, a fin de evitar cualquier cuestionamiento a la vulneraci  n de los derechos de igualdad o discriminaci  n de los imputados.

c) El imputado

Los actos que realiza el imputado en el proceso son:

c.1) Puede solicitar el inicio del proceso especial

El imputado individual o conjuntamente con el Ministerio P  blico est   facultado para solicitar la celebraci  n de la Audiencia de Terminaci  n Anticipada, esta solicitud se presentar   por   nica vez al Juez de Investigaci  n Preparatoria, debidamente fundamentada que contendr   su confesi  n sobre la comisi  n de los hechos delictivos y las circunstancias del hecho punible materia de investigaci  n; esta solicitud se dar   a conocer a los dem  s sujetos procesales⁶⁵.

c.2) Participar en reuniones preparatorias

⁶⁴ Acuerdo Plenario N   05-2009/CJ-116, fundamento 12.

⁶⁵ Conforme lo establece el art  culo 468   del C  digo Procesal Penal de 2004.

Podrá reunirse en una o más reuniones con el fiscal y su abogado defensor, con la finalidad de negociar y llegar a acuerdos sobre las circunstancias del hecho, la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias, que serán detallados en el Acuerdo Provisional que ha de presentarse al Juez de Investigación Preparatoria.

c.3) Participa en el Acuerdo Provisional

Conjuntamente con el fiscal y con la asesoría de su abogado defensor, elaborará el Acuerdo Provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias, conforme lo establecido en el 468.2 del Código Procesal Penal.

El aporte concreto del imputado en este acuerdo es el detalle de las circunstancias del hecho punible, aceptando la responsabilidad total o parcial del hecho delictivo, requisito precedente para las negociaciones y la toma de acuerdos respecto a los temas antes referidos.

El beneficio que recibiría con el acuerdo es la reducción de una sexta parte de su pena, con excepción de aquellos que forman parte de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella. Este beneficio será acumulado al que reciba por confesión sincera, salvo en los casos de reincidencia.

c.4) Oposición al Trámite

Si el imputado no se encontrara de acuerdo con la tramitación del proceso, puede oponerse a su inicio poniéndolo a conocimiento del juez, quien deberá detener el proceso en concordancia al artículo 468.2 del Código Procesal Penal.

c.5) Participación en la Audiencia

- Deberá presentarse para la instalación de la Audiencia obligatoriamente.
- Deberá aceptar o rechazar los cargos presentados por el fiscal.
- Emitirá su opinión sobre los alcances, consecuencias del acuerdo y sobre las limitaciones que representa la posibilidad de contravenir su responsabilidad.
- Puede requerir reunirse con el fiscal para llegar a un acuerdo; en ese caso se suspenderá la audiencia por un breve término de tiempo.

c.6) Puede impugnar la decisión judicial

La sentencia anticipada puede ser apelada por los demás sujetos procesales, que no sea el fiscal ni el imputado, siempre que no se haya respetado los límites del acuerdo; conforme a lo establecido en el artículo 468°.7 del Código Procesal Penal. De otro lado, nuestro Código adjetivo no se ha pronunciado acerca de la facultad de apelar o interponer otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia⁶⁶, haciendo una interpretación sistemática con el artículo 416, inciso 1, literal e, del mismo texto legal, ha considerado viable la impugnación en razón a que tal auto de desaprobación puede causar un gravamen irreparable, al evitar la aplicación de un beneficio premial, lo cual vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional (acceso a los recursos) y el debido proceso

⁶⁶ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 16.

(derecho a la pluralidad de instancia respecto a las decisiones que causan estado).

d) El abogado defensor

El asesoramiento técnico del abogado defensor a favor del inculpado durante todo el proceso, es indispensable; no sólo para su patrocinado, sino también para al Ministerio Público que en esos momentos está representando al Estado y en cierta parte al actor civil.

Es necesario, que el abogado defensor explique correctamente y de manera entendible a su patrocinado sobre el alcance de todos los aspectos del acuerdo: la aceptación expresa de los hechos materia de investigación y los antecedentes provenientes de la investigación efectuada por el Ministerio Público y que fueron el fundamento de la Disposición Fiscal; asimismo, lo referido a la reducción de la pena y el pago por reparación civil, aspectos que se detallarán en el Acuerdo. Esta explicación es esencial, a fin que el imputado comprenda y exprese su voluntad con conocimiento de causa.

e) El actor civil

El actor civil, es aquél quien resulte perjudicado por el delito y pueda ejercer la acción reparadora; es decir, por el que esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. Su constitución como actor civil en el proceso penal deberá ser solicitada ante el juez de la investigación preparatoria, adjuntando los requerimientos establecidos en el artículo 100° del Código Procesal Penal⁶⁷, la cual puede efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria.

⁶⁷ “Código Procesal Penal. Artículo 100 Requisitos para constituirse en actor civil.

La participación del actor civil en el proceso de terminación anticipada estará vinculada solamente a la determinación del pago por reparación civil- que es el tema que le compete- siendo ello así, lo actos que realizará en este proceso son: pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud o formular sus pretensiones, participar en la audiencia, apelar la sentencia aprobatoria del acuerdo respecto a la reparación civil.

➤ **Pronunciarse acerca de la procedencia de la solicitud de inicio del proceso o formular sus pretensiones**

Reyna Alfaro expresa “la necesidad de poner en conocimiento del proceso al agraviado, que aún no se ha constituido como actor civil; el autor menciona que así se evita la *victimización secundaria* de la víctima que, de esta forma, corre el riesgo de ser neutralizada por el sistema penal. La obligación de correr traslado de toda petición de terminación anticipada al agraviado tiene además sustento normativo en el párrafo 3 del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, que reconoce que el proceso penal tiene por propósito garantizar *el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito*. La protección de la víctima del delito viene configurada como el principio informador del proceso penal mediante la obligación jurisdiccional de *velar por su protección y brindarle un trato acorde con su condición* establecida en la parte final del dispositivo antes indicado. En su condición de principio informador, el de protección o tutela de la víctima encuentra materialización

1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria.

2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:

- a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;
- b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
- c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y,
- d) La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo 98”.

concreta en todas y en cada una de las figuras e instituciones reguladas por el estatuto penal, como la terminación anticipada. Esta interpretación *favor victimae* del artículo 468.3 del Código procesal Penal evita situaciones desventajosas para la víctima que no resultan atribuibles a aquella” (Reyna Alfaro. 2014: 198).

El Código Procesal establece que, después de notificado el requerimiento para el inicio del proceso de terminación anticipada a todas las partes, el actor civil tiene cinco días para pronunciarse acerca de su procedencia o formular sus pretensiones.

➤ **Participar en la Audiencia**

Su participación en la audiencia de terminación anticipada es facultativa; si lo hiciere se referirá específicamente al pago por el concepto de reparación civil y así lo hará cuando el juez solicite se pronuncie con respecto al acuerdo, no obstante su disconformidad no perjudica el acuerdo entre la fiscalía y el imputado asistido por su defensa técnica, pudiendo aquel ser aprobado por el juez en la misma audiencia.

➤ **Puede impugnar la sentencia**

Puede apelar la sentencia aprobatoria del acuerdo, cuestionando la legalidad de los acuerdos, que en su caso se basa en el monto de la reparación civil, elevándose a la segunda instancia, que puede ordenar su incremento en el margen de los límites de la pretensión del actor civil.

3.10 EFECTOS

El artículo 471° del Código Procesal Penal señala que el imputado que se acoja a este proceso recibirá la reducción de una sexta parte de la pena a imponer, también el legislador ha previsto la posibilidad de acumular esta reducción con aquella recibida por confesión sincera; asimismo, la reducción

de la pena se aplicará de manera fija y automática sobre la pena concreta o final.

Cabe resaltar que este beneficio se dará siempre y cuando la confesión efectuada por el imputado sea útil y anterior a la celebración del proceso especial, requerimiento que fue incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 30076 publicado el 19 de agosto de 2013.

Un día después de la dación de la Ley N° 30076, el 20 de agosto de 2013, mediante la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se establece que los integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de las mismas que cometan los delitos establecidos en el artículo 3 de esta ley (tipificadas en los artículos 108, 152, 153, 162, 186, 189, 195, 196-A, 197, 183-A, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, Sección II del capítulo II del Título XII del Libro Segundo, 303-A, 303-B, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 del Código Penal y artículos 1,2,3,4,5 y 6 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado), no pueden beneficiarse de la reducción de la pena previsto por este proceso.

3.11 RECURSOS

La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los sujetos procesales que no participaron en su preparación, cuestionando la legalidad de los acuerdos y por supuesto lo referido a la reparación civil; respecto a este último, la Sala Penal Superior puede ordenar su incremento dentro de los límites de la pretensión del actor civil.

En cuanto al fiscal y al imputado, quienes si participaron para la redacción del acuerdo, están facultados para plantear la apelación, en tanto y en cuanto, en la sentencia no se respete los límites del acuerdo, esta aclaración se efectuó en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 de 13 de noviembre de 2009 con ocasión del V Pleno Jurisprudencial de las salas supremas penales Permanente y Transitorias.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de apelar el auto que desaprueba el acuerdo provisional, su procedencia fue confirmada por los vocales de las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamento 16°, refiriendo lo siguiente:

El artículo 468°.7 NCPP (...) no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 416°.1 NCPP, que determina como objeto impugnabile en apelación los autos que ponga fin al procedimiento o a la instancia –literal b)- o, en su caso, los que causen gravamen irreparable –literal e)-. No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1. b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el ámbito del derecho al recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones que causan estado”. Siendo ello así, el auto que desaprueba el acuerdo puede ser revisado por el superior jerárquico, vía recurso de apelación, garantizándose así los derechos a la tutela jurisdiccional y pluralidad de instancia.

3.12 TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PROCESO INMEDIATO

Sobre el proceso inmediato, debemos recordar que este proceso se instaura solamente por requerimiento del fiscal, quien lo solicita al juez de investigación preparatoria, luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria; en este último caso procede solo en los supuestos de confesión sincera y cuando los elementos de convicción acumulados son evidentes.

En los casos de flagrancia delictiva el legislador ha previsto que en la Audiencia Única de Incoación del proceso inmediato realizado dentro de las cuarenta y ocho horas luego del requerimiento fiscal, las partes pueden solicitar terminar el proceso mediante la negociación o el consenso, instando al juez de investigación preparatoria la aplicación ya sea del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda (artículo 447.3 NCPP); de esta manera el juez tiene la posibilidad de acceder al pedido y manejar las formas de culminación antelada del encausamiento penal (Salas Arenas: 2016, *web*⁶⁸).

En cuanto al artículo 447° del Código Procesal Penal, debemos señalar que el texto actual fue publicado el 30 de diciembre de 2016, que fuere modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307.

Con esta modificatoria ha quedado establecido que, cuando el juez se pronuncie por la procedencia de la incoación del proceso inmediato, seguidamente el imputado puede acogerse a alguna salida alternativa para terminar el proceso.

Asimismo, debemos tener en cuenta que en los supuestos por flagrancia, la confesión sincera es inaplicable, ello conforme lo establece el artículo 161 del Código Procesal Penal; por lo tanto, si el imputado desea obtener algún beneficio de parte de la fiscalía debería acogerse a una salida alternativa, ya

68

Véase: <<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4>>
 fecha 20 de mayo de 2016

sea mediante la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada del proceso.

De no llegar a un acuerdo o de ser rechazado el requerimiento del fiscal por el juez de investigación preparatoria, el procedimiento regular del proceso inmediato continuará, emitiendo finalmente el juez pronunciamiento sobre la procedencia de la medida coercitiva solicitada. A su turno, el fiscal formulará acusación luego de veinticuatro horas de expedido el auto que dispone su incoación, que será remitido por el juez de investigación preparatoria al juez penal, quien dictará además de forma acumulada el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio.

Los cambios efectuados al Código Procesal Penal en cuanto al tratamiento del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la incorporación de mecanismos de negociación como una alternativa a recurrir en este tipo de procesos, nos da a entender claramente los objetivos del legislador en la lucha contra la delincuencia que va de la mano con la política de seguridad ciudadana.

Al respecto, el Dr. Víctor Ticona Postigo⁶⁹, entonces Presidente del Poder Judicial periodo 2016, en la presentación de la Revista Informativa “Ius in Fraganti”, ha manifestado que el Poder Judicial para el periodo 2015-2016 se ha propuesto consolidar y fortalecer una política judicial oportuna, predecible y eficaz que dé una respuesta rotunda frente a la delincuencia común, al cual lo considera un flagelo nacional (2016, *web*).

3.13 TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DERECHO COMPARADO

69

Véase: <<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4>> fecha 20 de mayo de 2016

3.13.1 Legislación argentina⁷⁰

El Código Procesal Penal argentino incorporó mediante la Ley 24.825 de fecha 18 de junio de 1997 el artículo 431.bis, que regula el juicio abreviado; esta misma norma admite la no celebración del juicio oral y público autorizando que el fiscal, el imputado y su defensor, acuerden un tope punitivo máximo a imponer por los jueces, siendo imposible alterar las circunstancias fácticas del caso que se juzga. La aplicación del juicio abreviado depende de manera exclusiva de la decisión del Ministerio Público.

Los acuerdos podrán celebrarse desde la instrucción y durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate.

Los requisitos de procedencia para este juicio son:

- Que el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquella.
- Que el imputado admita el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43). Si hubiere varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.
- Se requiere que el imputado emita su conformidad, asistido por su defensor.

70

Véase: <http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Legcomp/Sudamerica/Argentina/CODIGO_PROCESAL_PENAL.pdf> de fecha 01 de abril de 2016.

El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada al tribunal de juicio, luego citará al imputado para escuchar si éste quiere hacer alguna manifestación. Si hubiera querellante, previamente a la adopción del acuerdo, el tribunal recabará su opinión, la que no será vinculante.

Si el tribunal no rechaza la solicitud, emitirá sentencia en un plazo no mayor de 10 días, el cual debe sustentarse en las pruebas recibidas durante la instrucción. El tribunal, puede imponer la pena solicitada por el Ministerio Público o, en su caso, una menor.

El juez puede rechazar la solicitud de juicio abreviado, argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida.

La acción civil no será resuelta por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes, aunque se podrá deducir en sede civil.

Contra la sentencia se admitirá el recurso de casación, que debe ser presentado por quienes fueron admitidos como partes civiles

3.13.2 Legislación colombiana⁷¹

El Código de Procedimiento Penal de Colombia aprobado por Ley 906 del 31 de agosto de 2004, en su Libro III, Título II, Capítulo Único, artículos 348 al 354 contempla los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado.

La citada Ley establece que las finalidades de los preacuerdos y negociaciones son:

71

Véase: <<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/legislacion30901.pdf> > de fecha 01 de abril de 2016

- Humanizar la actuación procesal y la pena.
- Obtener pronta y cumplida justicia.
- Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito.
- Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto.
- Lograr la participación del imputado en la definición de su caso.

Los acuerdos y negociaciones serán declarados improcedentes cuando el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo; salvo en los casos en que se reintegre por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente.

Si el imputado como resultado de las conversaciones para llegar a un acuerdo, se declarara culpable del delito imputado o de otro, de pena menor, el fiscal a cambio puede eliminar de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico, o tipificar la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena. El imputado puede aceptar parcialmente los cargos, en estos casos los beneficios se extienden para efectos de lo aceptado.

Si luego de formulada la imputación, la fiscalía encontrara nuevos elementos cognoscitivos, para determinar cargos distintos y más gravosos señalados inicialmente en la formulación de imputación; estos deben ser considerados en los preacuerdos.

La citada ley, prevé que los preacuerdos pueden realizarse en dos momentos:

Desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación.

Estos preacuerdos se rigen dentro del margen de los términos de la imputación. En cuanto a la rebaja de la pena, se ha establecido que es factible hasta la mitad de la pena imponible, la cual se consignará en el escrito de acusación; si posterior a la redacción de la acusación, hubiere un cambio favorable para el imputado en relación a la pena a imponer, esto constituiría la única rebaja compensatoria por el acuerdo.

Desde la presentación de la acusación hasta el momento en que el acusado sea interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad al inicio del juicio oral.

En este ámbito del proceso, la pena imponible se reducirá a una tercera parte. La presencia del abogado defensor durante los acuerdos es imprescindible, de no estar presente los acuerdos son considerados inexistentes. En caso de discrepancia entre lo que decida el imputado o acusado y su abogado defensor, prevalece lo que decida el primero. Aprobado los preacuerdos, el juez procederá a convocar la audiencia preparatoria para dictar sentencia.

El juez no interviene en las negociaciones; si lo hace su actuación resultaría una violación de la ley procesal de ese país. La pena impuesta por el juez no debe ser superior a la solicitada por la fiscalía. Se admite apelación contra la sentencia condenatoria.

El juez puede rechazar los preacuerdos cuando a) son ilegales como por ejemplo cuando el fiscal acuerde rebajar la pena por

debajo de lo establecido por ley o b) viole derechos fundamentales, que debe ser objetivo y palpable.

Finalmente, la víctima no puede vetar los preacuerdos conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de ese país⁷². Respecto a la reparación, puede aceptarla o rehusarla, en éste último caso puede recurrir a las vías judiciales pertinentes.

3.13.3 Legislación chilena⁷³

El Código Procesal Penal de Chile, establece como un procedimiento especial regulado bajo el sistema de justicia negociada el denominado procedimiento abreviado, estipulado entre sus artículos 406 al 415.

La aplicación del procedimiento abreviado presupone dos requisitos:

- 1) Que la pena solicitada por el fiscal no excede a cinco años de pena privativa de libertad o reclusión menores en su grado máximo, o bien se trate de penas de distinta naturaleza.

⁷² Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-13939 (42184), oct. 15/14, M. P. Gustavo Malo: “Garantizado el derecho a participar y conocer las negociaciones entre Fiscalía y defensa, material y técnica, las víctimas no tienen la posibilidad de vetar el preacuerdo surgido de las mismas, pues tal prerrogativa comportaría desvertebrar la característica premial del sistema penal acusatorio permitiendo que la víctima privada imposibilitara la suscripción de acuerdos celebrados respetando el marco normativo nacional. Con todo, de manera excepcional, si se aduce afectación de garantías fundamentales de las víctimas, la judicatura debe revisar el preacuerdo en los tópicos denunciados a efectos de salvaguardar los derechos de ese interviniente especial por cuanto, aún en las negociaciones, subsiste el deber de preservar las prerrogativas esenciales de las partes cuando sean abiertamente desconocidas, acorde con los precedentes enunciados”. Véase: <<http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/sent-sp-13939%2842184%29-14.pdf>> de fecha 01 de mayo de 2016.

⁷³

Véase: <<http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20Procesal%20Penal.pdf>> de fecha 01 de abril de 2016.

- 2) Que el imputado acepte los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación en que se fundan, manifestando su conformidad con la aplicación de este procedimiento.

El procedimiento abreviado podrá ser solicitado luego de formalizada la investigación y se mantiene hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

Con la aceptación de los hechos el fiscal podrá estimar las circunstancias atenuantes de la pena de conformidad con el artículo 11° numeral 9 del Código Penal, sin perjuicio de las demás reglas que fueren aplicables para la determinación de la pena.

El Ministerio Público puede deducir su acusación ya sea por escrito o formularla verbalmente, dentro de la audiencia que el tribunal convocare para resolver la solicitud de procedimiento abreviado, es decir, durante la etapa intermedia del procedimiento; para tal efecto, todos los intervinientes deberán ser citados para la audiencia. La acusación presentada por escrito y la pena requerida pueden ser modificadas; en este último supuesto, siempre que la modificación sea inferior a la que le correspondería en un juicio ordinario.

El juez de garantía antes de resolver la solicitud del fiscal deberá verificar que se cumplan con los presupuestos procesales de este procedimiento especial; así como, asegurarse si el acusado ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado de forma libre y voluntaria, que conozca su derecho a exigir un juicio oral, que entienda los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiere significarle y, especialmente, que no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del fiscal o de terceros.

El querellante puede oponerse al procedimiento abreviado únicamente cuando la calificación jurídica de los hechos no coincida

con lo consignado en la acusación fiscal y, como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere los cinco años de pena privativa de libertad. De ser considerada fundada la oposición, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral.

En el caso de ser aceptado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgando la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de investigación que lo fundamentan; posteriormente, dará la palabra a los demás intervinientes y finalmente al acusado. Terminado el debate el juez dictará sentencia, si es condenatoria, la pena a imponerse no será mayor ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso.

La sentencia es emitida por el juez de garantía, no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta, y puede ser apelada.

El juez puede rechazar la solicitud cuando: a) no han cumplido con los requisitos de procedencia y b) considera fundada la oposición del querellante.

Si el juez de garantía no acepta el procedimiento abreviado, las acusaciones verbales realizadas por el fiscal y el querellante se tendrán por no formuladas, la misma suerte corren las modificaciones realizadas. Asimismo, el juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminadas del registro.

Cuadro 2

CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACIONES

JUICIO ABREVIADO (Argentina)	PREACUERDO Y NEGOCIACIONES (Colombia)	PROCEDIMIENTO ABREVIADO (Chile)	TERMINACIÓN ANTICIPADA (Perú)
El acuerdo lo realizan el fiscal, el imputado y su abogado.	El acuerdo lo realizan el fiscal, el imputado o acusado y su abogado.	Los acuerdos están a cargo del fiscal y el imputado.	Los acuerdos están a cargo del fiscal y el imputado, asistido por su abogado.
Su aplicación depende exclusivamente del Ministerio Público.	El fiscal presenta el preacuerdo ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.	El fiscal y el imputado solicitan el procedimiento abreviado.	El fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo Provisional.

<p>Los acuerdos podrán celebrarse desde la instrucción y durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate.</p>	<p>Se puede presentar en dos momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. b) Desde la presentación de la acusación hasta el momento en que el acusado sea interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad al principio del juicio oral 	<p>Puede solicitarse luego de formalizado la investigación y se mantiene hasta la audiencia de preparación del juicio oral.</p>	<p>Puede solicitarse una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal.</p>
<p>Los requisitos de procedencia son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La pena a imponer sea menor de 6 años. b) El imputado acepte todos los cargos establecidos en el requerimiento fiscal. 	<p>Será declarado improcedente cuando el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo; salvo que se reintegre el cincuenta por ciento o más de los mismos.</p>	<p>Los requisitos de procedencia son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La pena a imponer no exceda a 5 años. b) El imputado acepte todos los hechos materia de la acusación. 	<p>Los requisitos a evaluar por el juez son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Si la solicitud fue presentada por una única vez. b) En el caso de pluralidad de hechos punibles o de imputados, evaluará si todos los imputados se encuentran de acuerdo por todos los cargos que se incremine a cada uno de ellos. c) Viabilidad de una solicitud de acuerdos parciales.

El fiscal puede acordar la imposición de un tope punitivo máximo pero no puede alterar las circunstancias fácticas del caso que se juzga.	El fiscal puede ofrecer la eliminación de alguna causal de agravación punitiva o cargo específico, o tipificarla de forma específica a fin de disminuir la pena.	Con la aceptación de los hechos el fiscal podrá estimar las circunstancias atenuantes de la pena de conformidad del artículo 11° numeral 9 del Código Penal.	El fiscal puede llegar a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las demás consecuencias accesorias.
Recibida la solicitud y la conformidad el Juez citará al inculcado para escuchar su manifestación.	El juez no interviene en las negociaciones; si lo hace su actuación resultaría una violación de la ley penal procesal de ese país.	Una vez aceptado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgando la palabra al fiscal, luego a los demás intervinientes y finalmente al acusado	La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales.
Aceptada la solicitud, el juez emitirá sentencia en un plazo de 10 días sustentando su decisión en las pruebas recibidas durante la instrucción.	Aprobado los preacuerdos el juez dictará sentencia en la audiencia preparatoria.	La sentencia será dicta luego de terminado el debate del procedimiento abreviado.	El Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.
El Tribunal puede imponer una pena igual o menor a la requerida por el Ministerio Público.	El juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada por la fiscalía.	El juez no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante.	Si el Juez considera que la pena a imponer es razonable, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que correspondan, enunciando en su parte resolutive que ha habido acuerdo.

<p>El juez puede rechazar los hechos por:</p> <p>a) Necesidad de un mejor conocimiento de los hechos.</p> <p>b) Discrepancia fundada con la calificación legal admitida.</p>	<p>El juez puede rechazarlos si son ilegales o viole derechos fundamentales.</p>	<p>El juez puede rechazar la solicitud cuando:</p> <p>a) No han cumplido con los requisitos de procedencia y</p> <p>b) Considera fundada la oposición del querellante.</p>	<p>El juez puede desaprobado la solicitud cuando no cumple con los requisitos de procedencia.</p>
<p>El abogado asistirá al imputado para realizar su conformidad y durante la audiencia.</p>	<p>El abogado con aprobación de su defendido puede adelantar conversaciones para llegar a preacuerdos, además asistirá a su defendido en la toma de acuerdos con la Fiscalía, de no ser así los acuerdos serán declarados inexistentes.</p>	<p>La norma no menciona una función específica del abogado en este proceso. Sin embargo, se debe mencionar que el imputado deberá contar con un defensor ya sea privado o designado por la Defensoría Penal Pública al ser un derecho que le asiste.</p>	<p>Es obligatoria la asistencia del abogado durante el proceso de Terminación Anticipada.</p>
<p>La opinión vertida por el querellante no es vinculante.</p>	<p>La víctima no puede vetar los preacuerdos.</p>	<p>El querellante podrá oponerse cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere el límite de 5 años. Si el juez aprueba su oposición, el procedimiento será desaprobado.</p>	<p>Los demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar la legalidad del acuerdo.</p>

No se establecido la reducción porcentual de la pena	Se reduce la pena hasta la mitad si el preacuerdo se realiza antes de la acusación y un tercio si se realiza después que la acusación sea presentada.	La pena será atenuada de conformidad a lo establecido en el artículo 11° numeral 9 del Código Penal, sin perjuicio de las demás reglas que fueren aplicables para la determinación de la pena.	La pena será reducida a una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial.
La reparación civil no se resolverá en este proceso salvo acuerdo entre las partes.	Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes	El juez no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.	El juez se pronunciará acerca de la reparación civil en su sentencia. El actor civil puede aceptar u oponerse; en este último caso, la Sala Penal Superior puede incrementarla dentro de los límites de la pretensión del actor civil.
Se admite recurso de casación contra la sentencia.	Se admite apelación contra la sentencia.	Se admite apelación contra la sentencia.	La sentencia puede ser apelada por los demás sujetos procesales.

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación a realizar es socio-jurídica, es decir, no experimental. Por la función principal cumplida en el desarrollo de la presente tesis, es de carácter descriptiva, toda vez que describimos los fenómenos y las relaciones existentes entre el problema, hipótesis y variables.

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Esta Investigación es no experimental porque no contamos con la potestad de poder alterar los hechos materia de investigación; empero, es longitudinal porque se recolectan datos a través del tiempo.

4.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

La tesis emplea los métodos cuantitativo, analítico, inductivo y deductivo; porque permite examinar los datos en el campo de la estadística (cuantitativo); examinando los fenómenos y las relaciones existentes entre las variables identificadas en esta tesis con los objetivos de la investigación (analítico); de lo particular a lo general (inductivo); y observando la realidad para comprobar las hipótesis, proceso por el cual se deducen leyes (deductivo).

4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

4.4.1 Entrevistas

Se realizaron entrevistas a jueces, fiscales y abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia de Lima Norte, sobre la efectividad de la terminación anticipada y planteamiento de propuestas para su mejor aplicación.

4.4.2 Análisis documental

Esta técnica está en función del análisis doctrinario y teórico, respecto de las diversas obras y materiales de actualidad jurídica. Asimismo, se ha recabado información del área de estadística de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

4.4.3 Muestreo

Esta técnica fue usada para la elaboración del trabajo de campo de esta tesis, teniendo como muestra de estudio los expedientes tramitados con el proceso de terminación anticipada ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (5° Juzgado Penal en adición a sus funciones), periodo de los años 2011-2015.

4.5 LA MUESTRA

En el departamento de Lima las denuncias representan el 45.57% a nivel nacional en el último trimestre del 2014, y el 41.81% a nivel nacional en el último trimestre del 2015, según las estadísticas presentadas por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática⁷⁴ (INEI, *web*). Conforme el Anuario Estadístico 2014 del Ministerio Público⁷⁵ (*web*) los expedientes ingresados en el Distrito Fiscal de Lima Norte representa el 15.27% a nivel nacional, siendo el segundo con mayor índice de ingresos, después del Distrito Fiscal de Lima, que representa el 33.8 % de la totalidad de ingresos a nivel nacional.

Por lo tanto, la muestra está basada en los procesos penales del Distrito Judicial de Lima Norte, queda justificada en razón al alto índice de criminalidad y de denuncias efectuadas a nivel nacional, además es uno de los distritos judiciales que con la dación de la Ley 29648⁷⁶ inició la aplicación el Código Procesal Penal para los casos de delitos de Corrupción de Funcionarios desde el 01 de abril del año 2011.

CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS - ESTADÍSTICAS

5.1. SÍNTESIS DEL TRABAJO DE CAMPO

Para iniciar el procesamiento de los datos, es necesario realizar un recuento de cómo se desarrolló esta etapa, el trabajo se inició con la solicitud presentada al Área de Estadísticas de la Corte Superior de Justicia de Lima

⁷⁴ Estadísticas de Seguridad Ciudadana realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Véase:<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-seguridad-ciudadana_2.pdf>

⁷⁵ Véase:<<http://portal.mpfj.gob.pe/estadistica/ANUARIOESTADISTICO2014FINAL.pdf>>

⁷⁶ Ley que modifica la Disposición Transitoria Única de la Ley N° 29574. Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para Delitos Cometido por Funcionarios Públicos, y el numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y final del Código Procesal Penal, aprobada por el Decreto Legislativo N° 957.

Norte respecto a los expedientes tramitados en los Juzgados que procesaron Delitos de Corrupción de Funcionarios en el Distrito Judicial de Lima Norte; significando que la información que nos entregaron se circunscribía a los procesos tramitados ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (5° Juzgado Penal en adición a sus funciones), entre los años 2011 al 2015.

De la información entregada, observamos que los datos registrados en los Formularios Estadísticos Electrónicos – Sistema Integrado Judicial (FEE – SIJ), se basan en el número de sentencias anticipadas emitidas.

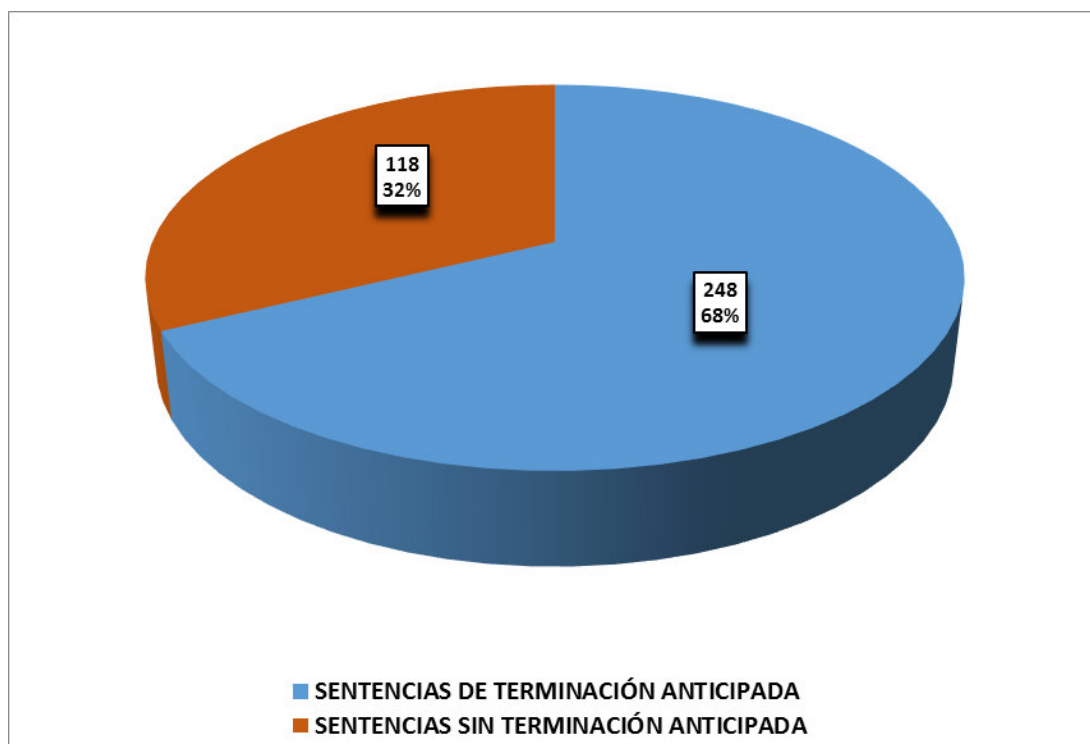
Ante esta situación, decidimos requerir las listas completas de los expedientes con el listado del número de audiencias y sentencias emitidas por los Juzgados que procesaron casos de delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte en el periodo 2011 a 2015, y así efectuar nuestros propios cuadros de datos; obteniendo un total de trescientos sesenta y seis (366) procesos de delitos de corrupción de funcionarios que han sido tramitados en el Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (5° Juzgado Penal en adición a sus funciones), entre los años 2011 al 2015, los cuales son la muestra de esta investigación.

Además de los datos recopilados, realizamos entrevistas a los jueces, fiscales y abogados defensores públicos que evaluaron, tramitaron y aplicaron los procesos analizados; sus opiniones y comentarios serán graficados a fin de plantear mejoras a la normatividad de esta institución.

5.2. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

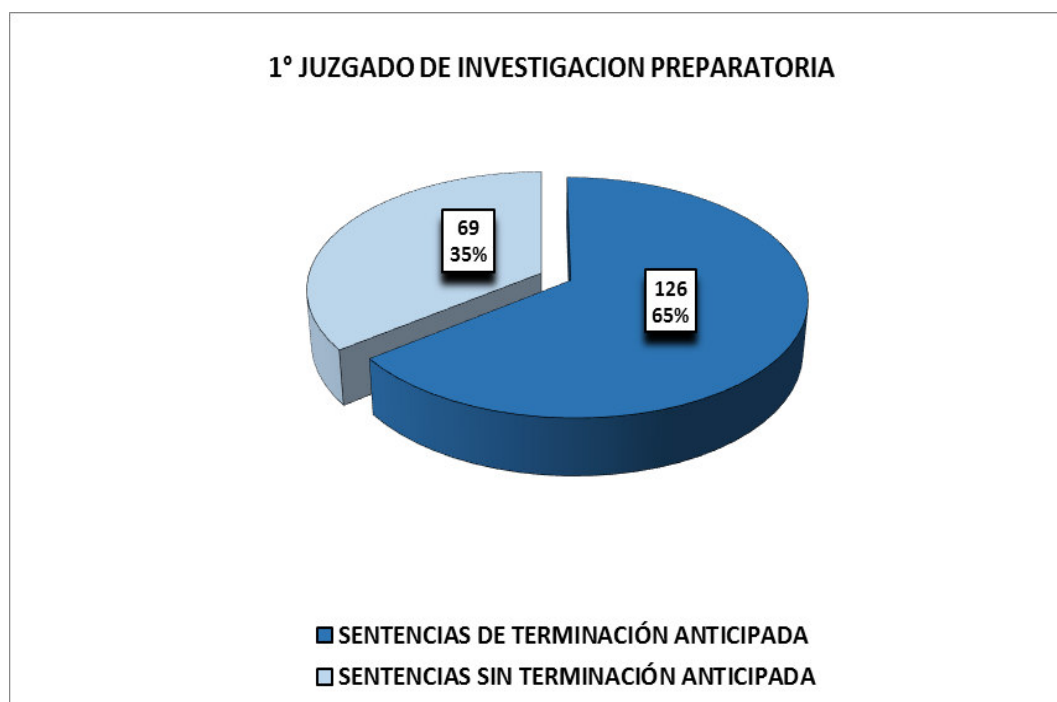
Gráfico 5

**TOTAL DE SENTENCIAS EN LOS JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA QUE TRAMITARON LOS PROCESOS POR DELITOS
DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS EN LIMA NORTE EN LOS AÑOS
2011-2015**

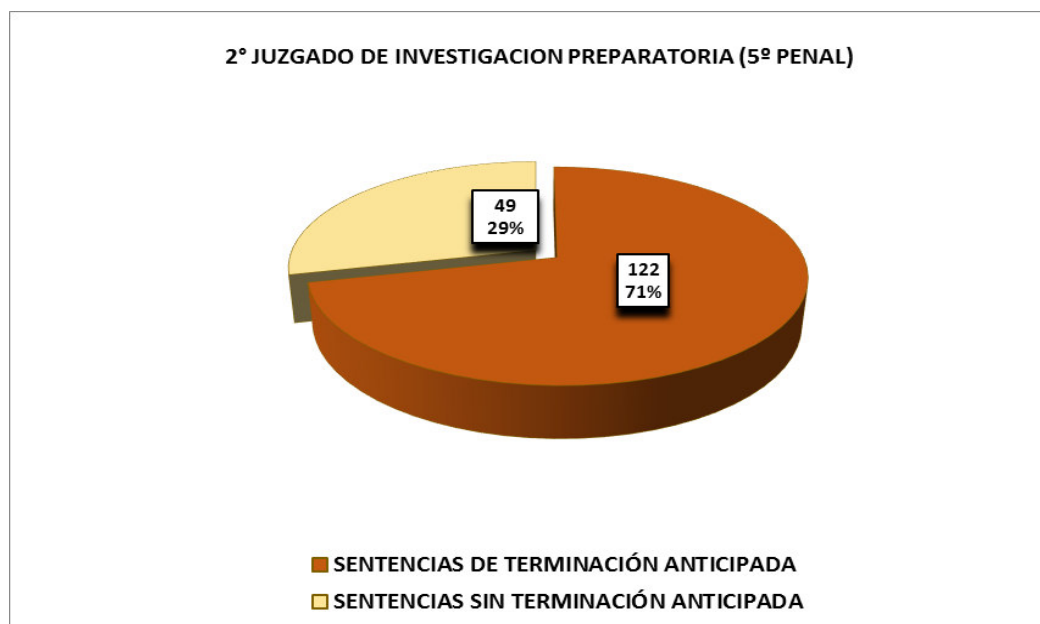


FUENTE: FEE - SIJ

En el **gráfico N° 5** apreciamos que las sentencias emitidas con la aplicación de la terminación anticipada, son **más del doble** que las sentencias emitidas bajo los procesos comunes seguidos en el 1º Juzgado de Investigación Preparatoria como en el 2º Juzgado de Investigación Preparatoria.

Gráfico 6**TOTAL DE SENTENCIAS DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LIMA NORTE EN LOS AÑOS 2011-2015**

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 7**TOTAL DE SENTENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LIMA NORTE EN LOS AÑOS 2011-2015**

FUENTE: FEE – SIJ

En los **gráficos N° 6 y N° 7**, podemos ver que en el 1º Juzgado de Investigación Preparatoria y en el 2º Juzgado de Investigación Preparatoria (5º Penal) de Lima Norte, se han resuelto los casos en mayor medida aplicando el proceso de terminación anticipada, debido a las ventajas que esta institución ofrece.

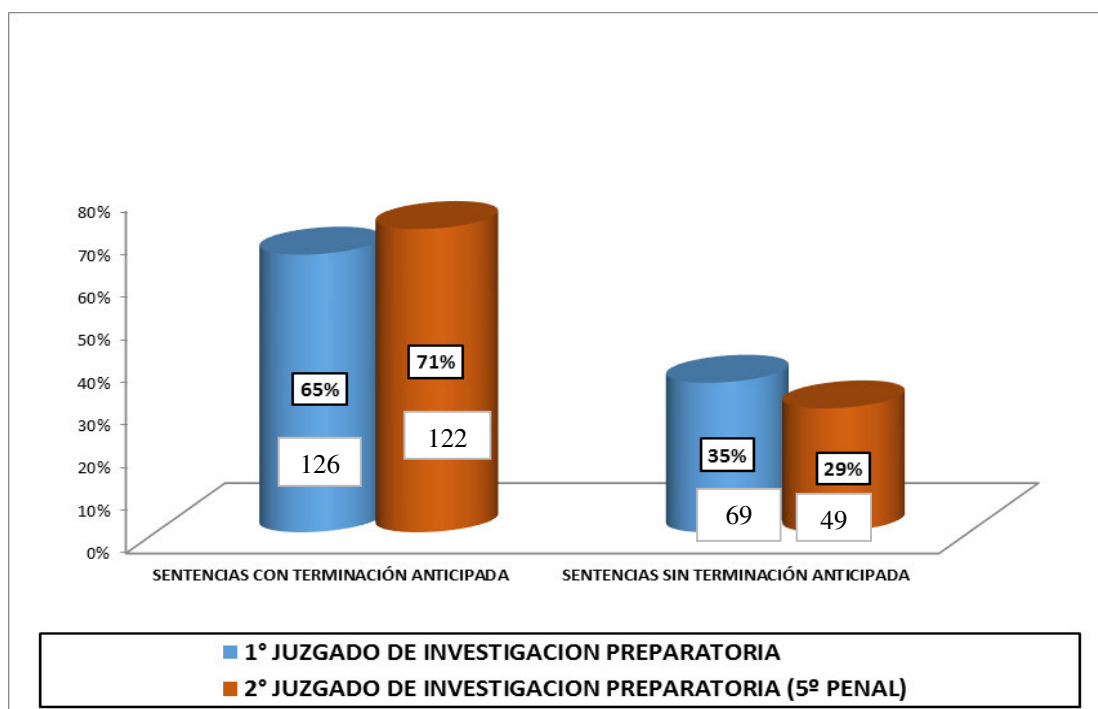
Cuadro 3

CUADRO COMPARATIVO DEL TOTAL DE LOS PROCESOS RESUELTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA NORTE QUE TRAMITARON LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS POR LOS AÑOS 2011-2015

TOTAL DE SENTENCIAS		Con Terminación Anticipada		Sin Terminación Anticipada	
1º JIP	195	126	65%	69	35%
2º JIP	171	122	71%	49	29%

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 8



FUENTE: FEE – SIJ

Del **gráfico N° 8**, podemos observar que los casos resueltos con sentencias anticipadas son mayores a los resueltos mediante los procesos comunes; tanto en el 1º Juzgado de Investigación Preparatoria como en el 2º Juzgado de Investigación Preparatoria (5º Penal) de Lima Norte.

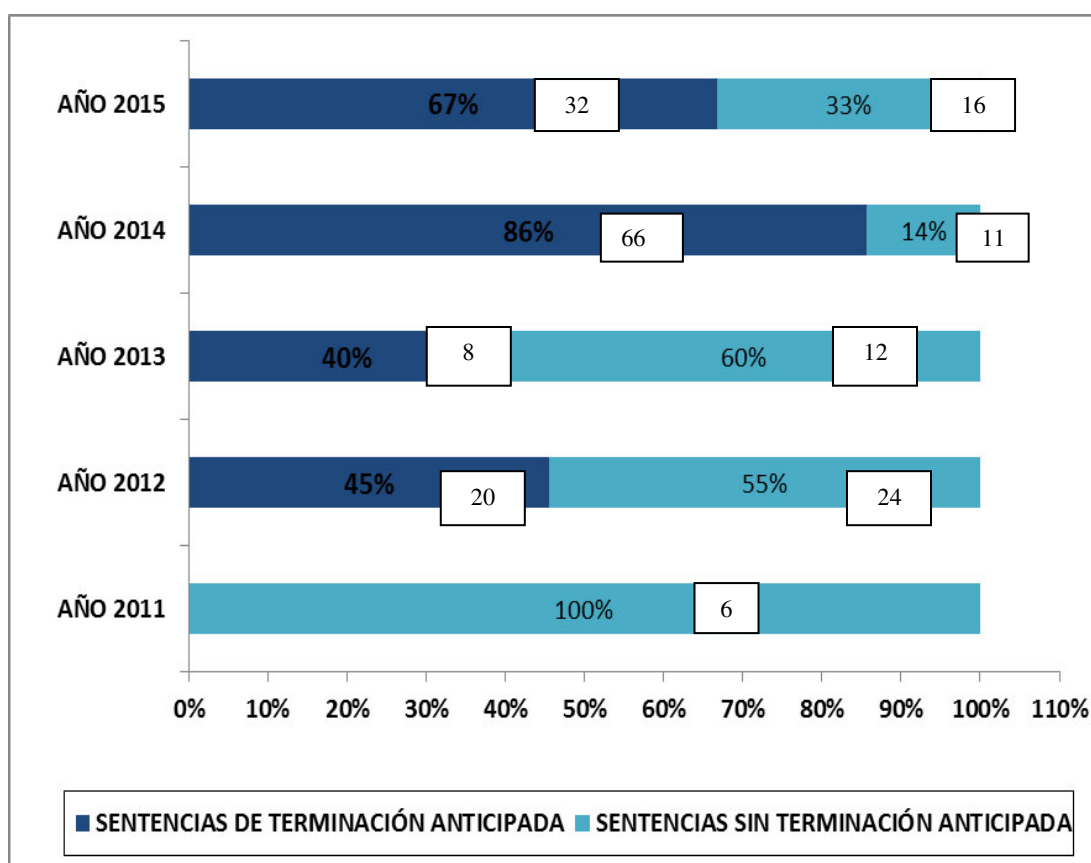
Cuadro 4

TOTAL DE SENTENCIAS REGISTRADAS EN EL 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA QUE TRAMITARON PROCESOS POR DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE POR AÑOS

SENTENCIAS	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Anticipadas	00	20	08	66	32	126
Comunes	06	24	12	11	16	69
	06	44	20	77	48	195

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 9



FUENTE: FEE - SIJ

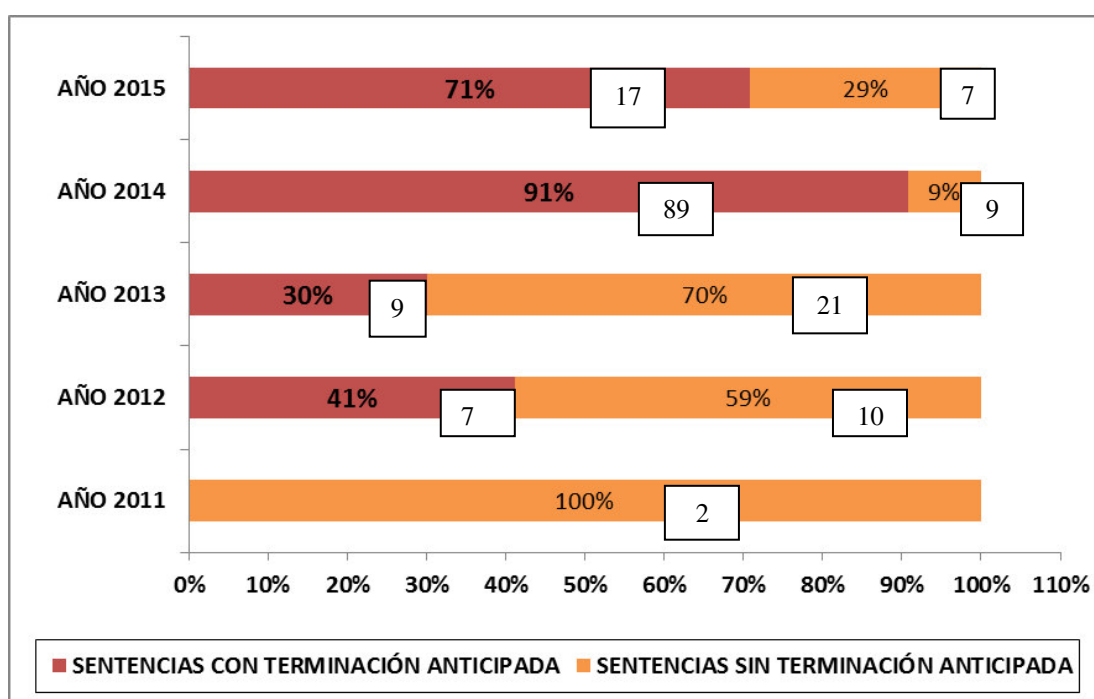
Cuadro 5

TOTAL DE SENTENCIAS REGISTRADAS EN EL 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (5° PENAL) QUE TRAMITARON PROCESOS POR DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE POR AÑOS

SENTENCIAS	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Anticipadas	00	07	09	89	17	122
Comunes	02	10	21	09	07	49
	02	17	30	98	24	171

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 10



FUENTE: FEE – SIJ

En los **gráficos N° 9 y N° 10**, se muestra que en el año 2011 las sentencias se expidieron sin aplicar la terminación anticipada, esto se explica debido a que en abril de ese año recién funcionaron los Juzgados de Investigación Preparatoria con la vigencia del NCPP y se registraron solo audiencias sin la expedición de las sentencias anticipadas. En los años 2012 y 2013 empieza a tener relevancia los procesos con terminación anticipada en los casos de delitos de Corrupción de Funcionarios bajo el NCPP, por esta razón es menor la cantidad de este tipo de sentencias. Y finalmente en los años 2014 y 2015 la tendencia aumenta, siendo más frecuente las sentencias de terminación anticipada.

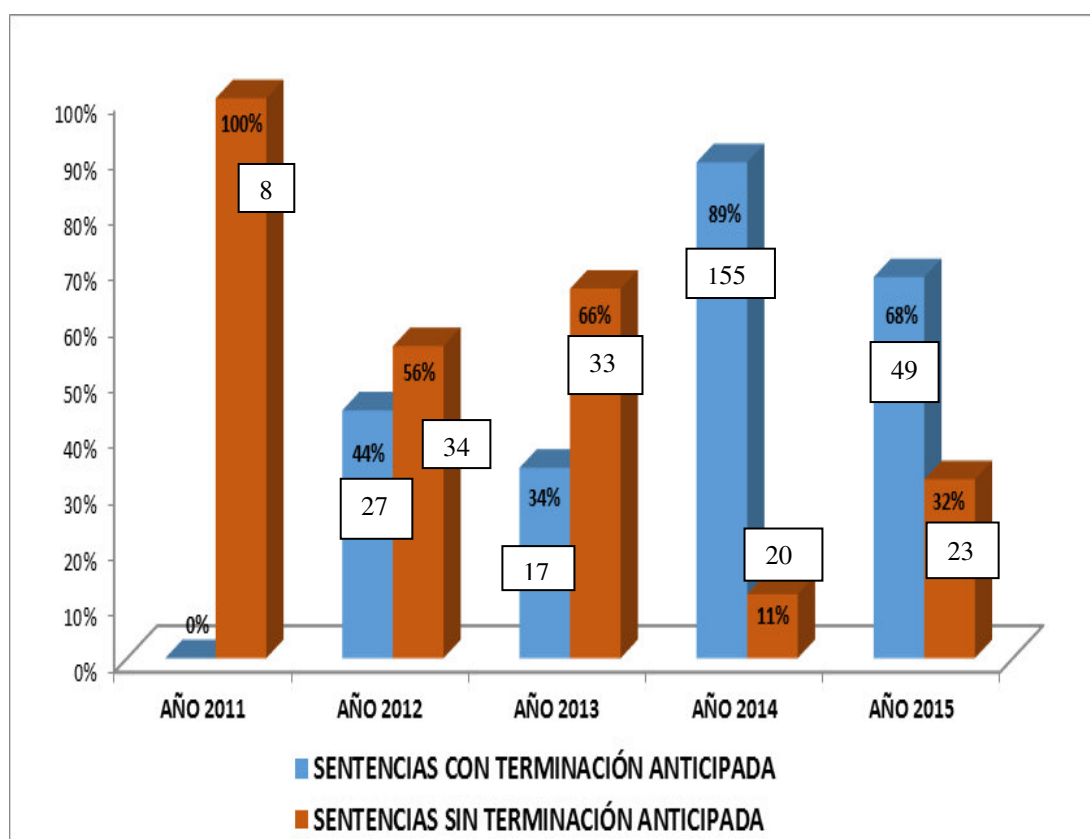
Cuadro 6

CUADRO COMPARATIVO DEL TOTAL DE LAS SENTENCIAS REGISTRADAS EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA QUE TRAMITARON LOS PROCESOS DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE POR AÑOS

SENTENCIAS	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Anticipadas	00	27	17	155	49	248
Comunes	08	34	33	20	23	118
	08	61	50	175	72	366

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 11



FUENTE: FEE – SIJ

El **gráfico N° 11**, muestra que desde los años 2012 y 2013 los índices de aprobación en los requerimientos de tramitación de terminación anticipada fueron en aumento, esto debido a que se identificó la efectividad de este mecanismo procesal. En los años 2014 y 2015, su aprobación se intensificó llegando a superar ampliamente a los procesos comunes.

Cuadro 7

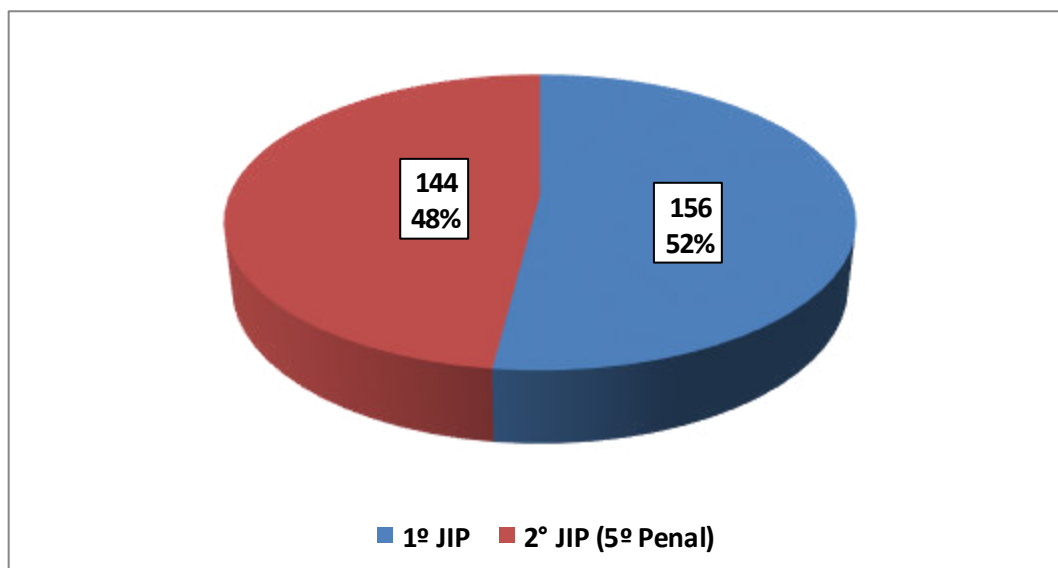
**CUADRO COMPARATIVO DE AUDIENCIAS DE PROCESOS DE
TERMINACION ANTICIPADA REGISTRADOS EN EL 1° Y 2° JUZGADO
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA NORTE POR AÑOS**

Audiencias de Terminación Anticipada	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1° JIP	02	23	10	83	38	156
2° JIP	00	28	09	90	17	144
	02	51	19	173	55	300

FUENTE: FEE – SIJ

Gráfico 12

**TOTAL DE AUDIENCIAS DE PROCESOS DE TERMINACION
ANTICIPADA REGISTRADOS EN EL 1° Y 2° JUZGADO DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA NORTE EN LOS AÑOS
2011-2015**

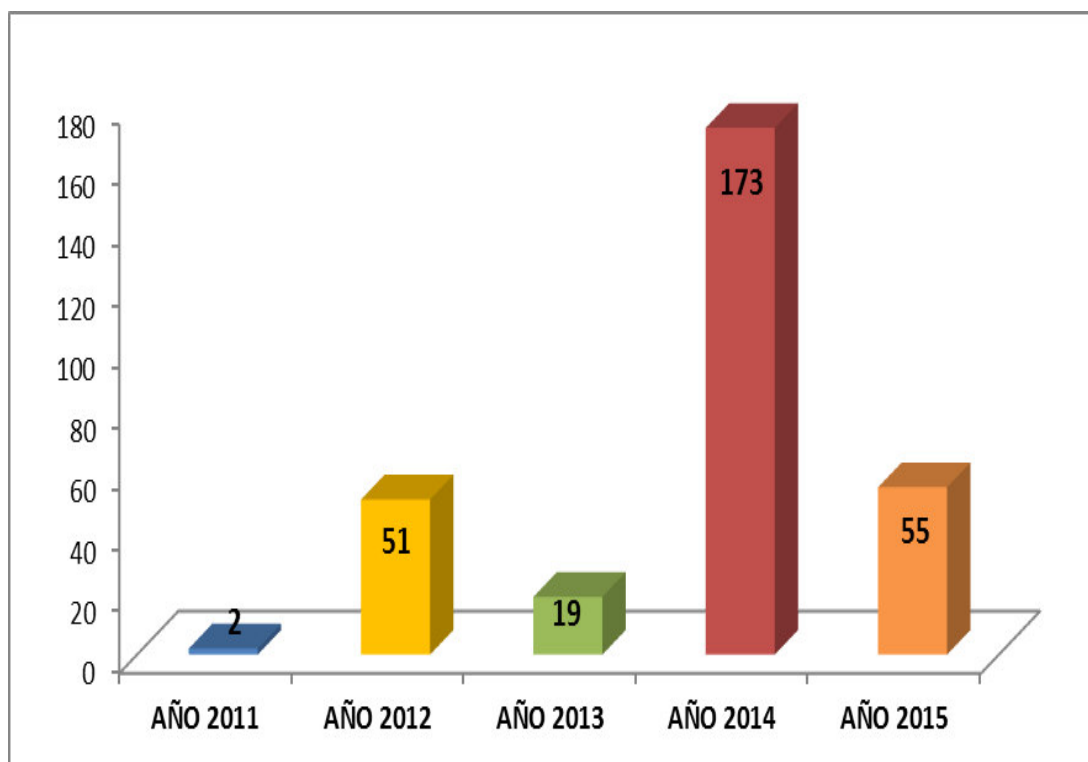


FUENTE: FEE – SIJ

El **gráfico N° 12** muestra el total de audiencias de terminación anticipada registradas en ambos juzgados, habiendo sido 300 audiencias; de las cuales el 1° Juzgado de Investigación Preparatoria ha registrado ligeramente una mayor cantidad en su aplicación.

Gráfico 13

**TOTAL DE AUDIENCIAS DE PROCESOS DE TERMINACION
ANTICIPADA REGISTRADOS EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA DE LIMA NORTE POR AÑOS**



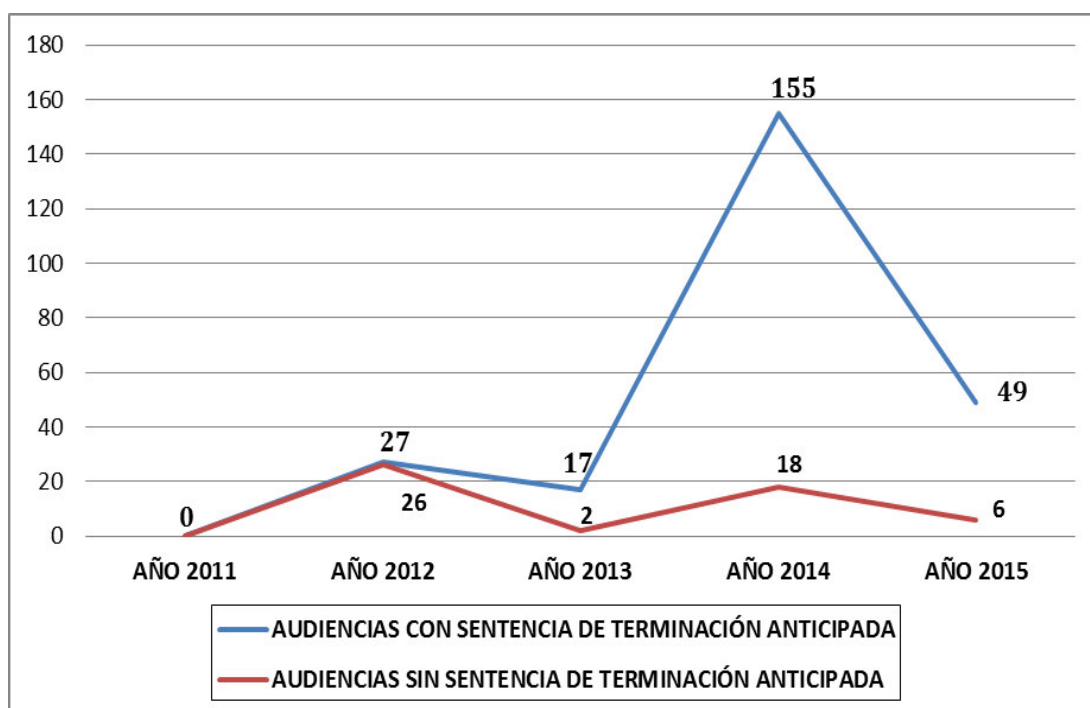
FUENTE: FEE – SIJ

En el **gráfico N° 13** podemos apreciar que en el año 2011 se registraron solo 2 audiencias de terminación anticipada, debido a que en abril de ese año, recién entraba en vigencia el NCPP y luego de formalizada la investigación preparatoria recién comenzaron los requerimientos del mecanismo de terminación anticipada en los procesos por los delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. En los años sucesivos se puede apreciar una mayor acogida en su aplicación, habiéndose intensificado en el año 2014 la mayor cantidad de audiencias de terminación anticipada.

Cuadro 8

CUADRO COMPARATIVO DEL TOTAL DE LAS AUDIENCIAS CON SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SIN SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR AÑO

Audiencias de Terminación Anticipada	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Concluyeron con Sentencia anticipada	00	27	17	155	49	248
Concluyeron Sin Sentencia anticipada	00	26	02	18	06	52
	00	53	19	173	55	300

Gráfico 14

FUENTE: FEE – SIJ

Del **gráfico N° 14**, se desprende que existen 248 procesos resueltos que presentaron audiencias y sus sentencias anticipadas respectivas. No obstante, también se ha verificado que 52 procesos donde se requirieron terminación anticipada y se llevaron a cabo audiencias, los acuerdos no prosperaron.

5.3. PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS CON SENTENCIAS ANTICIPADAS

Como se sabe en el año 2015, mediante el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto de 2015, pero vigente desde el 01 de diciembre de ese año, se modificó el artículo 447° del Código Procesal Penal, referido al deber del fiscal de incoar el proceso inmediato en los casos de flagrancia, suficiencia probatoria, confesión, delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, y en su numeral 3, estableció la posibilidad de la aplicación de la terminación anticipada en los procesos inmediatos; por consiguiente la data que mostramos a continuación se refiere a la aplicación que se hizo en el mes de diciembre del 2015.

Los **cuadros N° 9 y N° 10** nos muestran la información proporcionada por el Área de Estadísticas de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respecto a los procesos inmediatos resueltos, mediante la aplicación de la terminación anticipada.

Cuadro 9

PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE

DEPENDENCIA	2011	2012	2013	2014	2015
1° JIP					13
2° JIP (5° Penal)					0
					13

FUENTE: FEE – SIJ

Cuadro 10

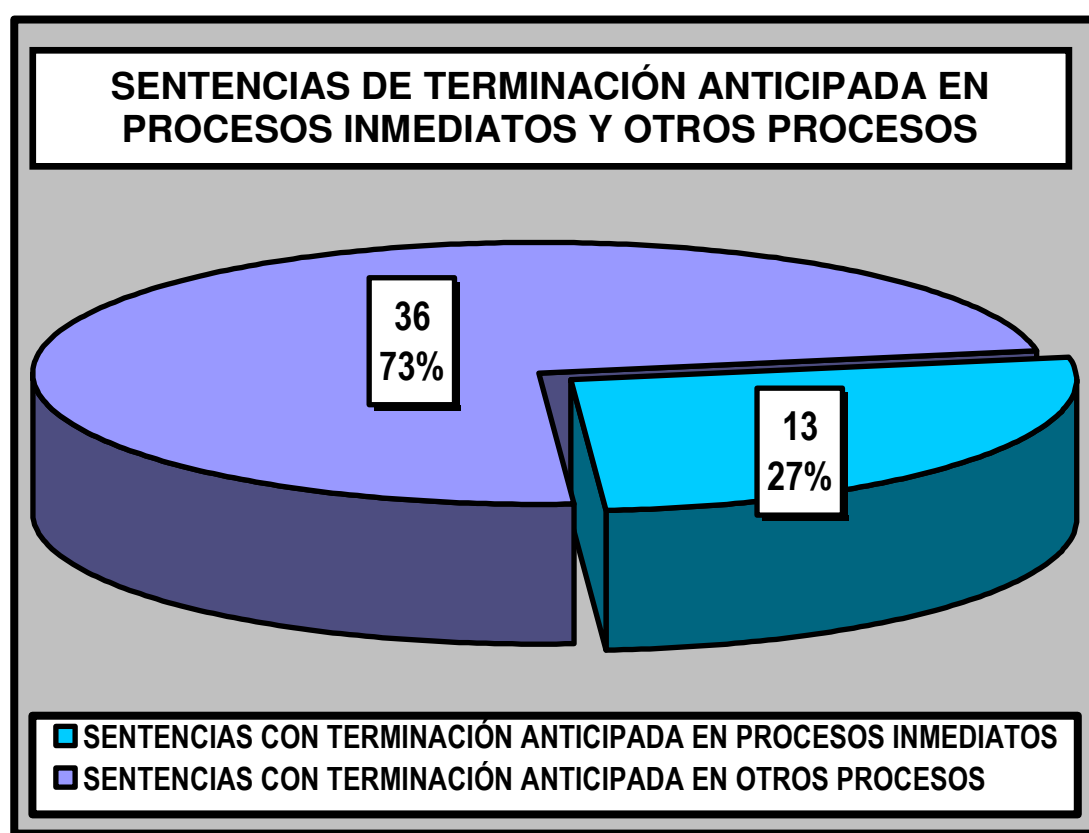
PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS SIN TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE

DEPENDENCIA	2011	2012	2013	2014	2015
1° JIP					00
2° JIP (5° Penal)					0
					00

FUENTE: FEE – SIJ

Ahora bien, conociendo que en el año 2015 los Juzgados de Investigación Preparatoria emitieron un total de 49 sentencias anticipadas (100%); podemos apreciar que 13 corresponden a expedientes de procesos inmediatos (27%), mientras que los otros 36 no fueron procesos inmediatos (73%), datos porcentuales y numéricos que lo plasmamos en el **gráfico N° 15**.

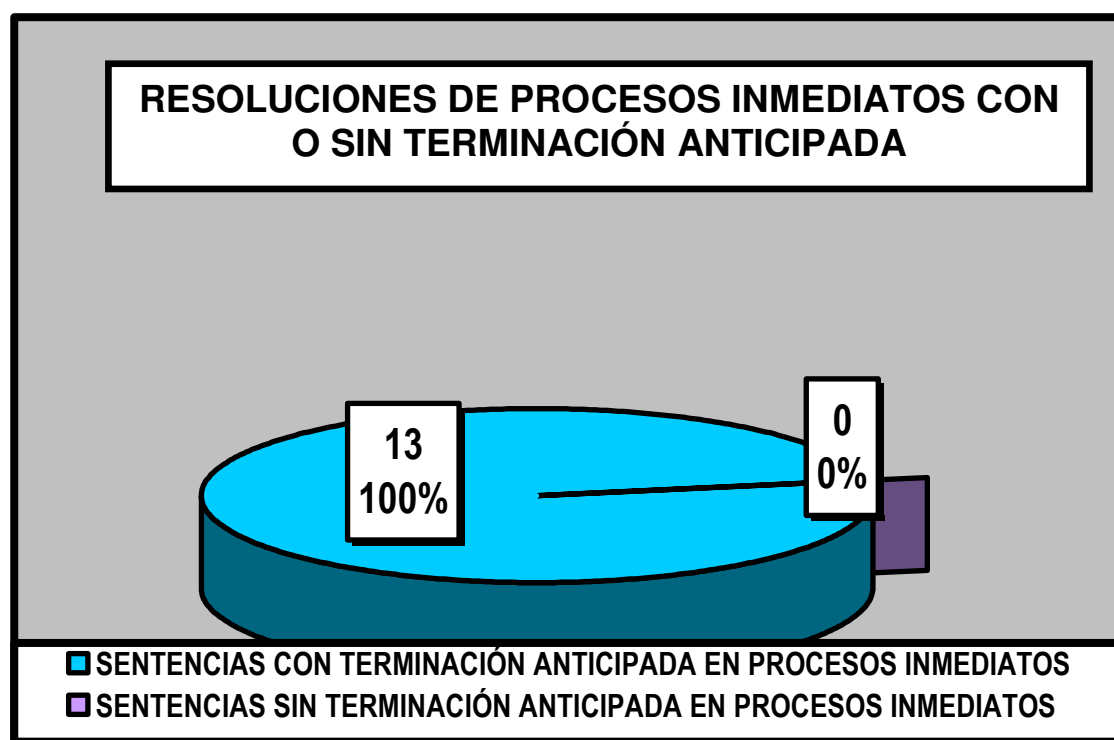
Gráfico 15



FUENTE: FEE – SIJ

Los datos antes referidos son muy alentadores, por cuanto solamente en un mes – diciembre del 2015 – con la vigencia del Decreto Legislativo 1194, los operadores jurídicos optaron por aplicar el mecanismo de la terminación anticipada en los procesos inmediatos, de los cuales la totalidad de los procesos inmediatos concluyeron con sentencias anticipadas, conforme lo muestra el **gráfico N° 16**.

Gráfico 16



FUENTE: FEE – SIJ

5.4. EVALUACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas fueron dirigidas a los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, como operadores jurídicos que conocen de los procesos de terminación anticipada en el Distrito Judicial de Lima Norte. En cuanto a las preguntas, los mencionados magistrados y abogados manifestaron su afán de colaboración y contestaron a las preguntas planteadas.

El objetivo de la formulación de estas entrevistas, fue conocer la opinión directa de los operadores jurídicos como sujetos procesales, conocer sus inquietudes respecto a la efectividad del proceso de terminación anticipada y sus propuestas de mejorar la normatividad de esta institución.

A continuación transcribiremos las preguntas y respuestas realizadas en las entrevistas de los operadores jurídicos - cuyos datos se detallarán en el anexo – refiriéndome a ellos como Juez A, Juez B, Juez C, Juez D, Fiscal A, Fiscal B, Abogado A, Abogado B, Abogado C y Abogado D.

1. ¿En su opinión la aplicación del proceso de terminación anticipada es efectiva como mecanismo de simplificación procesal? SI NO
¿Por qué? Mencione las ventajas y desventajas que considere.

RESPUESTAS:

Juez A: SI, porque evita el juicio oral y la actuación probatoria, evita gastos al Estado y permite consensuar a los sujetos procesales.

Juez B: SI, como ventajas tenemos la descongestión procesal, solución rápida del caso, veredicto inmediato para el imputado y la víctima, y respuesta estatal célere al crimen.

Juez C: SI, por cuanto permite concluir los procesos en forma rápida y eficiente.

Juez D: SI, porque se resuelve el conflicto con mayor prontitud.

Fiscal A: SI, todos son ventajas porque reduce la carga procesal evitando llegar a juicio.

Fiscal B: SI, son ventajas la descarga procesal, economía y celeridad.

Abogado A: SI, en un tiempo corto se sentencia, permite en el acto al procesado conocer su sanción, y no estar ocupando su tiempo en venir a diversas sesiones.

Abogado B: SI, porque descongestiona la carga procesal.

Abogado C: SI, contribuye a la simplificación de todo proceso judicializado, dado que si ya existe reconocimiento en la participación del hecho delictivo, permite juicios rápidos y eficaces.

Abogado D: SI, pone fin a los largos meses de espera del proceso común. Evita la carga procesal.

2. ¿Está de acuerdo que la solicitud de terminación anticipada sea requerido solamente en la etapa de investigación preparatoria?

SI NO ¿Por qué?

RESPUESTAS:

Juez A: NO, hay etapas previas al juzgamiento donde puede hacerse, además como es un proceso especial se permite aplicar también previo al juicio en el proceso inmediato.

Juez B: SI, la ventaja es que se cierre las otras opciones procesales a largo plazo. Si es premial debe ser oportuno, rápido y no cuando por ejemplo se sepa cuanto de pena se pide y cuando el aparato estatal lo haya usado una, dos o tres veces.

Juez C: SI, por cuanto en la fase de juzgamiento resulta de aplicación la conclusión anticipada.

Juez D: NO, porque es más célere, implicando ahorro de tiempo.

Fiscal A: NO, se puede pedir en la audiencia de control de acusación.

Fiscal B: NO, si bien el Código no establece, el Acuerdo Plenario lo limitó; sin embargo, en la práctica muchas veces se ha visto la posibilidad de aplicarla en la fase intermedia apartándose del Acuerdo Plenario.

Abogado A: NO, porque si se amplía su ámbito de aplicación puede ser más beneficioso. Muchas veces no son adecuadamente asesorados los procesados en esta etapa (Investigación Preparatoria), y podrían eventualmente con una mejor asesoría en la etapa intermedia someterse a este mecanismo.

Abogado B: SI, porque permite que el procesado se acoja al inicio del proceso, y que si lo haría posteriormente desnaturalizaría la terminación anticipada según el Acuerdo Plenario.

Abogado C: NO, debe ser considerado en toda etapa, siendo que este plazo de investigación "amplio" debe ser beneficioso tanto, para el Estado, satisfacción del agraviado, y el procesado tiene un descuento o reducción de la pena.

Abogado D: SI, según nuestra legislación es el estadio procesal.

3. ¿Cuán efectiva es la aplicación de la terminación anticipada en casos en flagrancia delictiva?

Muy efectiva ☐
Efectiva ☐
Medianamente efectiva ☐

Poco efectiva ☐
Nada efectiva ☐

RESPUESTAS:

Juez A: MUY EFECTIVA, permite solucionar el conflicto en casos de flagrancia con suficientes elementos de convicción.

Juez B: MUY EFECTIVA, un caso se resuelve a las 48 horas. Ayuda bastante a la descarga y respuesta del Estado frente al delito

Juez C: MEDIANAMENTE EFECTIVA, porque existe inconveniente en la negociación de la pena entre el fiscal y la defensa; haciendo que los procesos lleguen a juicio, donde finalmente los procesos concluyen por conclusión anticipada.

Juez D: EFECTIVA, la justicia es rápida, su efectividad se plasma en delitos menores, resulta oportuna para su aplicación eficaz.

Fiscal A: MUY EFECTIVA, hay flagrancia y hay suficientes elementos de convicción

Fiscal B: EFECTIVA, los acuerdos son aprobados en un promedio de 95%

Abogado A: MUY EFECTIVA, permite sancionar al responsable de un hecho ilícito en forma inmediata, coadyuvando con los principios de celeridad y economía procesal.

Abogado B: MUY EFECTIVA, porque permite en un plazo breve resolver la situación del procesado y el agraviado alcanzar justicia.

Abogado C: EFECTIVA, pues lo que busca la parte agraviada es que se le resarza el daño de la forma más célere y por otro lado el procesado tiene una reducción de sanción considerable por el ilícito cometido.

Abogado D: EFECTIVA, para cumplir en poner fin al proceso largo de juzgamiento.

4. Si tuviera que modificar la normativa respecto al proceso de terminación anticipada a fin de que sea más efectiva ¿Cuáles serían sus propuestas?

Que sea presentado en cualquier etapa del proceso ☐
Incrementar los beneficios al imputado ☐
Considerar que es un criterio de oportunidad ☐
Otros ☐

Por favor, mencione el porqué de su(s) propuesta(s).

RESPUESTAS:

Juez A: QUE SEA PRESENTADO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO E INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, porque se permite consensuar hechos probados en la etapa intermedia del proceso común, porque se permitirá aplicar penas justas con un mayor referente aritmético.

Juez B: INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, promueve mayor beneficio procesal e incentivos a que se concluya rápidamente. Instrumentaliza más el proceso penal.

Juez C: INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, por cuanto, lo que se debe buscar no solo es la resolución del conflicto; sino que además el imputado pueda tener derecho a una reducción mayor de la pena.

Juez D: INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, porque conllevaría a una aplicación de mayor magnitud.

Fiscal A: QUE SEA PRESENTADO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO E INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, para aplicar a más casos como mecanismo de simplificación.

Fiscal B: CONSIDERAR QUE ES UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD, para que se aplique en la fase intermedia.

Abogado A: QUE SEA PRESENTADO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO E INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, es una limitación que se ciña únicamente a la investigación preparatoria y no se aplique en la etapa intermedia. Eso representa que más personas obtendrán este beneficio.

Abogado B: CONSIDERAR QUE ES UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD, para poder aplicar la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia.

Abogado C: QUE SEA PRESENTADO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO E INCREMENTAR LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO, una propuesta que permita al imputado poder tener un beneficio premial para terminar un proceso rápido y eficaz, buscando también para la parte agraviada que se sienta satisfecha con el resarcimiento de forma célere.

Abogado D: CONSIDERAR QUE ES UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD, para poder aplicar en la etapa intermedia.

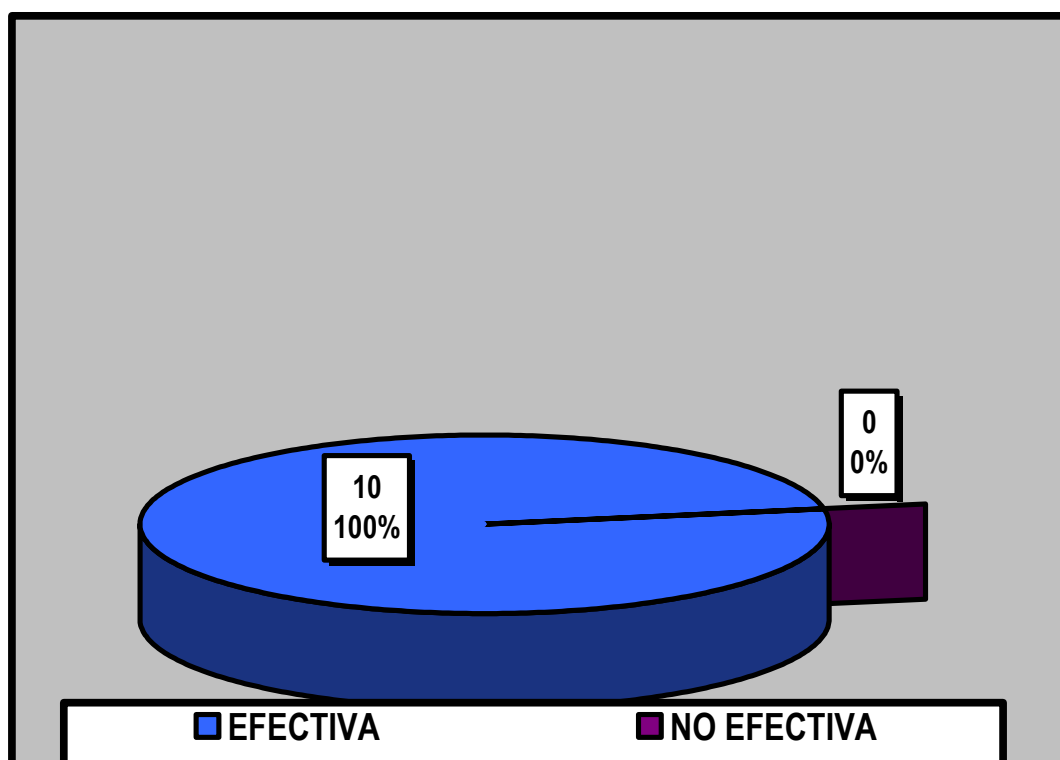
Prosiguiendo y para fines más didácticos y gráficos, a continuación desglosaremos las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas planteadas.

PREGUNTA 1

EFFECTIVIDAD DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA COMO MECANISMO DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL

El **gráfico 17**, nos muestra claramente que la totalidad de los 10 operadores jurídicos (magistrados y abogados) consideran que el proceso de terminación anticipada es una herramienta efectiva como mecanismo de simplificación procesal; por consiguiente, podemos considerar que ellos consideran que fue un acierto del legislador el incorporarlo en el Código Procesal Penal.

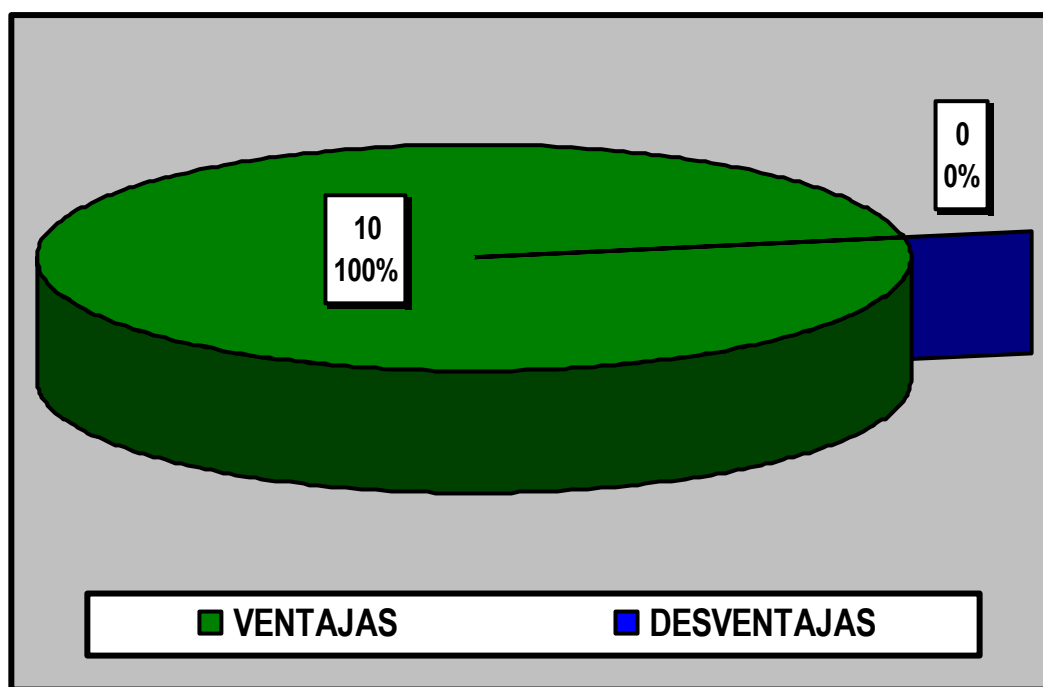
Gráfico 17



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

La segunda parte de la pregunta 1, busca que se mencionen las ventajas y desventajas de la aplicación de la terminación anticipada; de las respuestas vertidas por los operadores jurídicos, podemos observar que el cien por ciento (100%) de ellos mencionaron solamente las ventajas del proceso, conforme se aprecia en el **gráfico 18**.

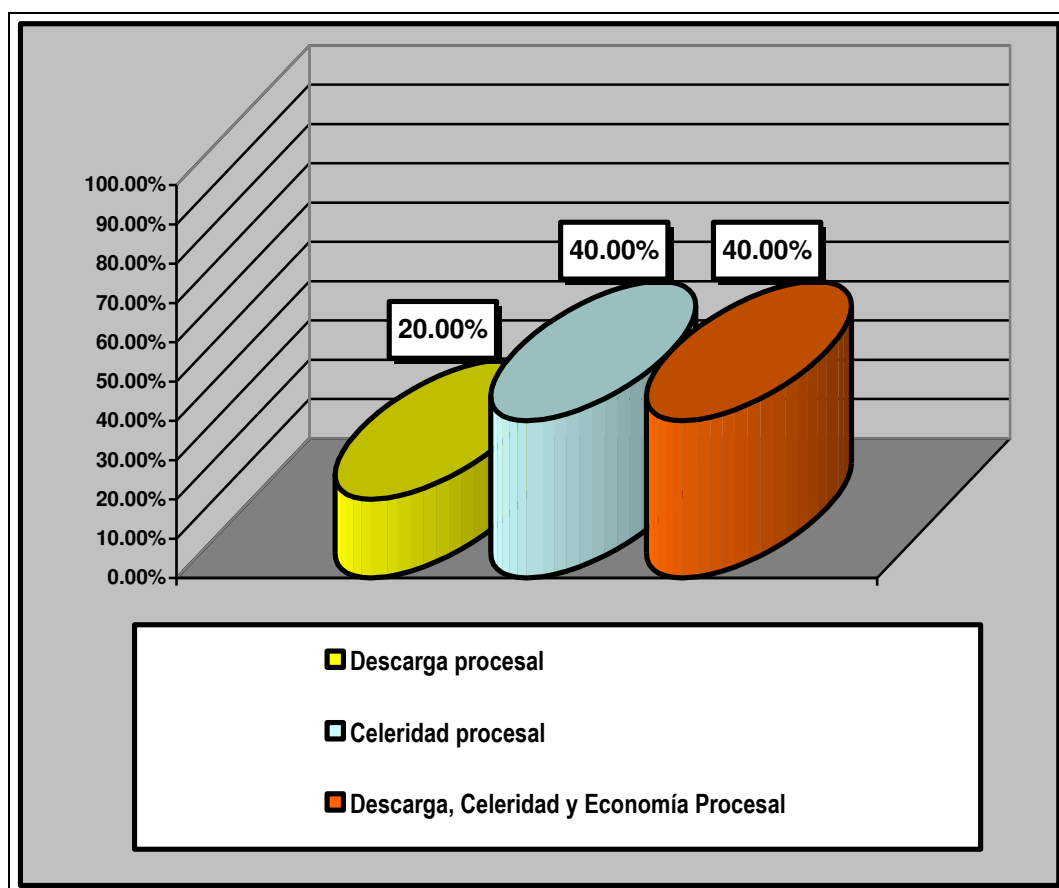
Gráfico 18



DETALLE DE LAS VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

En el **gráfico N° 19** podemos observar las respuestas de los 10 operadores jurídicos sobre las razones de las ventajas de la aplicación de la terminación anticipada, de éstas tenemos que el 20% de los entrevistados consideró a la descarga procesal como la mayor ventaja, mientras que el 40% de los entrevistados resaltaron a la celeridad procesal y el otro 40% consideraron que las máximas ventajas eran la descarga, la celeridad y la economía procesal. **En conclusión**, se colige que todos los operadores jurídicos consideraron a la descarga y la celeridad procesal como las mayores ventajas.

Gráfico 19



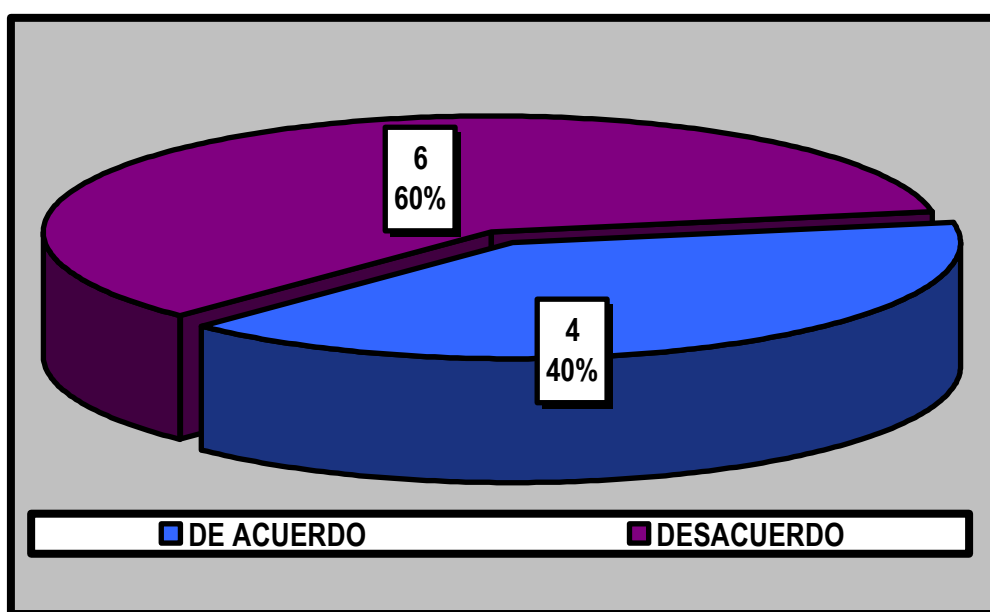
PREGUNTA 2

SI ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO QUE SE LIMITE EL REQUERIMIENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SOLO A LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

En el **gráfico N° 20** podemos observar de manera detallada las respuestas de los magistrados y abogados sobre la oportunidad de la solicitud del proceso de terminación anticipada.

- El 60 % de los operadores jurídicos consideraron que la solicitud del proceso de terminación anticipada no debe limitarse solamente a la etapa de investigación preparatoria, precisando los beneficios que acarrea dicha institución premial.
- El 40 % de los operadores jurídicos consideraron que se debe limitar la terminación anticipada a la etapa de investigación preparatoria; sin embargo, éstos últimos explicaron, que basan sus respuestas dado los límites establecidos por la ley y la jurisprudencia; por lo que, proponen modificatorias para que pueda aplicarse en la etapa intermedia.

Gráfico 20



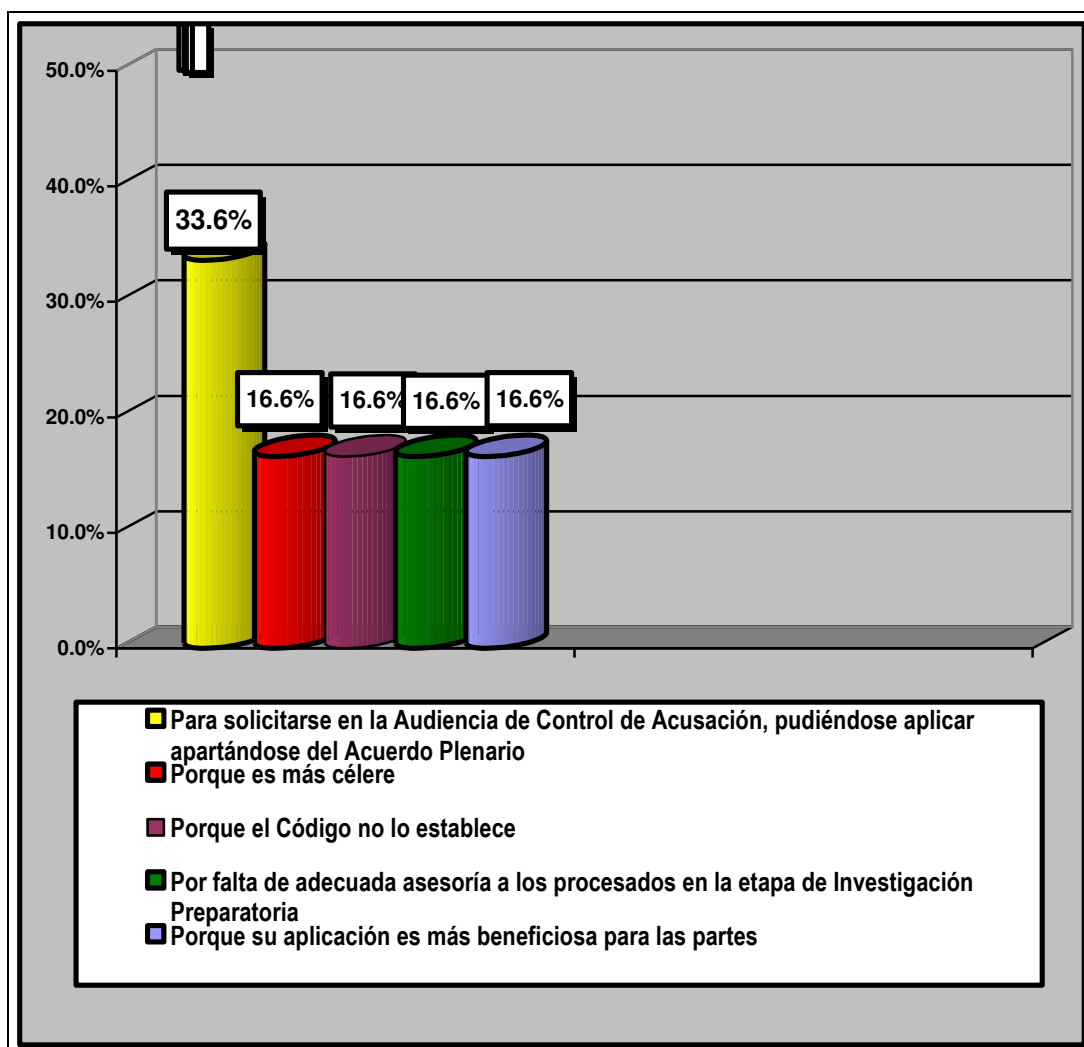
RAZONES POR LAS QUE NO SE DEBE LIMITAR EL REQUERIMIENTO DE LA TERMINACION ANTICIPADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

En el **gráfico N° 21**, señalamos a detalle las razones expuestas por los seis operadores jurídicos que opinaron que el proceso de terminación anticipada NO debe limitarse a la etapa de investigación preparatoria, que son las siguientes:

- Para solicitarse en la audiencia de control de acusación, pero muchas veces en la práctica se ve la posibilidad de aplicar en la fase intermedia, apartándose del Acuerdo plenario que lo limita (33.6%).
- Se debe aplicar porque es más célere, implicando un ahorro de tiempo (16.6%).
- El Código no lo establece, (16.6%).
- Porque los procesados muchas veces no son adecuadamente asesorados en la etapa de investigación preparatoria, por lo que con una mejor asesoría podrían someterse a este mecanismo en la etapa intermedia (16.6%).
- Porque es más beneficioso para el Estado, satisfacción del agraviado, y el procesado tiene un descuento o reducción de la pena (16.6%).

En conclusión, de las opiniones vertidas por estos operadores jurídicos, se puede deducir que ellos se encuentran de acuerdo con la posibilidad de requerir la terminación anticipada en la etapa intermedia u otras etapas previas al juzgamiento; porque es un proceso especial célere y porque muchas veces los procesados no son adecuadamente asesorados en la etapa de investigación preparatoria; por los beneficios que se obtienen en este derecho premial y señalan como una posibilidad **el apartarse del acuerdo plenario N° 05-2009**.

Gráfico 21

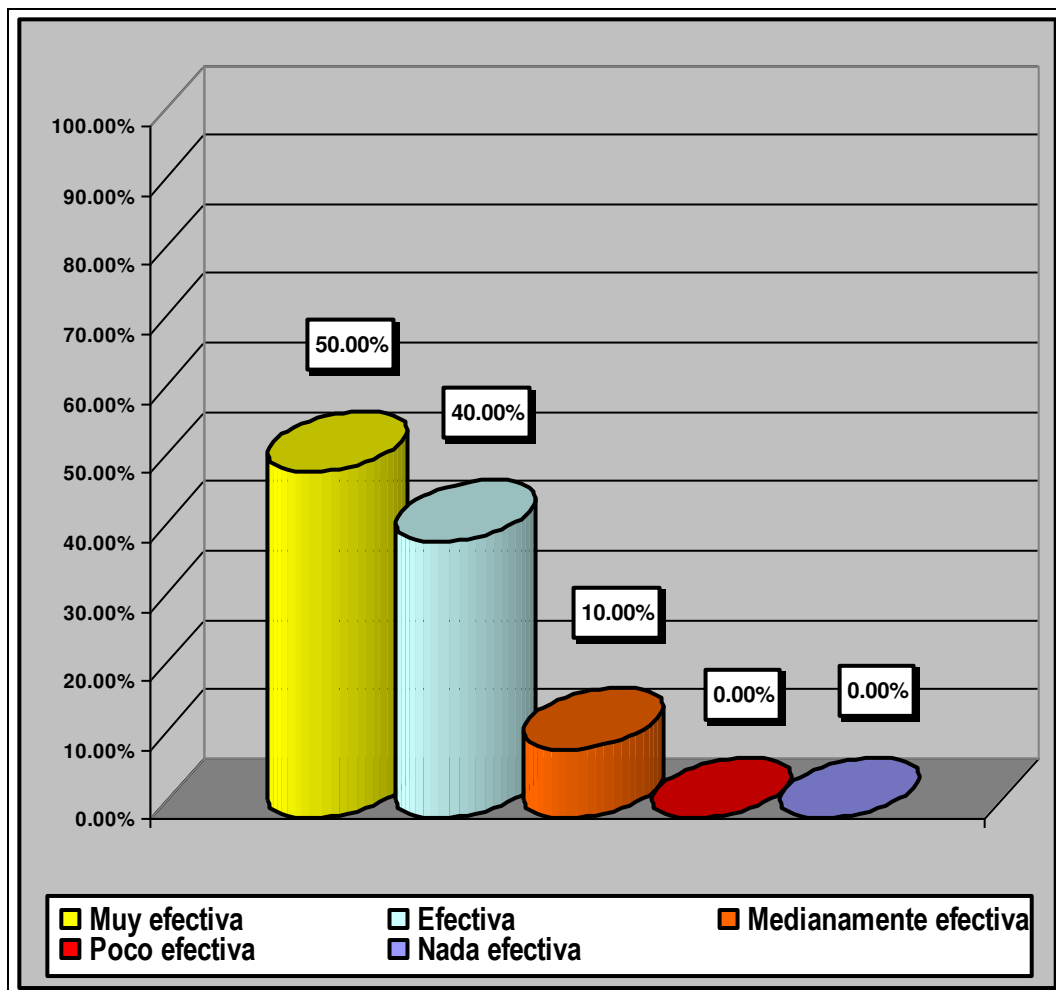


PREGUNTA 3

EFFECTIVIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA

El **gráfico N° 22** nos muestra que el 50% de los operadores jurídicos consideran que la aplicación del proceso de terminación anticipada en casos de flagrancia delictiva es muy efectiva, y un 40% opina que es efectiva; y finalmente el 10% indica que es medianamente efectiva, explicando esto último, que se debe a los inconvenientes en la negociación, lo que hace que lleguen los procesos hasta el juicio; de tal manera que dichas opciones son positivas y demuestran el alto índice de aceptación y aprobación de la efectividad del proceso de terminación anticipada en los procesos de flagrancia.

Gráfico 22



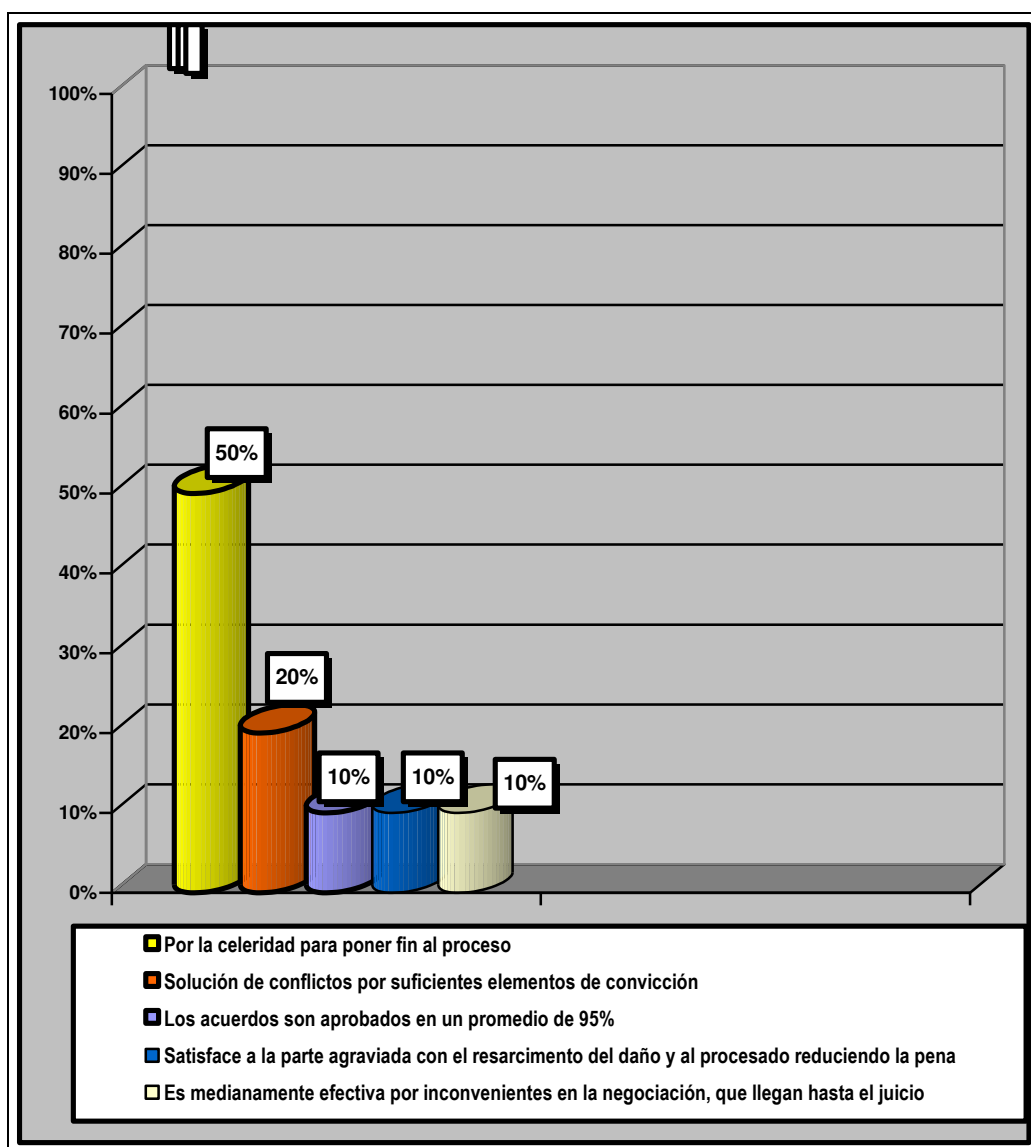
RAZONES DE LA EFECTIVIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA EN LOS PROCESOS INMEDIATOS

El **gráfico N° 23** detalla las respuestas emitidas por los operadores jurídicos entrevistados, sobre la efectividad de la terminación anticipada en los Procesos Inmediatos, por las siguientes razones:

- El 50% por la celeridad para poner fin al proceso.
- El 20% por la solución de conflictos por suficientes elementos de convicción.

- El 10% porque los acuerdos de los procesos inmediatos son aprobados en un promedio del 95%.
- El 10% porque se satisface a la parte agraviada con el resarcimiento del daño, y al procesado reduciéndole la pena.
- El 10% indica que es medianamente efectiva porque existe inconvenientes en la negociación, lo que hace que los procesos lleguen hasta el juicio.

Gráfico 23



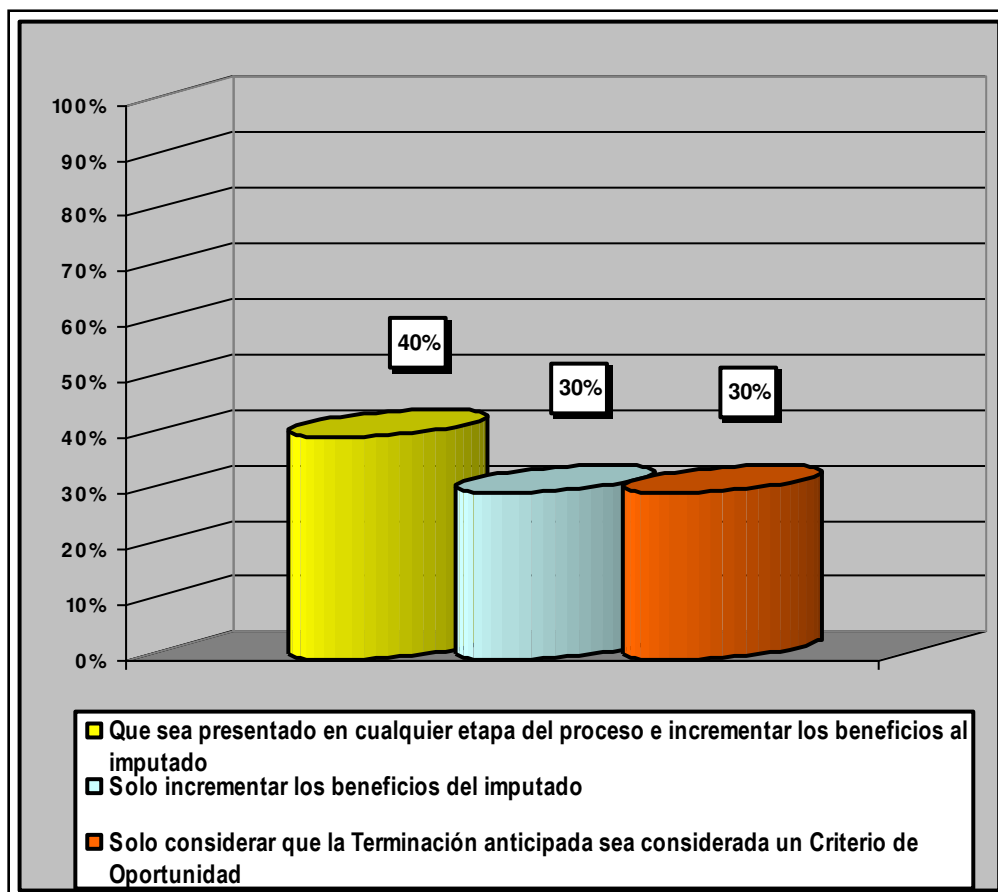
PREGUNTA 4

PROPUESTAS DE MODIFICATORIAS NORMATIVAS RESPECTO AL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

En el **gráfico N° 24**, observaremos que las opciones escogidas por los operadores jurídicos entrevistados, respecto a las propuestas de modificatorias normativas del proceso de terminación anticipada, que sus propuestas se centraron en tres temas:

- 40% propuso dos modificatorias consistentes en que sea presentado en cualquier etapa del proceso y que se debía incrementar los beneficios premiales del imputado.
- 30% planteo solo incrementar los beneficios del imputado.
- 30% propuso solo que la terminación anticipada sea considerado un criterio de oportunidad.

Gráfico 24

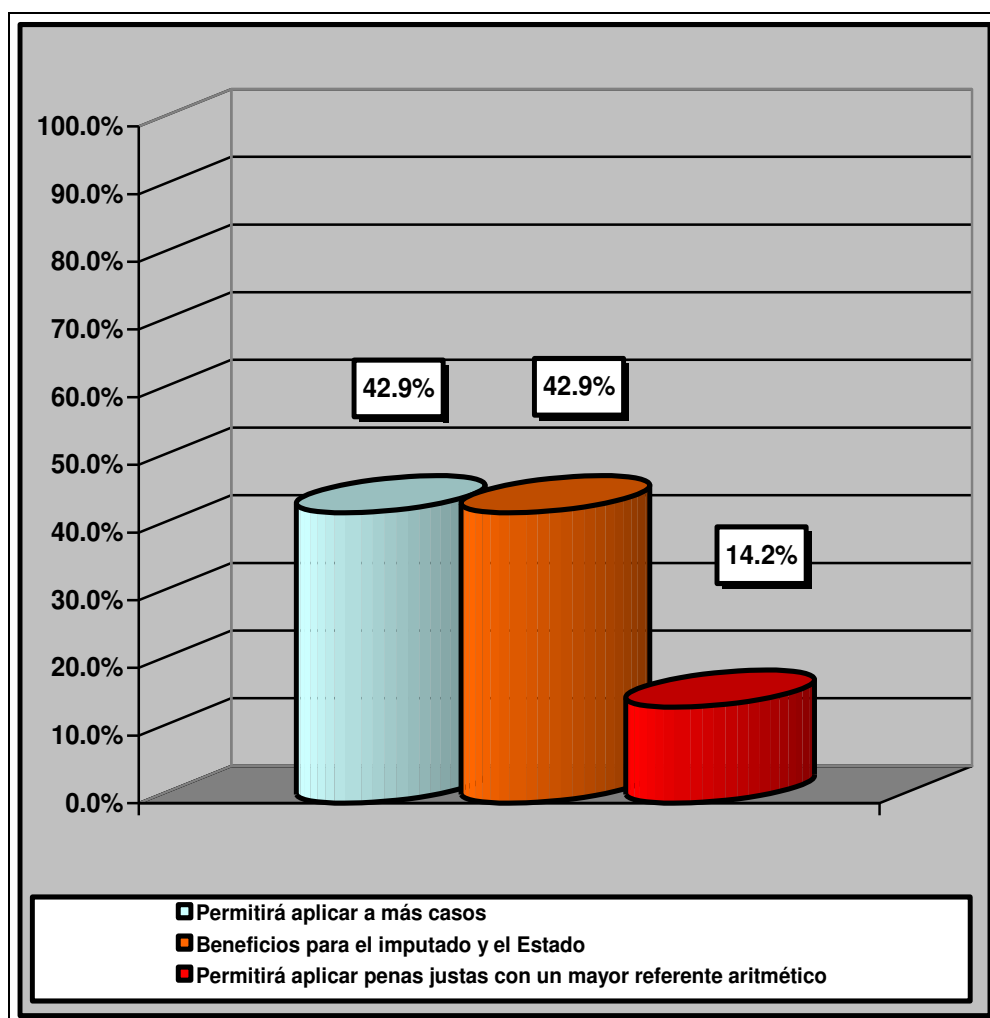


RAZONES QUE SUSTENTAN EL INCREMENTO DE LOS BENEFICIOS AL IMPUTADO EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

El **gráfico N° 25** detalla el porcentaje concerniente a las respuestas de los operadores jurídicos que señalaron como propuesta de modificación el incremento de beneficios al imputado en el proceso de terminación anticipada; así tenemos:

- Permitirá aplicar a más casos (42.9%).
- Para que el imputado tenga un beneficio premial y se termine su proceso en forma rápida y eficaz; es decir, beneficio tanto para el imputado como para el Estado (42.9%).
- Permitirá aplicar penas justas con un mayor referente aritmético (14.2%).

Gráfico 25

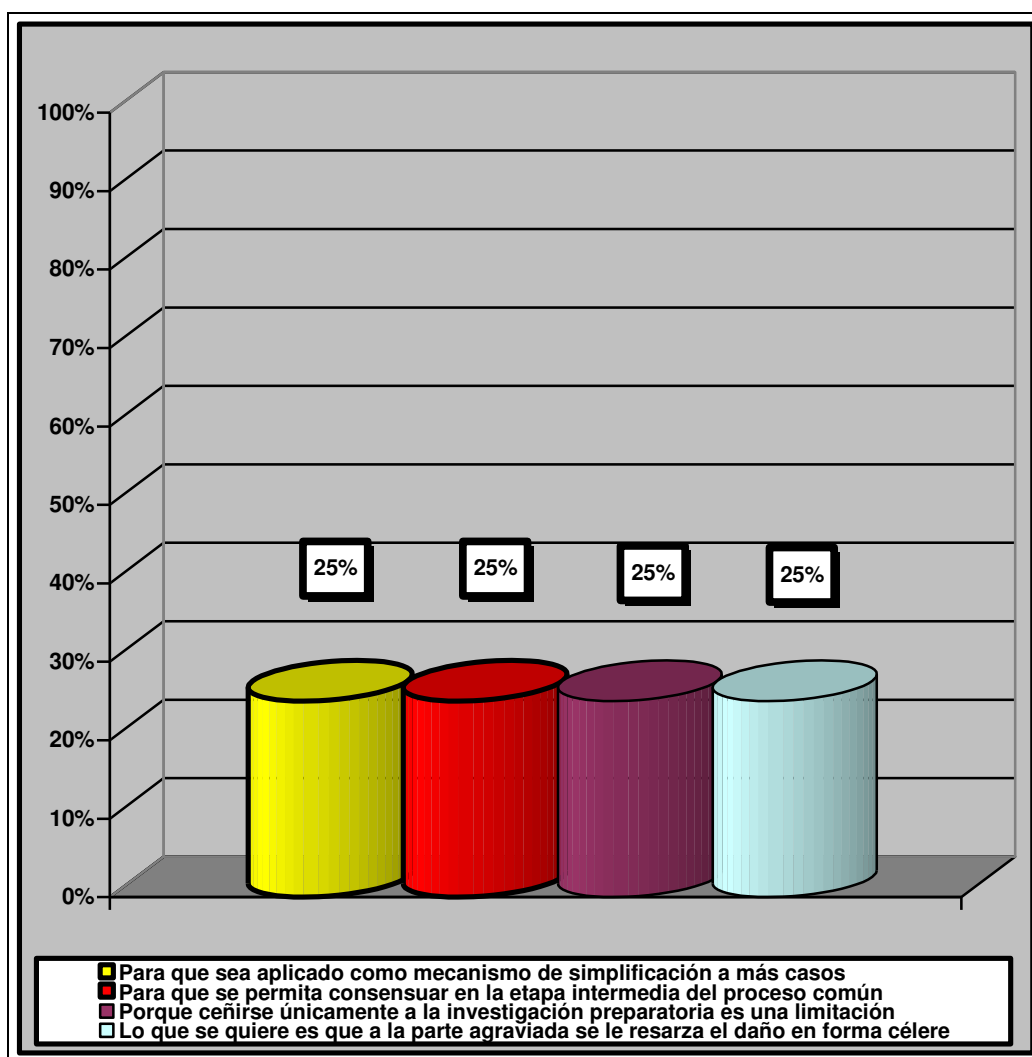


RAZONES QUE SUSTENTAN LA PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO

El **gráfico N° 26** nos muestra las respuestas de todos los operadores jurídicos respecto al porqué debe regularse la presentación de la terminación anticipada en cualquier etapa del proceso; entre las respuestas tenemos:

- Para que se permita consensuar en la etapa intermedia del proceso común (25%).
- Para que sea aplicado como mecanismo de simplificación a más casos (25%).
- Porque ceñirse únicamente a la investigación preparatoria es una limitación (25%).
- Lo que se quiere es que a la parte agraviada se le resarza el daño en forma célere (25%).

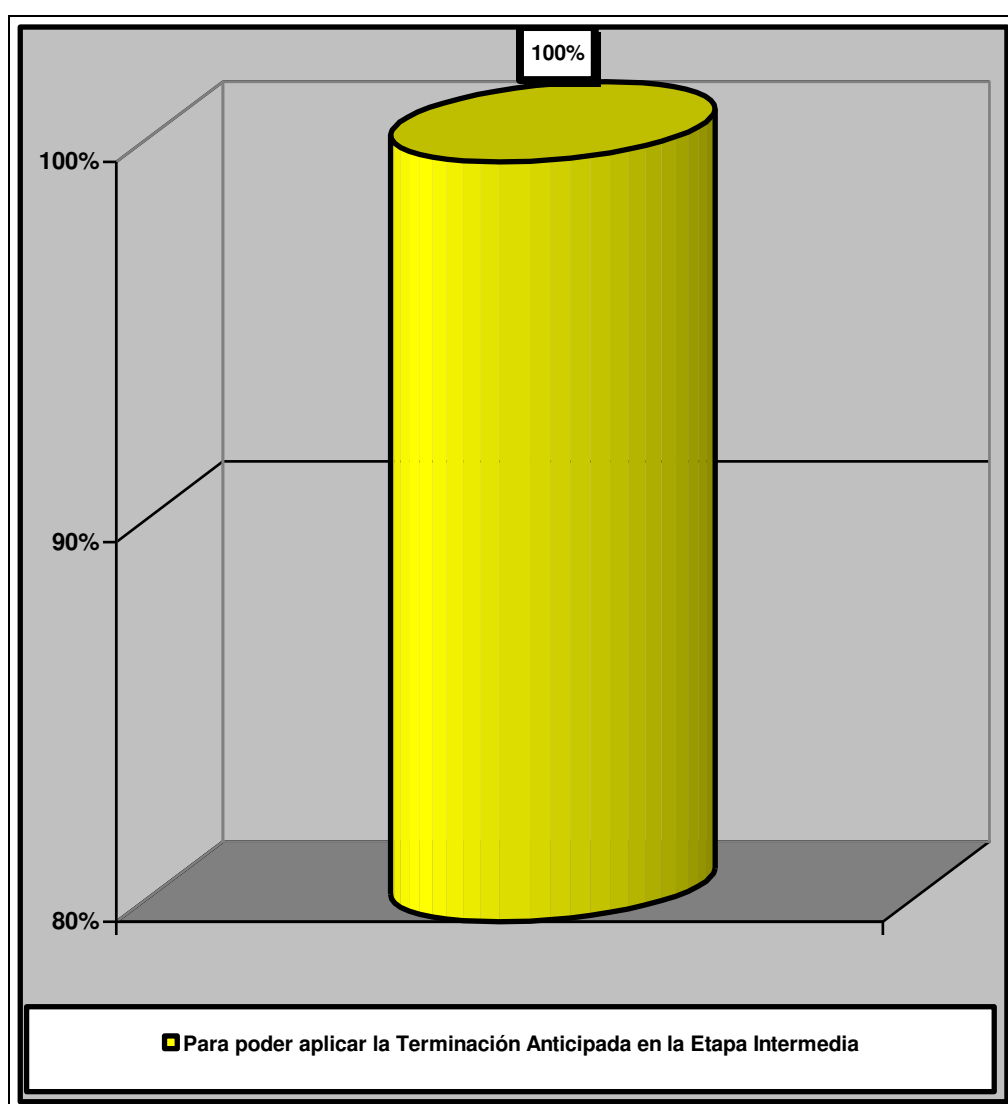
Gráfico 26



RAZONES QUE SUSTENTAN QUE SE CONSIDERE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD

El **gráfico N° 27** nos muestra las respuestas de todos los operadores jurídicos que coincidieron en señalar como propuesta de modificatoria, el considerar a la terminación anticipada un *criterio de oportunidad*; teniendo como resultado que el 100% sostuvo que sea considerada un criterio de oportunidad, para poder aplicar este proceso especial en la etapa intermedia; toda vez que su aplicación en esta etapa se encuentra limitado por la ley y la jurisprudencia.

Gráfico 27



5.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

5.5.1. Contrastación de la Hipótesis General

Se ha confirmado la hipótesis general, al determinarse por las estadísticas y las entrevistas a los operadores jurídicos, que se busca la mayor posibilidad de aplicar el proceso de terminación anticipada; por lo que, los dispositivos legales e interpretaciones jurídicas no deben limitar la oportunidad de su aplicación solo a la etapa de investigación preparatoria del proceso, sino ampliar la oportunidad de aplicar dicha institución en la etapa intermedia, como mecanismo de simplificación de procesos y negociación de penas.

5.5.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas

Primera.- Se confirma nuestra primera hipótesis, al determinarse que un desacierto del artículo 468° del Código Procesal Penal, es limitar al juez que aplique la terminación anticipada solo hasta antes de formularse la acusación fiscal; toda vez que la mayoría de los operadores jurídicos han sustentado sus propuestas en modificaciones normativas que posibiliten la solicitud de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal y en el incremento de beneficios al imputado, concerniente a la reducción de las penas de acuerdo a la etapa en que se solicita.

Segunda.- Se confirma nuestra segunda hipótesis, en el sentido de que la mayoría de los operadores jurídicos desaprueba la interpretación hecha por los vocales de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, que limita la aplicación de la terminación anticipada solamente a la etapa de investigación preparatoria del proceso penal común; por lo que, a fin que pueda ser aplicada en la etapa intermedia del proceso, proponen una desvinculación del Acuerdo Plenario en mención.

Tercera.- Se confirma nuestra tercera hipótesis, al determinarse que en el año 2015 en todos los procesos inmediatos se solicitaron y aprobaron los acuerdos de terminación anticipada.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. En el periodo de los años 2011- 2015 en el Distrito Judicial de Lima Norte, se ha aplicado el proceso de terminación anticipada en la mayoría de los casos seguidos por delitos de corrupción de funcionarios (68%), los que han concluido con sentencias anticipadas.
- 6.2. La aplicación del artículo 468° del Código Procesal Penal y la interpretación que hacen los Magistrados de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, que limitan la aplicación del mecanismo de terminación anticipada sólo a la etapa de investigación preparatoria, han influido negativamente en la efectividad de la aplicación de la terminación anticipada; tal es así que los operadores jurídicos entrevistados señalaron como propuesta de modificatoria, que la terminación anticipada sea considerada un criterio de oportunidad para poder ser aplicada en la etapa intermedia, sin embargo, dicha posibilidad no es viable en nuestra legislación; por lo que, es necesario un cambio normativo extendiendo la aplicación de este mecanismo.
- 6.3. Se ha podido determinar que la regulación de la aplicación del proceso de terminación anticipada en los procesos especiales inmediatos es un acierto, toda vez que en todos los procesos inmediatos del año 2015, donde se solicitaron la aplicación de la terminación anticipada, concluyeron con sentencias anticipadas.

- 6.4. Se ha podido determinar que es indispensable la regulación normativa que faculte la aplicación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, además de establecer mayores beneficios al imputado respecto a la reducción de las penas a fin de incrementar los niveles de efectividad de este proceso como mecanismo de simplificación y negociación de penas.
- 6.5. Conforme a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116, la audiencia de control de acusación en la etapa intermedia, al tener como características que es una audiencia pública basada en el principio de contradicción y a la cual no está obligado a acudir el acusado, sino solo su defensa técnica, sería imposible aplicar la terminación anticipada en caso que no concurra el acusado, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal; sin embargo, en una audiencia de incoación del proceso inmediato que tiene las mismas características, se viene aplicando sin inconveniente alguno el mecanismo de terminación anticipada, para ello sólo basta que el juez notifique debidamente al imputado para que acuda a la audiencia, de no asistir éste, simplemente se continúa con su abogado defensor de elección o de la defensa pública, evidenciándose con la incomparecencia del imputado su desinterés en obtener una sentencia anticipada, por lo que no se afectaría el principio de celeridad procesal.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se debe efectuar modificaciones al Código Procesal Penal a fin que la oportunidad de la aplicación del proceso de terminación anticipada se extienda a la etapa intermedia del proceso penal.

- 7.2. Se debe considerar a nivel legislativo la posibilidad de incrementar porcentualmente el beneficio de la reducción de la pena al imputado, cuando la terminación anticipada se presente en la etapa de investigación preparatoria del proceso penal, a fin de extender la aplicación de dicha institución.
- 7.3. Como consecuencia de las anteriores recomendaciones, si bien es cierto también correspondería la reducción de la pena al imputado cuando se acoja al mecanismo de la terminación anticipada en la etapa intermedia, sin embargo, al ser mayor el ahorro de recursos al Estado y la rapidez en el resarcimiento a la víctima cuando se hubiera acogido en la primera etapa de investigación preparatoria, corresponde que el beneficio en la etapa intermedia sea menor.
- 7.4. El Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Colegios de Abogados y facultades de derecho a nivel nacional, deberían organizar eventos académicos con la finalidad de discutir salidas alternativas para afrontar la crisis generada por la congestión de los casos, entre ellas, la aplicación de la terminación anticipada, como mecanismo de simplificación y de negociación de penas; con el objeto de elaborar propuestas de iniciativas legislativas para fortalecer su aplicación, lo que repercutirá en maximizar los recursos en el sistema de justicia penal, solucionar el conflicto generado por el delito, satisfaciendo las legítimas expectativas de sanción y resarcimiento a la parte agraviada, sin afectar los derechos del imputado.

VIII. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

“SECCIÓN V EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Artículo 468°.- Normas de aplicación

Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:

1. A iniciativa del fiscal o del imputado, el juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez expedida la disposición fiscal del artículo 336 y **hasta la audiencia preliminar de control de la acusación**, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.

(...)

Artículo 471°.- Reducción adicional acumulable

El imputado que se acoja a este proceso hasta antes de la acusación recibirá un beneficio de reducción de una cuarta parte de la pena; y de una sexta parte si se realiza después que la acusación sea presentada.

Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial.

La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal, en cuyo caso solo recibe el beneficio correspondiente a la terminación anticipada.

La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella.

(...)”

IX. BIBLIOGRAFIA

1. ALEGRIA PATOW, Jorge y otros. *La Terminación Anticipada en el Perú*. Trabajo de Investigación, Doctorado USMP, Lima, 2012.
2. ANGULO ARANA, Pedro Miguel. *El Principio de Oportunidad en el Perú*. Palestra Editores, Lima, 2004.
3. ASECIO MELLADO, José María. *Introducción al Derecho Procesal*. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997.
4. BACIGALUPO, Enrique. *El debido proceso penal*. Hammurabi, Buenos Aires, 2005.
5. BARONA VILAR, Silvia. *La conformidad en el Proceso Penal*. Tirant to Blanch, Valencia, 1994.
6. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. *Procedimientos Especiales. Lo Nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre los procedimientos especiales*. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Guía Practica 4. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición, Lima –Perú, abril 2010.
7. BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. *Legitimación de las Fórmulas Consensuadas Simplificadoras del Procesamiento Penal*. En: Revista Oficial del Poder Judicial, Año 3, N° 5/2009, Lima, 2009.
8. BURGOS ALFARO, José. *El nuevo proceso penal*. Grijley, Lima, 2009.
9. COVEY, Stephen. *Los siete hábitos de la gente altamente efectiva*. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 2003.

10. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. *El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional*. Sexta Edición, Palestra Editores S.A.C, Lima, 2006.
11. DAVID GRANDA, Alberto. *Derecho Procesal Penal*. Tomo I, Editorial Jurídica Nova Tesis, Rosario, Santa Fe, Argentina, 2000.
12. DEVIS ECHANDIA, Hernando. *Compendio de Derecho Penal*. Tomo I, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, 1994.
13. FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. *Notas del proyecto del Código de proceso penal modelo para Iberoamérica*. En: Boletín mexicano de Derecho comparado, N° 70. Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, 1991.
14. GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor y CORTES DOMINGUEZ, Valentín, *Derecho Procesal: Proceso Penal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993.
15. GIMENO SENDRA, Vicente. *Derecho Procesal Penal*. Editorial COLEX, Segunda Edición, Madrid, 2007.
16. GORDILLO SANTANA, Luis F. *La justicia restaurativa y la mediación penal*. Iustel, Madrid, 2007.
17. GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. *Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal*. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá – Colombia, 1998.
18. GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. *Fundamentos teóricos constitucionales del nuevo proceso penal*. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá – Colombia, 2005.

19. JAKOBS, Gunther. *Derecho penal: parte general fundamentos y teoría de la imputación*. Traducción de Cuello Contreras, Joaquín y Serrano Gonzáles de Murillo, José Luis. Marcial Pons, Madrid, 1997.
20. LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo. *El derecho de los jueces*. Editorial Legis, Bogotá, 2000.
21. MOLINA LÓPEZ, Ricardo. *La Conformidad en el Proceso Penal*. En: Colección de Ciencias Penales, Editada por la Universidad Pontificia Bolivariana, Grupo Editorial IBAÑEZ y Universidad de los Andes, Colombia, 2012.
22. MONTERO AROCA, Juan. *Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón*. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
23. MONTERO AROCA, Juan; GOMEZ COLOMER, Juan Luis; MONTON REDONDO, Alberto y BARONA VILAR, Silvia. *Derecho jurisdiccional III: Proceso penal*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
24. MUÑOZ CONDE, Francisco. *La búsqueda de la verdad en el proceso penal*. Hammurabi, Buenos Aires, 2003.
25. MUÑOZ NEIRA, Orlando. *Sistema Penal Acusatorio de Estados Unidos*. Editorial LEGIS, Primera Edición, Colombia, 2006.
26. NEYRA FLORES, José Antonio. *Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación oral*. Editorial IDEMSA, Lima – Perú, 2010.
27. ORE GUARDIA, Arsenio y RAMOS DAVILA, Liza. *Del modelo inquisitivo al acusatorio. A propósito de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal de 2004*. En: Actualidad Jurídica, N° 142, Gaceta Jurídica, Lima, 2005.

28. PALACIOS DEXTRE, Dario y MONGE GUILLERGUA, Ruth. *El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano*. Editora Fecat, Lima, 2003.
29. PEÑA CABRERA, Alonso R. y FRISANCHO APARICIO, Manuel. *Terminación Anticipada del Proceso*. Jurista Editores, Primera Edición, Lima-Perú. 2003.
30. PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. *Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal*. Primera Edición, Editorial Rodhas S.A.C, Lima, 2007.
31. REYNA ALFARO, Luis. *La terminación anticipada en el Código Procesal Penal*. Jurista Editores, Primera Edición, Lima – Perú, 2009.
32. REYNA ALFARO, Luis. *La terminación anticipada en el Código Procesal Penal*. En: Gaceta Jurídica, Segunda Edición, Lima – Perú, 2014.
33. ROJAS VARGAS, Fidel. *Síntesis y estudio preliminar del Código Procesal Penal Peruano de 2004*. En: Código Procesal Penal, Jurista, Lima, 2004.
34. RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. *La justicia penal negociada. Experiencias de Derecho comparado*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997.
35. ROXIN, Claus; ARZT, Gunther y TIEDEMANN, Klaus. *Introducción al derecho penal y al derecho procesal penal*. Traducido por Arroyo Zapatero, Luis y Gómez Colomer, Juan-Luis, Editorial Ariel, Barcelona, 1989.
36. ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary. *Administración*. Editorial PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.

37. SALAS BETETA, Christian. *El Proceso Penal Común*. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, Junio 2011.
38. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. *Manual de Derecho Procesal Penal*. Editorial IDEMSA, Lima, 2004.
39. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. *El nuevo proceso penal*. Editorial IDEMSA, Lima, 2009.
40. SAN MARTÍN CASTRO, César. *Derecho Procesal Penal*. Volumen II, Grijley EIRL, Segunda Edición, Lima 2006.
41. SCOTT, Robert. E. y STUNTZ, William J. *Sistema Penal Acusatorio de Estados Unidos*. Editorial Legis, Colombia, 2006. *entarios al nuevo Código Procesal Penal*. Grijley, Lima, 2004.
42. TALAVERA ELGUERA, Pablo. *Juicio oral y actividad probatoria en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004*. En: La Actividad Probatoria en el Nuevo Código Procesal Penal. Colección Jurídica Procesal – Tomo 3, Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 2007.
43. VEGA BILLAN, Rodolfo. *Derecho Procesal Penal explicado con sencillez*. Gaceta Jurídica, Lima, 2003.
44. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; SCOLAR, Alejandro y ALAGIA, Alejandro. *Derecho Penal: Parte General*. Ediar, Buenos Aires, 2002.
45. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Ediar, Buenos Aires, 2005.

WEB

46. ACUERDO PLENARIO N° 05-2008/CJ-116

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/117bb8004075b9d0b63ff699ab657107/Acuerdo+Plenario+5-2008+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=117bb8004075b9d0b63ff699ab657107>

47. ACUERDO PLENARIO N° 05-2009/CJ-116

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8246b4004075b97fb5e9f599ab657107/ACUERDO_PLENARIO_05-2009_CJ116_301209.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8246b4004075b97fb5e9f599ab657107

48. AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. *Estructura del Proceso Penal Acusatorio*. Fiscalía General de la Nación – Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses, Bogotá, 2007.

<http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf>

49. BORASI, Iván. *Patteggiamento*. Publicado en ALTALEX el 25 de octubre de 2013.

<http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/10/25/patteggiamento>

50. COLPAERT ROBLES, Reymer Juan. *El Principio de Oportunidad en el Nuevo Código Procesal Penal*.

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20110807_01.pdf

51. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. *Criterios de Oportunidad y procesos especiales*.

http://www.mpfh.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2064_3_salidas_alternativas_y_celeridad_procesal.pdf

52. CHUNGA HIDALGO, Laurence. *El Derecho al Juez Imparcial y el conocimiento previo del thema decidendi como causal de inhibición*.

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140908_02.pdf

53. DEL MORAL GARCIA, Antonio. *La Conformidad en el Proceso Penal. Reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento español.*
<http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/conformidad-proceso-penal.pdf>

54. DEL RIO FERRETTI, Carlos. *El principio de consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento jurisdiccional – Aclaraciones conceptuales necesarias.*
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177014517007>

55. ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”. *Preacuerdos y Negociaciones en el proceso Penal Acusatorio Colombiano. Documento de Trabajo.* IV Curso de Formación Judicial Inicial para magistrados, Jueces y Juezas de la República. Colombia, 2009.
<http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaciones.pdf>

56. FERNÁNDEZ MUÑOZ, Karin. *La Conformidad: Una Aproximación a su Definición en el Nuevo Código Procesal Penal. Derecho y Sociedad 34. Asociación Civil.*
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13342/13969>

57. GARCIA, Héctor Omar. *Eficacia, efectividad y eficiencia de las normas que regulan el ejercicio del derecho de huelga y sus métodos de composición. Apuntes críticos.*
<http://relaciondetrabajo.com/campus/ensayos%20y%20apuntes%20de%20clase/Eficacia,%20efectividad%20y%20eficiencia%20de%20las%20normas%20sobre%20huelga.pdf>

58. JEAMMAUD, Antoine. *Entorno al problema de la efectividad del derecho.*
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/critica/cont/1/teo/teo1.pdf>

59. MARTINEZ GAMBOA, René Joaquín. *Vías alternativas a la solución de conflictos en el proceso penal*. Cuba.2011
<http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/1005/indice.htm>.

60. MINISTERIO PÚBLICO. *Anuario Estadístico 2014*.
<http://portal.mpfm.gob.pe/estadistica/ANUARIOESTADISTICO2014FINAL.pdf>

61. MOLINA LOPEZ, Ricardo. *El debido proceso penal en Colombia y España*. 2010. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ISSN 0120-3886, N°. 112, pp 15-42.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3418859>

62. PRADA SALDARRIAGA, Víctor. *El Proceso de Seguridad en el Nuevo Código procesal Penal de 2004*.
<http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/procesodeseguridad.pdf>

63. REYNA ALFARO, Luis. *Los Procesos Penales conforme el Código Procesal Penal de 2004 (en implementación)*. En: Gaceta Jurídica. 2006.
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bccb918043eb791199ccdb4684c6236a/Lecturas+Parte+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bccb918043eb791199ccdb4684c6236a>

64. RIOJA BERMUDEZ, Alexander. *Celeridad Procesal y actuación de la sentencia impugnada en el Proceso Civil Peruano*.
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2008/12/01/celeridad-procesal-y-actuacion-de-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civil-peruano/>

65. SALAS ARENAS, Jorge Luis. *Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N° 1194*. En: Revista Ius in Frangenti – Revista Informativa de Actualidad

Jurídica Año 1 – N° 1, Marzo 2016, Coordinadora Nacional de
 Flagrancia del Poder Judicial.

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/lusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4>

66. SANDEFUR, Timothy. *In defense of plea bargaining*. En: Regulation, Vol. 26. N° 03, 2003
<http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2003/7/v26n3-8.pdf>
67. VIGIL LEVI, Jacobo. *La institución de la conformidad en el proceso penal español*.
<http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/Jacobo-Vigil-Levi-Lainstituci%C3%B3n-de-la-conformidad-en-el-proceso-penalespa%C3%B1ol.pdf>

X. ANEXOS

- Lista de los Expedientes que concluyeron con Sentencia de Terminación Anticipada y Ubicación Actual de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Periodo 2011-2015).
- Lista de Audiencias de Terminación Anticipada concluidas de los Juzgados Especializados en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Periodo 2011-2015).
- Lista de casos totales de Procesos Inmediatos resueltos mediante Terminación Anticipada registradas en los Juzgados Especializados en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Periodo 2011-2015).

- Lista de casos totales de Procesos Inmediatos resueltos sin Terminación Anticipada registradas en los Juzgados Especializados en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Periodo 2011-2015).
- Lista de los Operadores Jurídicos Entrevistados.
- Designación de los Jueces del Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, en mérito a la Resolución N° 109-2011-CSJLN/PJ del 24 de marzo de 2011.
- Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116.
- Matriz de Consistencia.

LISTADO DE EXPEDIENTES (SIN DUPLICADOS) QUE CONCLUYERON CON SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UBICACIÓN ACTUAL

N°	FECHA DE SENTENCIA	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE DE SENTENCIA	UBICACIÓN
1	19/02/2013 14:56	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	00636-2013-90-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
2	19/02/2013 15:00	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	00637-2013-95-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
3	19/02/2013 15:03	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	00686-2013-2-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
4	27/05/2014 09:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	00810-2014-22-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
5	12/05/2014 17:19	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	01596-2014-24-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
6	24/03/2014 16:43	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	01604-2014-92-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
7	21/05/2014 17:09	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	02220-2014-6-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
8	27/05/2014 08:39	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02242-2014-42-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
9	13/06/2014 16:49	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02325-2014-98-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
10	22/05/2014 08:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	02435-2014-92-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
11	10/10/2014 12:00	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02464-2014-6-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
12	27/05/2014 09:24	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02512-2014-64-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
13	27/05/2014 08:47	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02513-2014-81-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
14	26/04/2013 14:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	02660-2013-21-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
15	19/06/2014 19:32	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03175-2014-94-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
16	09/07/2014 18:27	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03195-2014-36-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
17	13/08/2014 19:52	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03197-2014-41-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
18	09/07/2014 18:13	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03283-2014-54-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
19	13/11/2014 15:35	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03287-2014-55-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
20	13/11/2012 17:13	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03289-2012-96-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
21	15/07/2014 13:21	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03470-2014-17-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
22	09/07/2014 18:19	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03511-2014-95-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
23	02/07/2014 14:06	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03560-2014-45-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
24	07/12/2012 16:38	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03580-2012-50-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
25	07/12/2012 16:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03582-2012-74-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
26	07/12/2012 16:41	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03587-2012-44-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
27	13/06/2012 09:21	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	03631-2012-87-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
28	15/07/2014 13:01	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03640-2014-56-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
29	03/07/2014 08:30	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03761-2014-53-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
30	23/06/2014 20:27	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	03762-2014-16-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
31	25/07/2014 17:14	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04110-2014-66-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
32	25/07/2014 17:38	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04111-2014-38-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
33	27/08/2014 14:42	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04113-2014-3-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
34	07/12/2012 16:39	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04170-2012-99-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
35	23/07/2014 11:06	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04192-2014-91-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
36	24/07/2014 20:27	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04206-2014-39-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
37	11/09/2014 14:41	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04208-2014-73-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
38	06/08/2014 11:46	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04209-2014-82-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
39	25/07/2014 18:10	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04210-2014-18-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
40	10/09/2014 10:39	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04211-2014-15-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
41	07/12/2012 16:35	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04272-2012-35-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
42	20/06/2012 16:54	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04278-2012-66-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
43	23/07/2014 12:53	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04291-2014-45-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
44	25/07/2014 18:45	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04309-2014-12-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
45	24/07/2014 20:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04318-2014-48-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
46	23/07/2014 12:11	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04361-2014-73-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
47	10/12/2012 09:21	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04437-2012-83-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
48	20/06/2012 17:18	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04466-2012-14-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
49	22/08/2014 18:08	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04554-2014-25-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
50	26/08/2014 19:57	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04555-2014-6-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
51	13/08/2014 20:30	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04565-2014-37-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
52	12/08/2014 10:23	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04595-2014-82-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
53	18/08/2014 18:34	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04597-2014-56-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
54	14/08/2014 11:56	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04663-2014-84-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
55	25/08/2014 13:39	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04665-2014-9-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
56	12/08/2014 09:48	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04666-2014-55-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
57	14/08/2014 12:58	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04669-2014-22-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
58	14/08/2014 12:38	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04671-2014-7-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
59	22/09/2014 15:49	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04684-2014-46-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA

60	11/11/2014 09:08	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04686-2014-73-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
61	25/08/2014 08:27	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04688-2014-60-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
62	28/08/2014 10:15	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04699-2014-29-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
63	18/08/2014 18:46	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04701-2014-56-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
64	18/08/2014 18:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04703-2014-86-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
65	14/08/2014 15:17	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04775-2014-10-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
66	26/08/2014 16:24	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04776-2014-16-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
67	14/08/2014 17:42	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04779-2014-9-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
68	22/09/2015 19:24	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04833-2015-82-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
69	26/08/2015 16:41	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04957-2015-22-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
70	22/07/2013 16:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04965-2013-13-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
71	25/08/2014 09:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04980-2014-43-0901-JR-PE-02	OF. DE CONTROL DE FIRMAS
72	26/08/2014 18:42	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04997-2014-53-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
73	25/08/2014 08:35	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04999-2014-51-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
74	29/08/2014 09:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05066-2014-57-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
75	02/09/2014 11:34	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05068-2014-11-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
76	11/08/2014 13:30	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05071-2014-41-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
77	25/08/2014 12:17	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05072-2014-50-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
78	23/09/2014 11:50	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05075-2014-43-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
79	20/12/2012 16:17	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05085-2012-88-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
80	17/07/2012 16:17	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05091-2012-67-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
81	31/08/2015 09:29	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05111-2015-97-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
82	26/08/2015 16:43	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05115-2015-22-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
83	15/09/2015 17:24	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05152-2015-46-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
84	31/08/2015 16:32	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05153-2015-99-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
85	22/08/2014 16:07	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05183-2014-7-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
86	18/08/2014 19:13	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05185-2014-35-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
87	04/09/2014 09:34	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05186-2014-92-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
88	18/08/2014 19:33	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05188-2014-16-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
89	15/09/2015 18:38	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05211-2015-12-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
90	29/08/2014 10:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05229-2014-55-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
91	26/08/2014 17:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05233-2014-52-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
92	28/08/2014 19:43	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05234-2014-1-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. JUDICIAL
93	28/08/2014 11:34	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05237-2014-20-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
94	03/10/2014 18:40	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05240-2014-82-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
95	07/08/2014 15:49	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05242-2014-41-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
96	01/09/2015 15:09	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05247-2015-34-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
97	22/08/2014 16:10	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05285-2014-32-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
98	31/08/2015 09:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05293-2015-33-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
99	07/08/2014 15:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05314-2014-68-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
100	28/08/2014 11:46	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05315-2014-48-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
101	28/08/2014 12:17	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05316-2014-33-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
102	31/08/2015 09:33	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05467-2015-74-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
103	17/09/2015 09:28	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05468-2015-7-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
104	01/09/2014 09:38	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05480-2014-51-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
105	26/08/2014 18:04	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05481-2014-7-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
106	29/08/2014 16:13	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05482-2014-41-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
107	29/08/2014 20:54	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05483-2014-72-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
108	29/08/2014 16:15	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05485-2014-39-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
109	29/08/2014 20:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05488-2014-52-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
110	25/08/2014 11:10	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05508-2014-14-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
111	25/08/2014 16:03	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05540-2014-16-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
112	16/09/2014 19:14	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05541-2014-96-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
113	18/09/2014 11:37	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05543-2014-36-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
114	16/09/2015 17:35	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05549-2015-83-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
115	28/08/2014 19:37	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05614-2014-65-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
116	28/08/2014 19:52	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05616-2014-9-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
117	25/08/2014 15:46	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05617-2014-27-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
118	16/09/2014 19:24	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05684-2014-38-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
119	28/08/2014 16:28	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05685-2014-11-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
120	28/08/2014 15:34	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05686-2014-13-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
121	19/09/2014 08:09	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05690-2014-58-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
122	16/09/2014 15:30	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05691-2014-45-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL

123	29/08/2014 16:17	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05692-2014-52-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
124	05/09/2014 16:46	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05811-2014-72-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
125	15/09/2015 18:32	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05877-2015-60-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
126	05/09/2014 16:55	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05915-2014-91-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
127	10/09/2014 11:16	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05964-2014-87-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
128	30/09/2015 12:45	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05954-2015-44-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
129	09/09/2014 15:30	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05965-2014-64-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
130	22/09/2015 19:29	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	05966-2015-26-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
131	10/09/2014 10:19	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05967-2014-48-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
132	23/09/2015 11:10	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06025-2015-15-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
133	27/11/2015 08:40	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06049-2015-71-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
134	23/09/2014 12:47	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	05191-2014-51-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
135	20/12/2012 15:57	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06236-2012-6-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
136	22/09/2015 19:19	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06241-2015-68-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
137	17/10/2014 13:09	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06262-2014-55-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
138	09/09/2014 11:48	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06279-2014-90-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
139	30/09/2014 17:52	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06281-2014-60-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
140	16/09/2014 11:24	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06283-2014-98-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
141	15/10/2015 17:00	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06354-2015-1-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
142	07/10/2014 21:19	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06371-2014-52-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
143	16/09/2014 19:08	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06387-2014-74-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
144	14/10/2015 08:41	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06387-2015-93-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
145	09/09/2014 11:09	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06390-2014-2-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
146	16/09/2014 19:19	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06391-2014-85-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
147	09/09/2014 11:21	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06392-2014-71-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
148	09/09/2014 16:00	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06405-2014-87-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
149	30/09/2015 12:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06410-2015-81-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
150	15/10/2015 17:08	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06411-2015-96-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
151	11/09/2014 09:43	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06507-2014-60-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
152	27/10/2014 09:11	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06510-2014-70-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
153	30/09/2014 18:00	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06523-2014-94-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
154	03/10/2014 17:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06524-2014-57-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
155	07/10/2014 21:41	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06525-2014-90-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
156	24/09/2014 12:43	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06526-2014-68-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
157	15/10/2015 17:50	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06552-2015-89-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
158	03/09/2012 08:34	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06601-2012-15-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
159	30/09/2014 17:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06761-2014-62-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
160	22/10/2014 08:47	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06762-2014-4-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
161	13/11/2014 15:23	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06830-2014-73-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
162	10/10/2014 09:51	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06832-2014-48-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
163	30/09/2014 17:36	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06856-2014-33-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
164	20/11/2015 12:55	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06860-2015-81-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
165	27/08/2012 08:59	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06907-2012-41-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
166	15/10/2015 17:17	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06946-2015-56-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
167	30/09/2014 17:45	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	06969-2014-5-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. JUDICIAL
168	03/10/2014 17:14	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	06970-2014-21-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
169	27/10/2014 09:16	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07019-2014-42-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
170	10/10/2014 10:51	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07020-2014-66-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
171	13/11/2014 15:40	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07022-2014-40-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
172	26/11/2014 16:37	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07045-2014-54-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
173	27/10/2014 09:21	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07046-2014-57-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
174	26/11/2014 18:07	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07175-2014-47-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. JUDICIAL
175	22/10/2014 08:58	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07183-2014-79-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
176	11/11/2014 08:59	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07206-2014-9-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
177	17/10/2014 11:59	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07208-2014-13-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
178	20/10/2015 16:01	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07308-2015-23-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
179	22/10/2014 12:37	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07319-2014-20-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
180	17/10/2014 11:49	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07337-2014-76-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
181	30/10/2014 16:44	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07338-2014-19-0901-JR-PE-02	MPU / CDG
182	20/10/2014 18:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07358-2014-69-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
183	26/11/2014 19:07	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07363-2014-24-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
184	21/11/2014 10:36	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07390-2014-81-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. JUDICIAL
185	07/12/2012 15:14	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07478-2012-53-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA

186	22/10/2014 09:56	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07535-2014-67-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
187	13/11/2014 15:29	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07538-2014-26-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
188	03/11/2014 15:42	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07540-2014-15-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
189	22/10/2014 10:02	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07541-2014-5-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
190	10/12/2015 09:03	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07544-2015-57-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
191	03/11/2014 12:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07635-2014-51-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
192	03/11/2014 11:43	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07636-2014-51-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
193	30/10/2014 16:47	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07637-2014-66-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
194	02/12/2014 10:27	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07638-2014-23-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
195	11/11/2014 08:47	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07639-2014-18-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
196	12/11/2014 12:15	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07640-2014-59-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
197	31/12/2014 11:08	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07641-2014-11-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
198	14/11/2014 16:51	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07642-2014-50-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
199	18/10/2013 13:07	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07650-2013-45-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
200	18/12/2013 16:55	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07651-2013-8-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
201	11/01/2013 15:46	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07654-2012-61-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
202	11/11/2014 14:59	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07666-2014-16-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
203	21/11/2014 10:45	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07763-2014-38-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
204	23/12/2015 10:35	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07774-2015-71-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
205	20/12/2012 16:22	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07995-2012-31-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
206	20/12/2012 16:29	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07997-2012-56-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
207	15/12/2015 19:05	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	08072-2015-69-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
208	20/12/2012 16:31	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	08238-2012-59-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
209	28/11/2013 17:37	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	08763-2013-49-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
210	15/12/2015 18:55	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	08804-2015-74-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
211	21/12/2015 13:07	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	08899-2015-15-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
212	15/12/2015 19:11	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	08910-2015-28-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
213	22/12/2015 08:48	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09315-2015-13-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
214	22/12/2015 12:37	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09333-2015-62-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
215	29/12/2015 13:07	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09896-2015-84-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
216	29/12/2015 12:59	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09901-2015-9-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
217	27/12/2012 14:56	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09927-2012-66-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
218	14/12/2012 11:54	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	09928-2012-16-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
219	09/01/2013 11:34	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09929-2012-76-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
220	09/01/2013 11:29	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09930-2012-21-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
221	16/01/2013 16:03	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10023-2012-15-0901-JR-PE-01	ARCHIVO (ENVIADO)
222	18/12/2015 12:30	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10321-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
223	18/12/2015 12:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10322-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
224	18/01/2013 17:04	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	10968-2012-36-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
225	12/03/2013 12:07	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	00634-2013-15-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
226	12/03/2013 12:05	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	00638-2013-33-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
227	06/12/2012 08:25	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	01057-2012-18-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
228	07/12/2012 16:13	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	01059-2012-90-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
229	17/10/2014 11:07	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04307-2014-0-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
230	27/12/2012 16:54	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04494-2011-66-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
231	22/06/2012 16:55	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	04567-2011-88-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
232	12/09/2014 17:12	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	04777-2014-43-0901-JR-PE-02	POOL ASIST. DE AUDIO
233	09/12/2015 13:21	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07260-2015-53-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
234	27/10/2014 09:05	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07360-2014-90-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
235	07/12/2012 16:09	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	07386-2012-42-0901-JR-PE-02	ARCHIVO (ENVIADO)
236	30/09/2013 18:04	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	07593-2013-60-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
237	09/12/2015 13:17	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	08074-2015-61-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. JUDICIAL
238	07/12/2012 13:46	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	09862-2012-68-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
239	04/12/2015 18:57	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09936-2015-0-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
240	04/12/2015 18:50	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	09939-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
241	03/05/2013 10:36	Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)	10022-2012-16-0901-JR-PE-02	ESPECIALISTA
242	18/12/2015 15:31	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10308-2015-0-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
243	18/12/2015 15:36	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10309-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
244	18/12/2015 15:39	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10310-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
245	18/12/2015 12:06	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10320-2015-0-0901-JR-PE-01	POOL ASIST. DE AUDIO
246	18/12/2015 09:16	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10350-2015-0-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
247	31/12/2015 13:33	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10502-2015-0-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA
248	31/12/2015 20:20	1° Juzgado de la Investigación Preparatoria	10503-2015-0-0901-JR-PE-01	ESPECIALISTA

EXPEDIENTE DE AUDIENCIA	FECHA DE AUDIENCIA	DEPENDENCIA	AÑO AUDIENCIA	MES DE AUDIENCIA	Nº
00636-2013-90-0901-JR-PE-01	14/02/2013	1º JIP	2013	2	1
00637-2013-95-0901-JR-PE-01	14/02/2013	1º JIP	2013	2	2
00686-2013-2-0901-JR-PE-01	14/02/2013	1º JIP	2013	2	3
00810-2014-22-0901-JR-PE-04	23/05/2014	JIP (5º Penal)	2014	5	4
01596-2014-24-0901-JR-PE-01	25/03/2014	1º JIP	2014	3	5
01604-2014-92-0901-JR-PE-04	24/03/2014	JIP (5º Penal)	2014	3	6
02220-2014-6-0901-JR-PE-01	19/05/2014	1º JIP	2014	5	7
02242-2014-42-0901-JR-PE-04	23/05/2014	JIP (5º Penal)	2014	5	8
02325-2014-98-0901-JR-PE-04	11/06/2014	JIP (5º Penal)	2014	6	9
02435-2014-92-0901-JR-PE-01	19/05/2014	1º JIP	2014	5	10
02464-2014-6-0901-JR-PE-04	07/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	11
02512-2014-64-0901-JR-PE-04	23/05/2014	JIP (5º Penal)	2014	5	12
02513-2014-81-0901-JR-PE-04	23/05/2014	JIP (5º Penal)	2014	5	13
02660-2013-21-0901-JR-PE-04	26/04/2013	JIP (5º Penal)	2013	4	14
03175-2014-94-0901-JR-PE-01	17/06/2014	1º JIP	2014	6	15
03195-2014-36-0901-JR-PE-04	09/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	16
03197-2014-41-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	17
03283-2014-54-0901-JR-PE-04	09/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	18
03287-2014-55-0901-JR-PE-01	04/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	19
03289-2012-96-0901-JR-PE-01	10/05/2012	1º JIP	2012	5	20
03470-2014-17-0901-JR-PE-04	15/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	21
03511-2014-95-0901-JR-PE-04	09/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	22
03560-2014-45-0901-JR-PE-04	02/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	23
03580-2012-50-0901-JR-PE-01	23/05/2012	1º JIP	2012	5	24
03582-2012-74-0901-JR-PE-01	23/05/2012	1º JIP	2012	5	25
03587-2012-44-0901-JR-PE-01	23/05/2012	1º JIP	2012	5	26
03631-2012-87-0901-JR-PE-01	09/05/2012	1º JIP	2012	5	27
03640-2014-56-0901-JR-PE-04	15/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	28
03761-2014-53-0901-JR-PE-04	02/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	29
03762-2014-16-0901-JR-PE-04	20/06/2014	JIP (5º Penal)	2014	6	30
04110-2014-66-0901-JR-PE-04	21/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	31
04111-2014-38-0901-JR-PE-04	21/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	32
04113-2014-3-0901-JR-PE-01	27/08/2014	1º JIP	2014	8	33
04170-2012-99-0901-JR-PE-01	23/05/2012	1º JIP	2012	5	34
04192-2014-91-0901-JR-PE-01	23/07/2014	1º JIP	2014	7	35
04206-2014-39-0901-JR-PE-01	24/07/2014	1º JIP	2014	7	36
04208-2014-73-0901-JR-PE-04	11/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	37
04209-2014-82-0901-JR-PE-01	06/08/2014	1º JIP	2014	8	38
04210-2014-18-0901-JR-PE-04	21/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	39
04211-2014-15-0901-JR-PE-04	09/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	40
04272-2012-35-0901-JR-PE-01	12/06/2012	1º JIP	2012	6	41
04278-2012-66-0901-JR-PE-01	12/06/2012	1º JIP	2012	6	42
04291-2014-45-0901-JR-PE-01	23/07/2014	1º JIP	2014	7	43
04309-2014-12-0901-JR-PE-04	21/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	44
04318-2014-48-0901-JR-PE-01	24/07/2014	1º JIP	2014	7	45
04361-2014-73-0901-JR-PE-01	23/07/2014	1º JIP	2014	7	46
04437-2012-83-0901-JR-PE-01	13/06/2012	1º JIP	2012	6	47
04466-2012-14-0901-JR-PE-01	14/06/2012	1º JIP	2012	6	48
04554-2014-25-0901-JR-PE-04	22/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	49

04595-2014-82-0901-JR-PE-01	12/08/2014	1ª JIP	2014	8	52
04597-2014-56-0901-JR-PE-04	18/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	53
04663-2014-84-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	54
04665-2014-9-0901-JR-PE-01	25/08/2014	1ª JIP	2014	8	55
04666-2014-55-0901-JR-PE-01	12/08/2014	1ª JIP	2014	8	56
04669-2014-22-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	57
04671-2014-7-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	58
04684-2014-46-0901-JR-PE-01	18/09/2014	1ª JIP	2014	9	59
04686-2014-73-0901-JR-PE-01	06/11/2014	1ª JIP	2014	11	60
04688-2014-60-0901-JR-PE-04	22/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	61
04699-2014-29-0901-JR-PE-01	28/08/2014	1ª JIP	2014	8	62
04701-2014-56-0901-JR-PE-04	18/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	63
04703-2014-86-0901-JR-PE-04	18/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	64
04775-2014-19-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	65
04776-2014-16-0901-JR-PE-01	26/08/2014	1ª JIP	2014	8	66
04779-2014-9-0901-JR-PE-04	13/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	67
04833-2015-82-0901-JR-PE-04	22/09/2015	JIP (5ª Penal)	2015	9	68
04957-2015-22-0901-JR-PE-01	24/08/2015	1ª JIP	2015	8	69
04965-2013-13-0901-JR-PE-04	19/07/2013	JIP (5ª Penal)	2013	7	70
04980-2014-43-0901-JR-PE-04	22/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	71
04997-2014-53-0901-JR-PE-01	14/08/2014	1ª JIP	2014	8	72
04999-2014-51-0901-JR-PE-04	22/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	73
05066-2014-57-0901-JR-PE-01	29/08/2014	1ª JIP	2014	8	74
05068-2014-11-0901-JR-PE-01	02/09/2014	1ª JIP	2014	9	75
05071-2014-41-0901-JR-PE-04	11/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	76
05072-2014-50-0901-JR-PE-04	25/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	77
05075-2014-43-0901-JR-PE-01	23/09/2014	1ª JIP	2014	9	78
05085-2012-88-0901-JR-PE-01	10/07/2012	1ª JIP	2012	7	79
05091-2012-67-0901-JR-PE-01	16/07/2012	1ª JIP	2012	7	80
05111-2015-07-0901-JR-PE-04	25/08/2015	JIP (5ª Penal)	2015	8	81
05115-2015-22-0901-JR-PE-01	24/08/2015	1ª JIP	2015	8	82
05152-2015-46-0901-JR-PE-01	14/09/2015	1ª JIP	2015	9	83
05153-2015-99-0901-JR-PE-01	31/08/2015	1ª JIP	2015	8	84
05183-2014-7-0901-JR-PE-01	21/08/2014	1ª JIP	2014	8	85
05185-2014-35-0901-JR-PE-04	18/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	86
05186-2014-92-0901-JR-PE-01	04/09/2014	1ª JIP	2014	9	87
05188-2014-16-0901-JR-PE-04	19/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	88
05211-2015-12-0901-JR-PE-04	15/09/2015	JIP (5ª Penal)	2015	9	89
05229-2014-55-0901-JR-PE-01	29/08/2014	1ª JIP	2014	8	90
05233-2014-52-0901-JR-PE-04	26/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	91
05234-2014-1-0901-JR-PE-04	28/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	92
05237-2014-20-0901-JR-PE-01	28/08/2014	1ª JIP	2014	8	93
05240-2014-82-0901-JR-PE-01	02/10/2014	1ª JIP	2014	10	94
05242-2014-41-0901-JR-PE-04	07/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	95
05247-2015-34-0901-JR-PE-04	01/09/2015	JIP (5ª Penal)	2015	9	96
05285-2014-32-0901-JR-PE-01	21/08/2014	1ª JIP	2014	8	97
05293-2015-33-0901-JR-PE-04	25/08/2015	JIP (5ª Penal)	2015	8	98
05314-2014-68-0901-JR-PE-04	07/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	99
05315-2014-48-0901-JR-PE-04	28/08/2014	JIP (5ª Penal)	2014	8	100
05316-2014-33-0901-JR-PE-01	28/08/2014	1ª JIP	2014	8	101
05467-2015-74-0901-JR-PE-04	25/08/2015	JIP (5ª Penal)	2015	8	102

05481-2014-7-0901-JR-PE-04	26/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	105
05482-2014-41-0901-JR-PE-01	29/08/2014	1º JIP	2014	8	106
05483-2014-72-0901-JR-PE-04	29/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	107
05485-2014-39-0901-JR-PE-01	29/08/2014	1º JIP	2014	8	108
05488-2014-52-0901-JR-PE-04	29/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	109
05508-2014-14-0901-JR-PE-04	22/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	110
05540-2014-16-0901-JR-PE-01	25/08/2014	1º JIP	2014	8	111
05541-2014-96-0901-JR-PE-04	16/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	112
05543-2014-36-0901-JR-PE-01	18/09/2014	1º JIP	2014	9	113
05549-2015-83-0901-JR-PE-01	14/09/2015	1º JIP	2015	9	114
05614-2014-65-0901-JR-PE-04	28/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	115
05616-2014-9-0901-JR-PE-04	28/08/2014	JIP (5º Penal)	2014	8	116
05617-2014-27-0901-JR-PE-01	25/08/2014	1º JIP	2014	8	117
05684-2014-38-0901-JR-PE-04	16/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	118
05685-2014-11-0901-JR-PE-01	28/08/2014	1º JIP	2014	8	119
05686-2014-13-0901-JR-PE-01	28/08/2014	1º JIP	2014	8	120
05690-2014-58-0901-JR-PE-04	18/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	121
05691-2014-45-0901-JR-PE-01	16/09/2014	1º JIP	2014	9	122
05692-2014-52-0901-JR-PE-01	29/08/2014	1º JIP	2014	8	123
05811-2014-72-0901-JR-PE-04	05/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	124
05877-2015-60-0901-JR-PE-04	15/09/2015	JIP (5º Penal)	2015	9	125
05915-2014-91-0901-JR-PE-04	05/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	126
05964-2014-87-0901-JR-PE-01	10/09/2014	1º JIP	2014	9	127
05964-2015-44-0901-JR-PE-01	28/09/2015	1º JIP	2015	9	128
05965-2014-64-0901-JR-PE-04	09/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	129
05966-2015-26-0901-JR-PE-04	22/09/2015	JIP (5º Penal)	2015	9	130
05967-2014-48-0901-JR-PE-01	10/09/2014	1º JIP	2014	9	131
06025-2015-15-0901-JR-PE-01	21/09/2015	1º JIP	2015	9	132
06049-2015-71-0901-JR-PE-01	12/10/2015	1º JIP	2015	10	133
06191-2014-51-0901-JR-PE-01	23/09/2014	1º JIP	2014	9	134
06236-2012-6-0901-JR-PE-01	01/08/2012	1º JIP	2012	8	135
06241-2015-68-0901-JR-PE-04	22/09/2015	JIP (5º Penal)	2015	9	136
06262-2014-55-0901-JR-PE-04	17/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	137
06279-2014-90-0901-JR-PE-01	09/09/2014	1º JIP	2014	9	138
06281-2014-60-0901-JR-PE-04	30/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	139
06283-2014-98-0901-JR-PE-01	16/09/2014	1º JIP	2014	9	140
06354-2015-1-0901-JR-PE-04	13/10/2015	JIP (5º Penal)	2015	10	141
06371-2014-52-0901-JR-PE-04	07/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	142
06387-2014-74-0901-JR-PE-04	16/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	143
06387-2015-93-0901-JR-PE-01	12/10/2015	1º JIP	2015	10	144
06390-2014-2-0901-JR-PE-01	09/09/2014	1º JIP	2014	9	145
06391-2014-85-0901-JR-PE-04	16/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	146
06392-2014-71-0901-JR-PE-01	09/09/2014	1º JIP	2014	9	147
06405-2014-87-0901-JR-PE-04	09/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	148
06410-2015-81-0901-JR-PE-01	28/09/2015	1º JIP	2015	9	149
06411-2015-96-0901-JR-PE-04	13/10/2015	JIP (5º Penal)	2015	10	150
06507-2014-60-0901-JR-PE-01	11/09/2014	1º JIP	2014	9	151
06510-2014-70-0901-JR-PE-01	09/10/2014	1º JIP	2014	10	152
06523-2014-94-0901-JR-PE-04	30/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	153
06524-2014-57-0901-JR-PE-01	30/09/2014	1º JIP	2014	9	154
06525-2014-90-0901-JR-PE-04	07/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	155

06601-2012-15-0901-JR-PE-04	29/08/2012	JIP (5º Penal)	2012	8	158
06761-2014-62-0901-JR-PE-04	30/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	159
06762-2014-4-0901-JR-PE-01	16/10/2014	1º JIP	2014	10	160
06830-2014-73-0901-JR-PE-04	11/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	161
06832-2014-48-0901-JR-PE-04	07/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	162
06856-2014-33-0901-JR-PE-04	30/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	163
06860-2015-81-0901-JR-PE-01	12/10/2015	1º JIP	2015	10	164
06907-2012-41-0901-JR-PE-01	22/08/2012	1º JIP	2012	8	165
06946-2015-56-0901-JR-PE-04	13/10/2015	JIP (5º Penal)	2015	10	166
06969-2014-5-0901-JR-PE-04	30/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	167
06970-2014-21-0901-JR-PE-01	25/09/2014	1º JIP	2014	9	168
07019-2014-42-0901-JR-PE-01	09/10/2014	1º JIP	2014	10	169
07020-2014-66-0901-JR-PE-04	07/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	170
07022-2014-40-0901-JR-PE-04	04/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	171
07045-2014-54-0901-JR-PE-04	25/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	172
07046-2014-57-0901-JR-PE-01	09/10/2014	1º JIP	2014	10	173
07175-2014-47-0901-JR-PE-04	25/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	174
07183-2014-79-0901-JR-PE-01	16/10/2014	1º JIP	2014	10	175
07206-2014-9-0901-JR-PE-01	06/11/2014	1º JIP	2014	11	176
07208-2014-13-0901-JR-PE-04	17/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	177
07308-2015-23-0901-JR-PE-04	20/10/2015	JIP (5º Penal)	2015	10	178
07319-2014-20-0901-JR-PE-01	07/10/2014	1º JIP	2014	10	179
07337-2014-76-0901-JR-PE-04	17/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	180
07338-2014-19-0901-JR-PE-04	28/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	181
07358-2014-69-0901-JR-PE-01	16/10/2014	1º JIP	2014	10	182
07363-2014-24-0901-JR-PE-04	25/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	183
07390-2014-81-0901-JR-PE-04	18/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	184
07478-2012-53-0901-JR-PE-04	14/09/2012	JIP (5º Penal)	2012	9	185
07535-2014-67-0901-JR-PE-04	21/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	186
07538-2014-26-0901-JR-PE-04	04/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	187
07540-2014-15-0901-JR-PE-01	21/10/2014	1º JIP	2014	10	188
07541-2014-5-0901-JR-PE-04	21/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	189
07544-2015-57-0901-JR-PE-01	19/10/2015	1º JIP	2015	10	190
07635-2014-51-0901-JR-PE-01	21/10/2014	1º JIP	2014	10	191
07636-2014-51-0901-JR-PE-01	03/11/2014	1º JIP	2014	11	192
07637-2014-66-0901-JR-PE-04	28/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	193
07638-2014-23-0901-JR-PE-04	02/12/2014	JIP (5º Penal)	2014	12	194
07639-2014-18-0901-JR-PE-01	04/11/2014	1º JIP	2014	11	195
07640-2014-59-0901-JR-PE-04	04/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	196
07641-2014-11-0901-JR-PE-01	27/11/2014	1º JIP	2014	11	197
07642-2014-50-0901-JR-PE-04	04/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	198
07650-2013-45-0901-JR-PE-04	18/10/2013	JIP (5º Penal)	2013	10	199
07651-2013-8-0901-JR-PE-01	20/11/2013	1º JIP	2013	11	200
07654-2012-61-0901-JR-PE-04	11/01/2013	JIP (5º Penal)	2013	1	201
07666-2014-16-0901-JR-PE-01	06/11/2014	1º JIP	2014	11	202
07763-2014-38-0901-JR-PE-04	18/11/2014	JIP (5º Penal)	2014	11	203
07774-2015-71-0901-JR-PE-01	21/12/2015	1º JIP	2015	12	204
07995-2012-31-0901-JR-PE-01	12/10/2012	1º JIP	2012	10	205
07997-2012-56-0901-JR-PE-04	12/10/2012	JIP (5º Penal)	2012	10	206
08072-2015-69-0901-JR-PE-04	15/12/2015	JIP (5º Penal)	2015	12	207
08238-2012-59-0901-JR-PE-04	19/10/2012	JIP (5º Penal)	2012	10	208

08899-2015-15-0901-JR-PE-01	21/12/2015	1º JIP	2015	12	211
08910-2015-28-0901-JR-PE-04	15/12/2015	JIP (5º Penal)	2015	12	212
09315-2015-13-0901-JR-PE-01	21/12/2015	1º JIP	2015	12	213
09333-2015-62-0901-JR-PE-01	21/12/2015	1º JIP	2015	12	214
09896-2015-84-0901-JR-PE-01	28/12/2015	1º JIP	2015	12	215
09901-2015-9-0901-JR-PE-01	28/12/2015	1º JIP	2015	12	216
09927-2012-66-0901-JR-PE-01	27/12/2012	1º JIP	2012	12	217
09928-2012-16-0901-JR-PE-04	14/12/2012	JIP (5º Penal)	2012	12	218
09929-2012-76-0901-JR-PE-01	08/01/2013	1º JIP	2013	1	219
09930-2012-21-0901-JR-PE-01	08/01/2013	1º JIP	2013	1	220
10023-2012-15-0901-JR-PE-01	16/01/2013	1º JIP	2013	1	221
10321-2015-0-0901-JR-PE-01	15/12/2015	1º JIP	2015	12	222
10322-2015-0-0901-JR-PE-01	15/12/2015	1º JIP	2015	12	223
10968-2012-36-0901-JR-PE-04	18/01/2013	JIP (5º Penal)	2013	1	224
02301-2014-66-0901-JR-PE-01	04/06/2014	1º JIP	2014	6	225
02582-2014-90-0901-JR-PE-01	12/06/2014	1º JIP	2014	6	226
02613-2014-44-0901-JR-PE-01	30/06/2014	1º JIP	2014	6	227
02730-2014-80-0901-JR-PE-01	18/06/2014	1º JIP	2014	6	228
03196-2014-83-0901-JR-PE-01	18/06/2014	1º JIP	2014	6	229
03286-2014-86-0901-JR-PE-01	19/06/2014	1º JIP	2014	6	230
03380-2013-16-0901-JR-PE-01	12/06/2013	1º JIP	2013	6	231
03475-2012-88-0901-JR-PE-04	18/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	232
03476-2012-28-0901-JR-PE-04	18/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	233
03478-2012-45-0901-JR-PE-01	16/05/2012	1º JIP	2012	5	234
03512-2014-85-0901-JR-PE-01	19/06/2014	1º JIP	2014	6	235
03527-2014-6-0901-JR-PE-01	30/06/2014	1º JIP	2014	6	236
03578-2012-81-0901-JR-PE-04	18/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	237
03579-2012-15-0901-JR-PE-04	25/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	238
03581-2012-3-0901-JR-PE-04	25/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	239
03584-2012-93-0901-JR-PE-01	23/05/2012	1º JIP	2012	5	240
03585-2012-2-0901-JR-PE-04	25/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	241
03586-2012-36-0901-JR-PE-04	25/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	242
03603-2012-56-0901-JR-PE-04	24/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	243
03634-2012-22-0901-JR-PE-01	29/05/2012	1º JIP	2012	5	244
03636-2012-83-0901-JR-PE-04	24/05/2012	JIP (5º Penal)	2012	5	245
03756-2014-79-0901-JR-PE-01	23/06/2014	1º JIP	2014	6	246
03902-2014-5-0901-JR-PE-01	21/08/2014	1º JIP	2014	8	247
04071-2012-43-0901-JR-PE-04	14/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	248
04307-2014-13-0901-JR-PE-04	17/10/2014	JIP (5º Penal)	2014	10	249
04424-2012-63-0901-JR-PE-04	08/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	250
04428-2012-41-0901-JR-PE-04	08/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	251
04436-2012-69-0901-JR-PE-04	08/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	252
04467-2012-28-0901-JR-PE-04	14/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	253
04704-2014-86-0901-JR-PE-01	12/08/2014	1º JIP	2014	8	254
04752-2012-14-0901-JR-PE-04	19/06/2012	JIP (5º Penal)	2012	6	255
04978-2014-92-0901-JR-PE-01	14/08/2014	1º JIP	2014	8	256
04979-2014-58-0901-JR-PE-01	14/08/2014	1º JIP	2014	8	257
05083-2012-95-0901-JR-PE-04	05/07/2012	JIP (5º Penal)	2012	7	258
05084-2012-56-0901-JR-PE-01	11/07/2012	1º JIP	2012	7	259
05086-2012-4-0901-JR-PE-04	05/07/2012	JIP (5º Penal)	2012	7	260
05087-2012-64-0901-JR-PE-01	11/07/2012	1º JIP	2012	7	261

05092-2012-51-0901-JR-PE-04	05/07/2012	JIP (5º Penal)	2012	7	264
05249-2015-59-0901-JR-PE-01	14/12/2015	1º JIP	2015	12	265
05931-2012-56-0901-JR-PE-04	20/07/2012	JIP (5º Penal)	2012	7	266
06420-2013-10-0901-JR-PE-01	04/10/2013	1º JIP	2013	10	267
07042-2014-90-0901-JR-PE-01	09/10/2014	1º JIP	2014	10	268
07260-2015-0-0901-JR-PE-01	07/12/2015	1º JIP	2015	12	269
07318-2014-75-0901-JR-PE-01	16/10/2014	1º JIP	2014	10	270
07445-2014-37-0901-JR-PE-01	04/12/2014	1º JIP	2014	12	271
07446-2014-78-0901-JR-PE-01	26/03/2015	1º JIP	2015	3	272
07774-2015-0-0901-JR-PE-01	07/12/2015	1º JIP	2015	12	273
08074-2015-0-0901-JR-PE-01	07/12/2015	1º JIP	2015	12	274
08648-2013-35-0901-JR-PE-01	02/09/2014	1º JIP	2014	9	275
10307-2015-0-0901-JR-PE-01	12/12/2015	1º JIP	2015	12	276
00634-2013-15-0901-JR-PE-02	08/03/2013	JIP (5º Penal)	2013	3	277
00638-2013-33-0901-JR-PE-02	08/03/2013	JIP (5º Penal)	2013	3	278
01057-2012-18-0901-JR-PE-01	26/03/2012	1º JIP	2012	3	279
01059-2012-90-0901-JR-PE-01	21/03/2012	1º JIP	2012	3	280
04307-2014-0-0901-JR-PE-02	21/07/2014	JIP (5º Penal)	2014	7	281
04494-2011-66-0901-JR-PE-01	16/08/2011	1º JIP	2011	8	282
04567-2011-88-0901-JR-PE-01	18/06/2011	1º JIP	2011	6	283
04777-2014-43-0901-JR-PE-02	12/09/2014	JIP (5º Penal)	2014	9	284
07260-2015-53-0901-JR-PE-01	07/12/2015	1º JIP	2015	12	285
07360-2014-90-0901-JR-PE-01	09/10/2014	1º JIP	2014	10	286
07386-2012-42-0901-JR-PE-02	20/09/2012	JIP (5º Penal)	2012	9	287
07593-2013-60-0901-JR-PE-01	27/09/2013	1º JIP	2013	9	288
08074-2015-61-0901-JR-PE-01	07/12/2015	1º JIP	2015	12	289
09862-2012-68-0901-JR-PE-02	07/12/2012	JIP (5º Penal)	2012	12	290
09936-2015-0-0901-JR-PE-01	03/12/2015	1º JIP	2015	12	291
09939-2015-0-0901-JR-PE-01	03/12/2015	1º JIP	2015	12	292
10022-2012-16-0901-JR-PE-02	03/05/2013	JIP (5º Penal)	2013	5	293
10308-2015-0-0901-JR-PE-01	14/12/2015	1º JIP	2015	12	294
10309-2015-0-0901-JR-PE-01	14/12/2015	1º JIP	2015	12	295
10310-2015-0-0901-JR-PE-01	14/12/2015	1º JIP	2015	12	296
10320-2015-0-0901-JR-PE-01	15/12/2015	1º JIP	2015	12	297
10350-2015-0-0901-JR-PE-01	16/12/2015	1º JIP	2015	12	298
10502-2015-0-0901-JR-PE-01	31/12/2015	1º JIP	2015	12	299
10503-2015-0-0901-JR-PE-01	31/12/2015	1º JIP	2015	12	300

**CASOS TOTALES DE PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS MEDIANTE TERMINACIÓN
ANTICIPADA REGISTRADAS EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE**

Periodo : 2011-2015

DEPENDENCIA	2011	2012	2013	2014	2015
1° Juzgado de la Investigación Preparatoria					13
Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)					0
Total general					13

Fuente : SIJ-FEE

**CASOS TOTALES DE PROCESOS INMEDIATOS RESUELTOS SIN TERMINACIÓN ANTICIPADA
REGISTRADAS EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DE LIMA NORTE**

Periodo : 2011-2015

DEPENDENCIA	2011	2012	2013	2014	2015
1° Juzgado de la Investigación Preparatoria					0
Juzgado de la Investigación Preparatoria (5° Penal)					0
Total general					0

Fuente : SIJ-FEE

LISTA DE LOS OPERADORES JURÍDICOS ENTREVISTADOS

ENTREVISTADO		NOMBRE	CARGO
1	JUEZ A	Dr. Oscar CRISÓSTOMO SALVATIERRA	Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte
2	JUEZ B	Dr. Abel PULIDO ALVARADO	Juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte
3	JUEZ C	Dr. Enrique Aurelio PARDO DEL VALLE	Juez del Séptimo Juzgado Especializado Penal de Lima Norte (Ex Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria)
4	JUEZ D	Dra. Emma Doris CLAROS CARRASCO	Juez del Quinto Juzgado Especializado Penal de Lima Norte (Ex Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria)
5	FISCAL A	Dr. Marco Antonio SANTA CRUZ URBINA	Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho)
6	FISCAL B	Dr. Marco Antonio CARRASCO CAMPOS	Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Segundo Despacho)
7	ABOGADO A	Dr. César Henry RAMÍREZ ALEMAN	Abogado de la Defensa Pública de Lima Norte (MINJUS)
8	ABOGADO B	Dr. Rafael FLORES SALAZAR	Abogado de la Defensa Pública de Lima Norte (MINJUS)
9	ABOGADO C	Dra. Ingrid QUISPE PAREDES	Abogada de la Defensa Pública de Lima Norte (MINJUS)
10	ABOGADO D	Dra. Sonia SÁENZ CABANILLAS	Abogada de la Defensa Pública de Lima Norte (MINJUS)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N° 5-2009/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:
ASPECTOS ESENCIALES

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y



deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las partes, los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión sincera, y la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que desaprueba el acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada.

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la intervención del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. *Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada.*

6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente de aquél.

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su estructura procesal.

§ 2. *El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.*

7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –ámbito de aplicación general- y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los delitos aduaneros –Ley número 28008-, las normas de contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.

8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la audiencia respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatario del acuerdo o sentencia anticipada [fase decisoria]. Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente.

Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar –es, precisamente, el segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-. El consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo.

9°. Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presupuesto la afirmación de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la pena.

10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:

- A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.

- B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina ‘pena básica’-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las consecuencias accesorias.
- C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.

11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del *quantum* de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el principio preventivo.

12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. En este último el Juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como el *in dubio pro reo* para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocidos para su conformación sobre la base del consenso procesal.

Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobado el acuerdo si advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar. Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional.

§ 4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada.

13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes-, como al establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad-.

El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y razonabilidad de la pena–, corresponde realizar al Juez.

14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Esta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace es redefinir el marco penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no encuentra obstáculo a su acumulación.

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en una sexta parte –es una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada–. El acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y su exacta dimensión.

§ 5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada.

15°. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad.

El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso. La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o interés legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Esta, como consecuencia del principio dispositivo –eje esencial del sistema de recursos en toda clase de procesos jurisdiccionales–, debe demostrar argumentalmente el perjuicio o agravio sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutive de la resolución judicial.

16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria del acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales –se entiende fuera de Fiscal y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada respeta los límites del acuerdo–. Esta norma no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 416°.1 NCPP, que determina como objeto impugnante en apelación los autos que ponga fin al procedimiento o a la instancia –literal b)– o, en su caso, los que causen gravamen irreparable –literal e)–.

No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1. b) y c) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el ámbito del derecho al recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones que causan estado.

§ 6. *Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común.*

17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento principal.

El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe en la terminación anticipada.

18°. El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un criterio de oportunidad procesal.

Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento –en la medida de lo posible y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o ‘criterios’ contemplados en el artículo 2° NCPP. Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde



realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de la acusación.

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo "criterios de oportunidad", los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP.

19°. A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal.

20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurre el acusado concernido o los otros si fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal.

Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no será posible.

21°. De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación pretoriana de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida en el artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal.



III. DECISIÓN

22°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7° al 21°.

24°. **PRECISAR** que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del estatuto orgánico.

25°. **PUBLICAR** el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial "El Peruano". Hágase saber.

Ss.

GONZALES CAMPOS

SAN MARTÍN CASTRO

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

VALDEZ ROCA

BARRIENTOS PEÑA

BIAGGI GÓMEZ

MOLINA ORDOÑEZ

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL PENAL

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

ZEVALLOS SOTO



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

PODER JUDICIAL
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 09 -2011-CSJLN / PI

Independencia, veinticuatro de marzo
del año dos mil once.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa N° 065-2011-
CSJLN/PI, el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial establece medidas referentes a la
aplicación del Código Procesal Penal para Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos, en los Distrito Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao, en ese sentido
a dispuesto lo siguiente:

- La Primera Sala Penal Superior Especializada en lo Penal (Reos Libres), en
adición a sus funciones actuará como Sala Penal de Apelaciones; y como tal
tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.
- El Cuarto, Séptimo y Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal con
sede en Independencia, en adición a sus funciones actuará como Primer
Segundo y Tercer Juzgados Penales Unipersonales, respectivamente; y como
tales tendrán competencia territorial en todo el distrito judicial.
Los citados Juzgados Penales Unipersonales cuando las circunstancias de
juzgamiento lo requieran conformarán el Juzgado Penal Colegiado; con
competencia territorial en todo el Distrito Judicial.
- El Quinto Juzgado Especializado en lo Penal con sede en Independencia, en
adición a sus funciones actuará como Segundo Juzgado de la Investigación
Preparatoria.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

PODER JUDICIAL
PRESIDENCIA

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 065-2011-CE-PJ, se crea el Juzgado de la Investigación Preparatoria con sede en Independencia; con competencia territorial en todo el distrito judicial.

Que, en tal sentido, la Presidencia en atención a las atribuciones concedidas y en concordancia con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a las facultades otorgadas, dispone designar a los magistrados que formarán parte del nuevo modelo Procesal Penal, en el marco de la aplicación de la Ley N° 29574, expedida con el objeto de adelantar la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, para delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas al suscrito por el artículo 90, inciso 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Presidencia,

RESUELVE:

Primero: DESIGNAR a los integrantes de la Primera Sala Superior Especializada en lo Penal para Reos Libres, que en adición a sus funciones actuará como Sala Penal de Apelaciones; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial, cuyos integrantes son:

- Dr. JORGE GUILLERMO FERNANDEZ CEBALLOS, quien la Preside.
Juez Superior Presidente de la Sala Penal de Apelaciones.
- Dra. IRIS ESTELA PACHECO HUANCAS, en calidad de Integrante.
Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones.
- Dra. MARIA ELENA JO LAOS, en calidad de Integrante.
Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

PODER JUDICIAL
PRESIDENCIA

PODER JUDICIAL
Walter A. Díaz Segura
PRESIDENTE
del Poder Judicial
del Perú

Segundo: DESIGNAR a la doctora CATALINA JUANA LLERENA RODRIGUEZ, Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal con sede en Independencia, quien en adición a sus funciones actuará como Primer Juzgado Penal Unipersonal; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.

Tercero: REASIGNAR al doctor LUIS ANTONIO LA ROSA PAREDES, Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos al Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal, quien en adición a sus funciones actuará como Segundo Juzgado Penal Unipersonal; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.

Cuarto: DESIGNAR a la doctora ANA MARIA REVILLA PALACIOS, Juez Titular del Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal con sede en Independencia, quien en adición a sus funciones actuará como Tercer Juzgado Penal Unipersonal; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.

Quinto: DESIGNAR a los magistrados doctora CATALINA JUANA LLERENA RODRIGUEZ, doctor LUIS ANTONIO LA ROSA PAREDES y doctora EMMA DORIS CLAROS CARRASCO, Jueces Penales Unipersonales conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando las circunstancias de Juzgamiento lo requieran conformarán el Juzgado Penal Colegiado; con competencia territorial en todo el Distrito Judicial.

Sexto: DESIGNAR a la doctora EMMA DORIS CLAROS CARRASCO, Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal con sede en Independencia, quien en adición a sus funciones actuará como Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

PODER JUDICIAL
PRESIDENCIA

Sétimo: REASIGNAR al doctor ENRIQUE AURELIO PARDO DEL VALLE, Juez del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal con sede en Independencia, quien a exclusividad actuará como Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria; y como tal tendrá competencia territorial en todo el Distrito Judicial.

Octavo: Póngase la presente resolución a conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte (Ministerio Público), Corte Suprema de Justicia de la República, Gerencia General, Gerencia de Personal y Escalafón, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Oficina de Administración Distrital, Órganos Jurisdiccionales comprendidos en la presente resolución y del área de Atención al Público.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PODER JUDICIAL
Walter A. Díaz Zegarra
PRESIDENTE
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

MATRIZ DE CONSISTENCIA

LA EFECTIVIDAD DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: ANÁLISIS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE PERIODO 2011-2015

PROBLEMA	OBJETIVOS	MARCO TEÓRICO	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL ¿En qué medida los dispositivos legales y la jurisprudencia han influido en la aplicación de la terminación anticipada en el Proceso Penal?	OBJETIVO GENERAL Identificar en qué medida los dispositivos legales y la jurisprudencia han influido en la aplicación efectiva de la terminación anticipada como mecanismo de simplificación de procesos y de negociación de penas.	LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL CÓDIGO PROCESO PENAL MARCO NORMATIVO <ul style="list-style-type: none"> • <u>Primario:</u> Sección V del Libro Quinto del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957). • <u>Secundario:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Artículo 2 de la Sección I del Libro Primero del Código Procesal Penal. ➢ Sección II del Libro Tercero del Código Procesal Penal. ➢ Sección I del Libro Quinto del Código Procesal Penal • <u>Terciario:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 	HIPÓTESIS GENERAL Los dispositivos del Proceso Especial de Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal e interpretaciones en la Jurisprudencia limitan la efectividad de la terminación anticipada, como mecanismo de simplificación de procesos y negociación de penas.	VARIABLES INDEPENDIENTES (X) <ol style="list-style-type: none"> 1. El artículo 468° del Código Procesal Penal e interpretación que se realiza en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 a la institución de la Terminación Anticipada. 2. El Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la Terminación Anticipada en el Proceso Especial Inmediato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Investigación <ul style="list-style-type: none"> ➢ Investigación socio-jurídica. • Diseño de la Investigación <ul style="list-style-type: none"> ➢ No experimental • Métodos <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cuantitativo ➢ Inductivo ➢ Deductivo ➢ Analítico • Técnicas de recolección <ul style="list-style-type: none"> ➢ Documental. ➢ Entrevista ➢ Muestreo • Instrumentos <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fichas bibliográficas. ➢ Fichas hemerográficas. ➢ Fichas textuales. ➢ Fichas de Investigación. ➢ Ficha resumen. ➢ Ficha de síntesis ➢ Entrevistas ➢ Estadísticas • Fuentes <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bibliográficas. ➢ Normativas. ➢ Estadísticas ➢ Jurisprudencia
PROBLEMAS ESPECÍFICOS <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cómo ha influido el artículo 468° del Código Procesal Penal, relativo a la oportunidad de la terminación anticipada, en la efectividad de su aplicación? 2. ¿Cuáles son las observaciones a la interpretación que se hace al Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, sobre la oportunidad de la aplicación de la terminación anticipada solo en la fase de la investigación preparatoria? 3. ¿En qué medida el Decreto Legislativo 1194, que obliga al fiscal a la incoación del Proceso Inmediato en los supuestos de flagrancia, suficiencia probatoria, confesión, delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, ha influido en la efectividad de la terminación anticipada? 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la influencia del artículo 468° del Código Procesal Penal, relativo a la oportunidad de la terminación, en la efectividad de la terminación anticipada. 2. Identificar las observaciones al Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, respecto a la interpretación que hacen los Jueces de la Corte Suprema, de que es aplicable la terminación anticipada solo en la etapa de investigación preparatoria. 3. Identificar en qué medida la vigencia del Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la terminación anticipada en el Proceso inmediato, ha influido en la aplicación efectiva de la terminación anticipada. 	MARCO NORMATIVO <ul style="list-style-type: none"> • <u>Primario:</u> Sección V del Libro Quinto del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957). • <u>Secundario:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Artículo 2 de la Sección I del Libro Primero del Código Procesal Penal. ➢ Sección II del Libro Tercero del Código Procesal Penal. ➢ Sección I del Libro Quinto del Código Procesal Penal • <u>Terciario:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS <ol style="list-style-type: none"> 1. El artículo 468° del Código Procesal Penal, referido a la oportunidad de solicitar la Terminación Anticipada del proceso solo a la etapa de Investigación Preparatoria, ha influido negativamente en su aplicación efectiva. 2. La interpretación que hacen los Magistrados de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 es desaprobado por los operadores jurídicos, toda vez que restringe la aplicación de la terminación anticipada solo a la etapa de investigación preparatoria. 3. La vigencia del Decreto Legislativo 1194, referido a la aplicación de la Terminación Anticipada en el Proceso Especial Inmediato, ha influido positivamente en elevar los niveles de efectividad del Proceso de Terminación Anticipada. 	VARIABLES DEPENDIENTES (Y) <ol style="list-style-type: none"> 1. Limitan la aplicación efectiva de la institución de la Terminación Anticipada como mecanismo de simplificación de procesos y negociación de penas. 2. Influye positivamente en elevar los niveles de efectividad del Proceso de Terminación Anticipada. 	